

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador

Departamento de Sociología y Estudios de Género

Convocatoria 2016-2018

Tesis para obtener el título de maestría de Investigación en Sociología

Jóvenes en las zonas rurales de Colombia. Experiencias laborales y expectativas de futuro dentro de la agricultura familiar cocalera. El caso del Corregimiento de Sánchez (Policarpa-Nariño)

Sandra Lineth Luna Sosa

Asesora: Carmen Gómez Martín

Lectores: Daniel Pontón y Luciano Martínez V

Quito, febrero de 2021

Dedicatoria

A todos los jóvenes campesinos que proyectan sus sueños en un escenario hostil de conflicto armado.

Tabla de contenido

Resumen.....	VIII
Agradecimientos.....	IX
Introducción.....	1
Capítulo 1.....	9
Jóvenes de zonas rurales y su relación con los mercados de la violencia.....	9
1. La emergencia de la categoría de juventud en las ciencias sociales.....	10
1.1. Los jóvenes en el campo de la sociología.....	11
1.1.2 Los estudios de juventud en América Latina.....	12
1.2. Pensando en la juventud rural, el territorio y la etnicidad.....	14
2. Las agriculturas familiares y globalización.....	16
2.1. Los jóvenes como parte de la agricultura familiar.....	20
2.1.2. Transiciones e inserción laboral precaria.....	22
2.2.1. La idea del éxito en los jóvenes originarios de zonas rurales.....	24
3. La incidencia de los “mercados de violencia” y las “nuevas guerras” en las zonas.....	26
rurales y sus jóvenes.....	26
3.1. ¿Qué son las nuevas guerras?.....	27
3.1.1. Las “nuevas guerras” y los “mercados de violencia”.....	28
3.2. Un “mercado de violencia” particular: el narcotráfico en escenarios de “nuevas.....	30
guerras”.....	30
3.2.1. La organización interna de la economía del narcotráfico y su criminalización.....	32
3.2.2. Los campesinos en la cadena productiva del narcotráfico.....	33
3.2.3. Los jóvenes del mundo rural. Entre el miedo y la fascinación por la narcocultura...	35
Capítulo 2.....	38
Un recorrido por la comunidad negra de Policarpa y la economía de subsistencia.....	38
en torno a los cultivos de coca.....	38
1. El Pacífico colombiano como región extractiva.....	39
1.2. Colonización del Pacífico e identidad de la comunidad negra.....	41
1.3. Derechos comunitarios y cultivos ilícitos.....	42
2. La situación de Nariño y Policarpa en el conflicto: el desarrollo de la economía cocalera..	44
2.1. Situándonos en Policarpa.....	46
2.1. Empleo rural y economía cocalera en Policarpa.....	49

2.1. Policarpa, marginalidad y abandono del Estado.....	50
Tabla 1. Índice de Pobreza Multidimensional de Policarpa.....	50
2.3. La vulnerabilidad de los jóvenes de Policarpa.....	53
Tabla 2. Cobertura en Educación Municipio de Policarpa año 2015.....	53
3.1. El conflicto en Nariño y Policarpa.....	55
2.4.1. Policarpa y la desmovilización de las AUC, un nuevo auge de violencia.....	59
2.4.2. Un nuevo Acuerdo de Paz con las FARC.....	60
3. Las políticas de erradicación de cultivos ilícitos.....	61
Tabla 3. Aspersión aérea de cultivos de coca (en hectáreas) 2001-2011 en los tres.....	62
principales departamentos productores.....	62
Tabla 4. Intervención (ha) mediante Erradicación manual y Aspersión aérea en Nariño y.....	63
a nivel nacional 2001-2014.....	63
3.6. El acuerdo de paz, un nuevo enfoque en la sustitución de cultivos.....	64
Tabla 5. Principios, componentes y elementos del PNIS.....	64
Tabla 6. Asignaciones por familia.....	66
3.6.1. El PNIS en el departamento de Nariño y las tensiones en su implementación.....	67
Capítulo 3.....	69
Producción agrícola familiar y narcotráfico.....	69
1. Policarpa: presencia de grupos armados, ausencia del Estado.....	70
1.2. Los campesinos ya no piensan sino en la coca.....	74
2. El circuito económico de la coca en su primera fase.....	78
Tabla 7. Inversión en producción de una hectárea de coca, variedad guayaba.....	80
Tabla 8. Costos de la elaboración de un kilo de pasta base de coca.....	82
3. El glifosato pasó y se volvió a sembrar.....	87
3.1. La erradicación manual tampoco fue la solución.....	89
3.2. Otro acuerdo de paz, un nuevo temor.....	91
Capítulo 4.....	93
Los jóvenes frente a los cultivos ilícitos y la violencia. Atrapados en la economía.....	94
de la coca.....	93
1. Los jóvenes y su entrada en el mercado laboral de la coca.....	94
1.2. La distribución del trabajo dentro de las familias. El componente de género.....	98
1.2. Del cocal familiar al trabajo independiente.....	99
1. La independencia se logra con coca.....	102
2.1. Los jóvenes y la educación en el espacio rural.....	103

1. Ascenso social, violencia y narcocultura.....	108
3.1. El campo no es atractivo sin coca.....	112
Conclusiones.....	116
Lista de referencias.....	120
Otros documentos.....	131

Ilustraciones

Tablas

Tabla 1. Índice de Pobreza Multidimensional de Policarpa.....	50
Tabla 2. Cobertura en Educación Municipio de Policarpa año 2015.....	53
Tabla 3. Aspersión aérea de cultivos de coca (en hectáreas) 2001-2011 en los tres.....	62
principales departamentos productores	62
Tabla 4. Intervención (ha) mediante Erradicación manual y Aspersión aérea en Nariño.....	63
y a nivel nacional 2001-2014	63
Tabla 5. Principios, componentes y elementos del PNIS.....	64
Tabla 6. Asignaciones por familia.....	66
Tabla 7. Inversión en producción de una hectárea de coca, variedad guayaba.....	80
Tabla 8. Costos de la elaboración de un kilo de pasta base de coca	82

Gráficos

Gráfico 1. Hogares de población entre 5 y 24 años que no asiste al sistema educativo.....	54
y no es bachiller debido a hechos violentos	54
Gráfico 2. Las cifras del Conflicto Armado en Policarpa	58

Fotografías

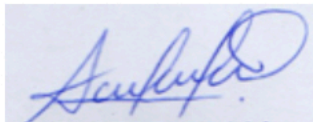
Fotografía 1. Recolección de hojas de coca. Fuente: Trabajo de campo	84
Fotografía 2. Centro de acopio. Fuente: Trabajo de campo	84
Fotografía 3. Almacenamiento de la hoja de coca. Fuente: Trabajo de campo	84
Fotografía 4. Procesamiento de la hoja de coca. Fuente: Trabajo de campo	85
Fotografía 5. Pasta base de coca. Fuente: Trabajo de campo.....	85
Fotografía 6. Centro educativo El Cocal. Fuente: Trabajo de Campo	104
Fotografía 7. Centro educativo El Cocal. Fuente: Trabajo de Campo	104

Declaración de sesión de derechos de publicación de tesis

Yo, Sandra Lineth Luna Sosa, autora de la tesis titulada “Jóvenes en las zonas rurales de Colombia. Experiencias laborales y expectativas de futuro dentro de la agricultura familiar cocalera. El caso del Corregimiento de Sánchez (Policarpa-Nariño)” declaro que la obra es de mi exclusiva autoría, que la he elaborado para obtener el título de maestría de Investigación en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Cedo a la FLACSO Ecuador los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, bajo la licencia Creative Commons 3.0 Ecuador (CC BY-NC-NC3.0 EC), para que esta universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando el objetivo no sea obtener un beneficio económico.

Quito, febrero de 2021



Sandra Lineth Luna Sosa

Resumen

La presente investigación pretende entender, desde una mirada sociológica, cómo se produce la vinculación laboral de jóvenes de zonas rurales colombianas en la agricultura familiar ligada a la coca. Para ello hemos centrado el estudio en un pequeño corregimiento llamado Sánchez, en el municipio de Policarpa, departamento de Nariño, y más particularmente en dos de las veredas que forman parte de este corregimiento: El Cocal y Las Varas. La vida de estas comunidades se encuentra marcada por la siembra de la coca como actividad económica principal, no obstante, el carácter ilegal de las plantaciones ha hecho que dichas comunidades se encuentren vinculadas directamente con el narcotráfico, lo que hace de esta zona un lugar de disputa para distintos grupos armados relacionados a su vez con el conflicto histórico colombiano.

En este escenario, en el que los jóvenes crecen apegados a las tareas del campo, por su vinculación familiar, el cultivo de la coca aparece como una economía rentable, capaz de mejorar las condiciones materiales de los jóvenes y permitirles, mediante el trabajo, la independencia económica y la proyección de ambiciones futuras. Los jóvenes trabajan en la plantación, recolección y procesamiento de la hoja. Sin embargo, debido al carácter ilegal de la actividad, los jóvenes tienen también que lidiar con distintos conflictos socioculturales asociados al cultivo, y al contexto particularmente hostil de la presencia de grupos armados y las disputas territoriales entre los mismos.

Por medio de un trabajo de investigación cualitativo centrado en técnicas etnográficas, en la que se destaca la realización de veinte entrevistas semiestructuradas a jóvenes de la localidad, la investigación muestra cómo este tipo de economía es asumida por los jóvenes como una posibilidad de salir de las dificultades estructurales que supone vivir en un campo, al no existir una economía agrícola legal rentable. En el trabajo se visibiliza la realidad cotidiana de estos jóvenes, mostrando sus posturas sobre lo que implica vivir la juventud en condiciones de marginalidad y violencia.

Agradecimientos

Le agradezco de manera especial a Carmen Gómez, mi asesora, por su instrucción y paciencia durante el tiempo que duró la investigación. Del mismo modo, quiero expresar mi respeto y gratitud a los líderes sociales que me ayudaron con observaciones y sugerencias, en especial a Luis Guevara, Nelly García y Clara Mendoza, por pensar que era necesario contar lo que pasa en su territorio. Finalmente, quiero agradecer a los jóvenes de Sánchez que me confiaron parte de su vida para que otros pudieran entender sus sueños de futuro y su anhelo de un campo en paz.

Introducción

El viaje para llegar hasta Sánchez se inició un sábado del mes de agosto de 2018. Partí en compañía de una líder comunitaria y representante de la COCCAM en Policarpa, la señora Nelly García¹ desde un punto ubicado en la vía panamericana en el departamento de Nariño, denominado El Remolino. Nos embarcamos en una camioneta para realizar un viaje de 5 horas por una carretera de tercer orden, bajo un calor intenso. Durante el recorrido fuimos atravesando distintos poblados como Policarpa, que constituye la cabecera municipal de esta zona, allí nos detuvo en un primer retén del ejército. Los militares solicitaron documentos de identidad y preguntaron sobre el motivo del viaje, tras contestarles atravesamos el retén sin mayor inconveniente y nos fuimos internando en la selva, bordeando siempre los márgenes del río Patía.

Mientras avanzamos en el recorrido, Nelly, me fue indicando el nombre de poblados deshabitados, antes centros de negocios, que se quedaron abandonados cuando lograron que la carretera se internara en la selva. En los pequeños caseríos, construidos con tablas y techos de zinc, se evidenciaba el paso de la guerra. Los disparos en las paredes de las casas y los letreros de grupos armados como las AUC, Gente del Orden o las FARC, son una muestra del conflicto intenso que ha vivido y vive la región; “están abandonados, el negocio está adentro, en la selva” me dice Nelly. A medida que el negocio se desplazó también se abandonaron las escuelas y las casas. La carretera es estrecha y polvorienta, hay grandes abismos, pero finalmente logramos llegar a Sánchez.

Justamente, antes de llegar, nos detuvo un segundo retén militar, nos volvieron a pedir documentos de identificación y, finalmente, nos dejaron pasar. En Sánchez se observa un caserío pequeño con infraestructura básica, el parque, la iglesia, el colegio, y algunas viviendas. Gente joven, la mayoría negra,² llena las calles, hay ventas ambulantes y la música estridente suena en todas direcciones. El comercio se ubica en un punto conocido como “Paso

¹ Todos los nombres que aparecen en la tesis con respecto a los entrevistados son ficticios. Esto se hizo para salvaguardar la identidad de nuestros interlocutores debido a la violencia que recorre hoy por hoy la región objeto del estudio.

² Es necesario aclarar que utilicé la palabra población negra o comunidades negras atendiendo a la redacción de la ley 70 de 1993, que adoptó en Colombia el término de comunidades negras definiéndolas como: “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propios usos y costumbres dentro de la relación como poblado, que revelan y conservan una conciencia de identidad que los distingue de otros grupos étnicos” (Ley 70 de 1993, artículo 2). Se ha respetado no obstante a lo largo del relato las autodenominaciones de las personas entrevistadas que utilizaban tanto la palabra negro como afrodescendiente.

Real”, aquí el río se muestra mucho más caudaloso, de su orilla salen y llegan lanchas, no hay más carretera, estamos en el límite...

.....

La población negra de Policarpa vive una fuerte situación de desigualdad social. La marginalidad y la violencia disminuyen la posibilidad de bienestar, en especial de los jóvenes, inmersos en estas inequidades estructurales que provocan que sus formas de subsistencia se direccionen, mayoritariamente, a continuar las actividades laborales en la que ya están inmersos sus padres: la economía entorno a las plantaciones de coca.

Considerando que la transición a la vida adulta constituye un periodo en el que las desigualdades se cristalizan afectando las aspiraciones educativas y laborales (Casal, Masjoan y Planas 1988; Salas y de Oliveira 2013; Durston 1998), surgen una serie de cuestionamientos sobre las oportunidades y restricciones que se derivan de la condición social en la que viven estos jóvenes en Sánchez. Igualmente, sobre las desventajas que supone vivir en un territorio marginal y condicionado por la economía ilegal, que además es el escenario de disputa territorial de distintos actores armados.

Entre estos cuestionamientos se encontraba el conocer si la coca, pese a su carácter de actividad ilegal y las condiciones de violencia que lleva aparejadas, permitía realmente a estos jóvenes superar su condición de vulnerabilidad y sortear las dificultades de pobreza. Si este recurso económico les permitía continuar con sus estudios o pensar en un trabajo rentable futuro y dentro de la economía formal. Precisamente, dentro de esta perspectiva se enmarca también la necesidad de recabar información sobre las expectativas y temores que generaba en estos jóvenes cocaleros las nuevas circunstancias planteadas por el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, teniendo como uno de sus ejes principales, la supresión de la economía cocalera en el Pacífico.

Por otro lado, esta propuesta investigativa buscaba aportar al debate académico sobre las desigualdades sociales y la juventud, teniendo en cuenta los distintos factores que, en este caso específico, afectan a las expectativas de los jóvenes de las comunidades negras frente a su inserción laboral (origen étnico/racial, clase social). En este sentido, el trabajo ha buscado visibilizar su realidad cotidiana y realizar un acercamiento teórico que pusiera en debate

distintas posturas sobre lo que implica vivir la juventud en condiciones de marginalidad y violencia. Teniendo en cuenta todos estos elementos, planteamos como pregunta de investigación: ¿Qué implicaciones tiene en las aspiraciones laborales de los jóvenes del corregimiento de Sánchez (municipio de Policarpa-Nariño) el estar inmersos en una economía ilegal basada en la producción de coca?

Para contestar la pregunta y desarrollar el argumento central establecimos igualmente cuatro objetivos específicos. El primero, de corte más histórico, estaba orientado a analizar la evolución de la economía de la coca dentro del departamento de Nariño y en Sánchez con el fin de entender el peso y la significación de esta actividad en la vida diaria de la población afrodescendiente de esta comunidad.

El segundo objetivo buscaba entender las formas de vinculación de las familias de Sánchez a la economía de la coca, prestando atención a las consecuencias sociales derivadas de la ilegalidad de los cultivos, y a la relación que se establece entre la población y los grupos armados que se disputan el territorio. El tercer objetivo trataba de conocer de forma más específica las formas de inserción de los jóvenes en la economía familiar cocalera, prestando atención a las percepciones y preocupaciones de los jóvenes con respecto a su actividad, y el modo en que esta economía repercute en sus aspiraciones de futuro. Dentro de este objetivo se trataba de tener en cuenta también las nuevas circunstancias del Acuerdo de Paz para entender las expectativas y preocupaciones a nivel económico-laboral que dicho acuerdo ha despertado en los jóvenes.

Enfoque teórico de la investigación

En la investigación se han interrelacionado tres conceptos que nos han permitido armar la estructura teórica: “juventud rural”, “agricultura familiar” y “mercados de violencia”. Estos tres conceptos se conectan en la explicación de cómo la economía que se desarrolla en territorios específicos marcados por formas de violencia y problemáticas sociales de tipo estructural, lleva a la formación de relaciones de desventaja social que afectan de forma significativa a las comunidades y grupos familiares insertos en estos territorios, y de forma exacerbada a los jóvenes y sus expectativas laborales.

La primera categoría, “juventud rural”, pone de relieve ciertos debates en torno al concepto de juventud para pensar las diferencias socioeconómicas, los riesgos y la vulnerabilidad ligados

al hecho etario, y cómo influyen estos elementos en la transición de la juventud a la edad adulta (Bourdieu 2000, Reguillo 2000, Souto 2007). Este momento está influenciado normalmente por estructuras económicas y sociales que explican mecanismos de transición distintos, lo que hace que las expectativas de los jóvenes choquen en ocasiones con la realidad, determinando la inserción de los jóvenes en el tejido social de la población adulta (Casal, Masjoan, Planas, 1988).

A su vez, estas estructuras económicas, sociales y culturales, tienen una relación directa con el territorio, con el contexto socio espacial en el que los jóvenes viven, el cual actúa como un factor determinante en la construcción de lo que significa ser joven. Weisheimer (2009), Gutierrez y Bonilla (2016) y Osorio (2016), aclaran que ser joven en el espacio rural puede significar cargar con todo el peso de las desigualdades estructurales generadas por la escasez de oportunidades económicas que se viven en el territorio y que marcan la inserción en el mercado laboral, así como sus aspiraciones de movilidad social, las mismas que, como sostiene Kay (2009), pueden deberse a falta de presencia del Estado en acciones específicas para el fortalecimiento de los derechos laborales y condiciones dignas del trabajo.

El segundo concepto, la “agricultura familiar”, se relaciona precisamente con una de las principales formas de inserción de los jóvenes rurales al mundo del trabajo. Llambi y Pérez (2007), Matijasevic y Ruíz (2003), Kay (2009), Breton (1993) y Weisheimer (2009), coinciden en definir la “agricultura familiar”, como una de las bases de la economía campesina, en la que el trabajo de todos los miembros de la familia es fundamental para la subsistencia. Al ser la familia y la tierra el principal núcleo socializador de trabajo, los jóvenes agricultores viven condiciones particulares, asociadas a la tenencia de la tierra, el aprendizaje de las tareas del campo, la diversificación productiva, etc., que marcan su transición hacia la vida adulta bajo estas condiciones (Durston 1998; Pérez Sainz y Minora Salas 2004).

La posibilidad de encontrar un trabajo digno resulta mucho más compleja cuando el campo es un escenario de violencia, o está marcado por conflictos armados. De ahí, que el tercer eje analítico esté relacionado con el concepto de “mercados de violencia”. Kululambi, (2003) y Elwert (2002), lo utilizan para referirse a las economías que se instauran en lugares de conflicto armado y que se mueven con dinamismo gracias al ambiente favorable que les

propicia la guerra, particularmente aquellas que Kaldor (2001) y Münkler (2005) denominan “nuevas guerras”.

El narcotráfico puede aparecer con facilidad en estos escenarios, volviendo al espacio rural aún más complejo. Los campesinos pasan a formar parte de la división del trabajo que supone la economía de la droga, pues a través de la siembra de cultivos ilícitos los campesinos se incorporan en la cadena productiva del narcotráfico, el cual termina por regular, no solo la condición económica, sino también la parte social, influyendo en los intereses de la comunidad, sus jóvenes y sus posibilidades laborales (Dombois 1998; Duncan 2013; Laserna 2011 y Pontes 2012).

Marco metodológico de la investigación

Esta investigación se basa en una metodología cualitativa, la cual se interesa por comprender la lógica interna de los fenómenos y las realidades analizadas, enfocándose principalmente en los aspectos socioculturales (Sandoval, 1996). En este caso, la metodología permitirá la recolección de relatos que den cuenta de la vinculación de la comunidad de Sánchez, y en especial de los jóvenes, con la economía de la coca, así como su relación con los grupos armados que hacen presencia en el territorio.

Dentro de las posibilidades de acercamiento a la realidad social y recolección de información que propone este tipo de investigación, se ha escogido el uso de la etnografía, la cual “pone atención en lo cotidiano, en el conocimiento cara a cara de comunidades y grupos” (Marcus 2001, 113), permitiendo de este modo un contacto directo entre el investigador y la realidad estudiada. A través de este acercamiento se propuso mirar la realidad social y económica de la comunidad, pero especialmente entender cómo viven esa realidad los jóvenes del corregimiento.

Hay que señalar igualmente que la economía cocalera es común en varias regiones del campo de Colombia. El Putumayo, por ejemplo, región de la que soy oriunda, es también un departamento cocalero, por lo que las vivencias de los jóvenes en esta economía no me son ajenas. El interés, sin embargo, por centrarme en Sánchez y no en otros lugares de Nariño o del mismo Putumayo, es porque conocía personalmente a líderes sociales de esta comunidad y, por lo tanto, tenía claras sus problemáticas particulares, facilitándome, además, el acercamiento y la estancia. A pesar de esta ventaja, el trabajo de campo requirió de discreción

en el acercamiento a los jóvenes y líderes comunitarios, pues se trataba de sondear en problemas sociales relacionados con la violencia, por ello se trabajó exclusivamente con jóvenes que mantenían un vínculo cercano con los líderes comunitarios a quienes conocía previamente.

En cuanto a la temporalidad, esta investigación tomó como referencia el periodo de introducción de la coca en este territorio (finales de la década de 1990) hasta 2018, momento en el que ya se estaba implementando los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, y en el que existían algunos avances sobre cómo se iba a producir la sustitución de los cultivos de coca.

En un primer momento la investigación buscaba entender cómo se vinculan los jóvenes a dos economías ilegales: la coca y la minería, pero después de realizar un primer acercamiento constaté que era la coca la principal actividad económica del territorio; inclusive que ésta había desplazado a la minería, aunque no la había hecho desaparecer, tomando relevancia cuando existen problemas de erradicación de cultivos ilícitos.

El trabajo de campo se realizó en Sánchez desde agosto a octubre de 2018. En un primer acercamiento se realizó una visita exploratoria para establecer contactos y definir de mejor manera el área de estudio, se realizaron charlas informales y algunas entrevistas a algunos líderes comunitarios y se empezó a buscar el acceso hacia las veredas, para conocer de primera mano cómo se organiza la producción cocalera en las fincas. Con este propósito se realizó una visita a dos fincas cocaleras, lo cual fue posible gracias a la mediación del señor Luis Guevara, presidente del Consejo Menor del Consejo Comunitario para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño (COPDICONC).³

Posteriormente, se realizaron 7 entrevistas semiestructuradas, a líderes comunitarios y padres de familia. Del mismo modo, se trabajaron entrevistas semiestructuradas en las que se incluyeron a 20 jóvenes, hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y 24 años como principal grupo de la investigación. 8 de los jóvenes entrevistados son de la vereda El Cocal, 6 pertenecen a la vereda Las Varas y 6 jóvenes son de la cabecera corregimental de Sánchez. Las entrevistas ayudaron en la recolección de información sobre las condiciones

³ Fundada el 10 de agosto de 1996 y legalmente constituida el 4 de marzo de 1997.

sociales y económicas derivadas del cultivo de coca y aportaron datos para conocer el sentido que los jóvenes le otorgan a esta economía.

Del grupo de jóvenes estudiado observamos que tienen características socioeconómicas homogéneas. Sus familias son de pequeños campesinos cocaleros, dueños de fincas de entre 1 y 6 hectáreas, que comparten parecidas dificultades al vivir en un territorio rural alejado de la urbe, con limitada presencia del Estado, con una deficiente infraestructura básica (agua, luz, alcantarillado, carreteras) y en donde la cotidianidad está marcada por el constante temor que genera la presencia de grupos armados.

De modo complementario a las entrevistas, también se realizó un análisis documental de diversos informes oficiales e investigaciones de entidades como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), al igual que informes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que contienen datos sobre la vulnerabilidad de la población estudiada en relación con la violencia armada. Del mismo modo, se realizó una búsqueda de noticias en prensa escrita, relacionadas con el conflicto en el departamento y en Policarpa durante los años 2003-2016. También fue necesario recurrir a varios monitoreos sobre los cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con la finalidad de entender cómo ha cambiado el cultivo de la coca en el departamento y la relación de los cultivos con la violencia.

En el territorio se realizó también un trabajo importante de observación participante en reuniones organizadas por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, (COCCAM) en donde se abordaron temas relacionados con el manejo de los subsidios para dejar la coca y las amenazas que recibieron líderes comunitarios que buscaban difundir los programas de erradicación de cultivos (Reuniones 15 y 25 de agosto de 2018). En las reuniones del Consejo Comunitario Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño (COPDICONC);⁴ se abordaron los temas anteriores y además otros relativos a la organización comunal para llevar luz eléctrica a zonas rurales (Reuniones 3, 10 y 15 de octubre de 2018). Si bien las organizaciones como tal, no son el principal grupo objetivo, el realizar esta observación permitió conocer más sobre la problemática social que vive la comunidad y los jóvenes.

⁴ Fundada el 10 de agosto de 1996 y legalmente constituida el 4 de marzo de 1997.

El acceso al territorio resultó relativamente fácil, gracias a los contactos previos ya establecidos, con la COCCAM y COPDICONC, quienes finalmente me facilitaron el acercamiento a los jóvenes y las familias. Sin embargo, siempre se me sugirió no hacer entrevistas en la calle, tomar fotografías o llamar la atención innecesariamente, por ello las entrevistas se realizaron en lugares seguros sugeridos por quienes me acompañaron. El contacto con los jóvenes y con la gente en general resultó un poco incómodo cuando estaba de por medio la grabadora. De hecho, las conversaciones eran mucho más fluidas y detalladas cuando no estaba encendida, aun así, los encuentros con los jóvenes fueron más fluidos, pues les interesaba saber por qué quería conocer lo que pensaban de Sánchez y sobre qué podía escribir sobre ellos.

Estructura de la tesis

La tesis consta de cuatro capítulos que buscan esclarecer la pregunta de investigación y los objetivos planteados. El primer capítulo corresponde al marco teórico y en él se desarrollan y articulan los conceptos de “juventud rural”, “agricultura familiar” y “mercados de violencia”. El segundo capítulo, contextual, contiene una mirada retrospectiva sobre lo que significó para el departamento de Nariño y para Policarpa, la implantación de los cultivos de coca en términos económicos, de vulnerabilidad social y de violencia. El tercer capítulo, trabaja sobre los cambios sociales a nivel de la unidad productiva familiar que subyacen a la llegada de la coca y la continuidad en la siembra. Finalmente, en el cuarto capítulo, se describe cómo es la inserción de los jóvenes de Sánchez en la economía agrícola cocalera. Este capítulo detalla lo que los jóvenes piensan sobre la actividad que realizan en relación a la economía, el trabajo, la educación y la vivencia de la violencia, además de sus expectativas sobre el Acuerdo de Paz, entre el gobierno y las FARC, que contempla la supresión de los cultivos ilícitos.

Capítulo 1

Jóvenes de zonas rurales y su relación con los mercados de la violencia

Introducción

Este capítulo trata de entender desde un punto de vista teórico la situación de los jóvenes que proceden de familias dedicadas a la agricultura familiar cocalera en el municipio de Policarpa, Departamento de Nariño. Se trata de mirar el trabajo cocalero desde el punto de vista de los jóvenes, prestando atención a sus preocupaciones respecto de esta actividad y la importancia que le otorgan a esta economía en la elaboración de sus proyectos futuros. Para ello tendremos en cuenta tres ejes analíticos distintos.

El primero está relacionado con la categoría de “juventud rural”. Dentro de él revisamos dos cuestiones: la emergencia de la categoría de “juventud”, deteniéndonos en los aportes de autores como Bourdieu (2000), Reguillo (2000), Souto (2007), quienes dan cuenta de la activación de distintos mecanismos de exclusión y desigualdad que se agudizan en esta etapa de la vida, condicionando el tránsito hacia la edad adulta. Además, se hace énfasis a la mirada a la categoría de “jóvenes” que se realiza desde los aportes de Weisheimer (2009), Islas (2008) y Roberti (2015), definiendo la corriente clasista y la generacional, principales enfoques sociológicos desde los cuales se ha pensado la juventud. Por otra parte, nos centramos en la teorización de esta categoría en América Latina, la cual ha estado vinculada a la noción de desarrollo y cultura (Reguillo 2000; Fexia 2006; Pleniscar 2013; Islas, 2008).

Finalmente, este apartado describe las particularidades que tienen los jóvenes rurales, debido a factores como la edad, el espacio y la posición social. Del mismo modo se cuestiona, a partir de autores como Weisheimer (2009) y Osorio (2016), la condición de invisibilidad en la que se encuentran los jóvenes rurales tanto en las políticas públicas como en la academia. Al respecto Durston (1998) y Kessler (2006) hacen énfasis en la dificultad de establecer los límites de la “juventud rural”.

El segundo eje teórico, se centra en la noción de “agricultura familiar” y su relación con el de “juventud rural”. Mientras que algunos autores como Llambi y Pérez (2007), Matijasevic y Ruíz (2013) y Kay (2009), definen las nuevas complejidades del campo con la globalización, Breton (1993) y Weisheimer (2009), entre otros, señalan el modo en que se ha mantenido la “agricultura familiar” hasta el presente, como una forma de producción que se basa en la

familia como fuerza de trabajo. Una vez hechas estas precisiones, se detalla la situación de los jóvenes rurales como parte de familias agricultoras. Se describen aspectos como el aprendizaje de las tareas del campo, el funcionamiento económico del hogar y las preocupaciones de los jóvenes, derivadas de su condición. Ahí es importante destacar los procesos de transición a la edad adulta, las tensiones (Casal, Masjoan y Planas, 1988; Mora Salas y de Oliveira, 2013), los problemas derivados de la inserción laboral (Durston 1998; Pérez y Salas 2004; Kay 2009), la idea del éxito (Vásquez 2010; Osorio 2016) y las incidencias del género sobre esta categoría Sampedro (2000).

El tercer eje teórico, inicia con una conceptualización a partir de autores como Kaldor (2001), Münkler (2005), Duffield (2004), de lo que son “las nuevas guerras”, definiendo las particularidades de los conflictos bélicos en la actualidad, los cuales pueden venir acompañados, como sugieren Elwert (2002), Münkler (2005) y Kululambi (2003) de la instauración de “mercados de violencia”, que se desarrollan, precisamente, en el ambiente favorable que les propicia las guerras. Por la particularidad de la investigación, en el siguiente segmento, nos dedicaremos a describir el narcotráfico como “mercado de violencia” y las particularidades de economía en relación con las “nuevas guerras”, haciendo énfasis a partir de autores como Dombois (1998) y Duncan (2013), sobre las características de esta economía y la división del trabajo que ésta supone, de manera especial para los campesinos, que son el primer eslabón en la cadena de producción (Laserna, 2011; Pontes, 2012). Finalmente, este apartado termina haciendo énfasis en las formas de legitimación de esta economía a través de lo que autores denominan “narcocultura” y su relación con los jóvenes.

1. La emergencia de la categoría de juventud en las ciencias sociales

El concepto de juventud es complejo, no existe un acuerdo sobre los rangos de edad que incluye el ser joven. Para Naciones Unidas incluiría personas entre los 15 y 29 años, mientras que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los rangos de edad estarían entre los 15 y los 24 años. Para Bourdieu (2000), la caracterización etaria es una de las principales dificultades que encierra el definir qué significa ser joven, puesto que la representación de la división entre jóvenes y adultos está mediada por una cuestión de poder que se construye socialmente, y es al mismo tiempo una cuestión cultural, pues las sociedades definen diferentemente qué significa ser joven. En este sentido, Bourdieu (2000) reconoce la pluralidad de los jóvenes y propone pensar en el término “juventudes”, puesto que los jóvenes no constituyen un contingente homogéneo, sino que están sujetos a condiciones particulares.

Dentro de estas condiciones se encuentran las estructuras económicas, sociales y culturales que, a su vez, tienen una relación directa con el contexto socio espacial en el que los jóvenes viven. En este mismo sentido, Reguillo (2000), sostiene que la caracterización de los jóvenes en torno a la edad no se agota en el referente biológico, sino que más bien existen diferencias al interior de una misma sociedad en función de los lugares que los jóvenes ocupan en ella, por lo que el contexto específico en que viven es fundamental a la hora de definirlos.

Para Gonzales (2003), la juventud aparece como el motor de la expansión de la modernidad-urbana, propia del capitalismo, que se acompaña también de la invención de conceptos como la familia, la escuela y la niñez. Reguillo (2000), ubica también el surgimiento de la categoría “jóvenes”, a partir del periodo de la segunda postguerra cuando se dio una mejor esperanza de vida de la población productiva. Un periodo en el que los jóvenes emergen como sujetos de derecho y logran una visibilización social.

La juventud como hoy la conocemos es propiamente una «invención» de la posguerra, en el sentido del surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una geografía política en la que los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos y valores. La sociedad reivindicó la existencia de los niños y los jóvenes, como sujetos de derecho y, especialmente, en el caso de los jóvenes, como sujetos de consumo (Reguillo 2000, 23).

La nueva realidad, sostienen Reguillo (2000) y Souto (2007), forzó a la sociedad a reorganizar la inserción de los segmentos más jóvenes, frenando su acceso al mercado laboral y regulando las condiciones de trabajo de niños y adolescentes. Los jóvenes fueron retenidos por más tiempo en las instituciones educativas. Éstas empezaron a actuar repartiendo el conocimiento y como mecanismo de control social. Otras instituciones supusieron además la creación de normas que regularon el acceso al mercado laboral, o que ayudaron a distinguir –a través de la edad– a los niños de los adultos, por ejemplo, a través del servicio militar o la posibilidad de voto (Souto 2007).

1.1. Los jóvenes en el campo de la sociología

En el campo sociológico el interés por entender a la juventud como un fenómeno sociocultural e histórico (Weisheimer 2009) da paso, con el tiempo a un abanico amplio de enfoques, aunque contenidos en dos corrientes principales: la clasista y la generacional

(Machado 1996, citado en Islas 2008). La primera, según Islas (2008), considera que la clase social es un elemento importante que define las expectativas de los jóvenes. El autor señala que tomando como referencia los trabajos de Marx y Engels, este tipo de estudios centran su análisis en la vinculación de los jóvenes a la “lucha de clases” y a la identificación de los jóvenes con organizaciones obreras y campesinas.

Islas (2008), sostiene que fue la Escuela de Frankfurt la que se interesó por los estudios generacionales tratando de responder a la relación existente entre la renovación biológica y vital de los seres humanos y la construcción histórica de las sociedades. Este enfoque, según Islas (2008), permite un análisis en el que se articula el tiempo biográfico y el tiempo histórico de los jóvenes. Sobre este mismo enfoque Roberti (2015), cuestiona la construcción “positivista” de las generaciones al considerar que la generación no puede comprenderse como un grupo social definido únicamente a partir de la coexistencia de un tiempo histórico común, sino que hace falta que los individuos, además de compartir los mismos acontecimientos sociales en un periodo común de sus vidas, lo hagan desde la misma posición social. Entre los principales representantes de este enfoque se encuentran José Ortega y Gasset (1923) y Karl Mnnheim (1928).

Dentro de este mismo tipo de enfoques se encuentra la sociología de la transición, surgida a mitad de la década de 1970. Roberti (2015), señala que este tipo de estudios se interesan en el devenir de los jóvenes en adultos, adentrándose en el campo de los estudios biográficos. Este enfoque concibe la juventud como un proceso social de emancipación que atañe aspectos familiares (independencia del hogar) y económicos (posición social y enclasmientos). Además, la teoría de la transición cuestiona la determinación etaria de los jóvenes, alejándose de las delimitaciones biologicistas y considerando a la juventud en formaciones sociales específicas (Casal 1996; Furlong y Cartmel, 1997; Galland, 2007). Finalmente, se debe resaltar que la discusión teórica acerca de qué es la juventud continúa, no existe un acuerdo unánime al respecto.

1.1.2 Los estudios de juventud en América Latina

En lo que respecta a América Latina, los jóvenes como categoría social empiezan a ser visibles a partir de la mitad del siglo XX, debido a la reorganización económica generada por el crecimiento industrial, la oferta cultural y el discurso jurídico que empieza a emerger entorno a esta categoría (Reguillo 2000). Feixa (2006) señala que hacia los años 50 y 70, y a

través de disciplinas como la psicología y la sociología, se empieza a hacer de la realidad juvenil un fenómeno estudiable. Sobre los enfoques bajo los cuales se concebían estas disciplinas el autor aclara:

Las miradas y enfoques se prenden de un estructural-funcionalismo norteamericano estigmatizador o de un marxismo europeo instrumental. El primero preocupado por normalizar a los “jóvenes disfuncionales o desviados” derivados de los procesos de industrialización y migración rural-urbana; y el segundo, más interesado por la concientización de clase y la irrupción de los movimientos juveniles, básicamente estudiantiles” (Fexia 2006, 15).

Un acontecimiento que generó gran impulso a las investigaciones sobre juventud fue la declaración por parte de Naciones Unidas de 1985 como el Año Internacional de la Juventud (AIJ). Este hito impulsó trabajos investigativos en la región, coincidiendo con las transiciones democráticas que se dieron en varios países del continente (Plesnicar 2013). Hasta ese momento, los estudios habían tendido a ignorar la dimensión generacional:

Tanto los estudios sobre las comunidades indígenas, como los centrados en sociedades rurales y urbanas, tendieron a ver a sus sujetos de estudio como indios, campesinos, colonos, hombres, mujeres, burgueses, obreros, pero no como niños y niñas, y todavía menos como adolescentes o jóvenes (Fexia, 2006, 15).

Del mismo modo, las investigaciones sobre juventud empiezan a cobrar fuerza bajo el respaldo del Instituto Latinoamericano de Planificación Económico y Social (ILPES), dependiente de la CEPAL. Los estudios realizados se focalizan en los procesos de integración y desarrollo social de los jóvenes y mantienen un sesgo modernizante (Fexia, 2006). En el área urbana, la reflexión académica se interesó por entender a las bandas y las culturas juveniles de la mano de algunos representantes de la escuela latinoamericana de estudios culturales como García Canclini o Martín Barbero. En los últimos años los estudios sobre juventud en América Latina han cobrado fuerza con trabajos investigativos que buscan una comprensión generacional de las juventudes desde una conceptualización contextual (Álvarez, 2018).

Complementando esta visión sociocultural de los jóvenes Reguillo (2000) aclara que esta postura implica, en primer lugar, no conformarse con las delimitaciones biológicas como la

edad, considerando que los jóvenes no comparten de forma homogénea los modos de inserción en la estructura social, sino que existen campos de acción diferenciados y desiguales con distintas aspiraciones de movilidad social. Si bien, la categoría de jóvenes es ambigua, la autora sostiene que los jóvenes deben ser pensados como sujetos de discurso, con capacidad para apropiarse y movilizar los objetos tanto sociales como materiales, es decir, deben ser considerados como agentes sociales.

1.2. Pensando en la juventud rural, el territorio y la etnicidad

Esta investigación se interesa particularmente en un tipo de jóvenes, aquellos que viven en ámbitos rurales y que se encuentran atravesados por una serie de circunstancias y presiones que los llevan a insertarse tempranamente en el ámbito laboral y a involucrarse con el mundo adulto. La “juventud rural” aparece, así como una categoría en la cual el territorio resulta un factor determinante en la significación de ser joven y en el modo en que se vive la juventud. En este sentido, Fernández (2001) sostiene que el territorio es mucho más que una delimitación geográfica y constituye un espacio de pertenencia y referencia para el ser humano.

El territorio rural incluye el desarrollo de actividades económicas, políticas y culturales (Brito 2015), en el que a menudo tienen gran peso las fuentes de recursos existentes, ya sean estas mineras, hídricas, forestales, ganaderas, agrícolas, pesqueras, frutícolas o turísticas, determinando el potencial de crecimiento de este espacio, y sirviendo para generar riqueza y propiciar el crecimiento productivo, despertado por tanto el interés geopolítico en dicho espacio.

El territorio responde en primera instancia a las necesidades económicas, sociales y políticas de cada sociedad, y bajo este aspecto su producción está sustentada por las relaciones sociales que lo atraviesan; pero su función no se reduce a esta dimensión instrumental, pues el territorio es también objeto de operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los actores sociales (individuales o colectivos) proyectan sus concepciones del mundo (Giménez (2000), citado por Brito 2015, 50).

Los territorios rurales son múltiples, y esta diversidad de contextos impacta de manera diferente en la proyección que los jóvenes hacen de sus vidas. Osorio (2016) propone, precisamente, pensar en la construcción del sujeto rural a partir del entramado de relaciones

derivado de las identidades territoriales. El territorio es fundamental para entender las experiencias concretas de los jóvenes, tomando como referencia el lugar en el que viven, el cual ofrece posibilidades y restricciones, que a la vez actúan como determinantes en las satisfacciones y frustraciones que los jóvenes tienen.

Osorio, Jaramillo y Orjuela (2011), señalan que la “juventud rural” puede entenderse a partir de dos marcadores identitarios, el primero es el etario, relacionado con la condición y posición en la sociedad, y el segundo socio-espacial, determinante de situaciones y condiciones de sus pobladores. El segundo marcador hace referencia a lo rural y sus condiciones particulares. Los autores señalan que, la consideración del territorio es un referente importante en la vida social de los jóvenes, puesto que en éste se establecen relaciones sociales, económicas y culturales que pueden explicar cómo se desarrollan las relaciones de poder. Éstas pueden estar atravesadas, además, por factores como el género, la pertenencia étnica y la clase, como vectores que multiplican la diferenciación de las experiencias y la desigualdad. De esta forma, las prácticas que se desarrollan en el territorio constituyen una parte fundamental de las existencias individuales de los jóvenes.

Esta aclaración es importante para dejar de lado el sesgo homogeneizante que pueden mantener las investigaciones sobre jóvenes, tal como lo denuncian Weisheimer (2009) y Osorio (2016), entre otros, quienes señalan la invisibilidad de los jóvenes rurales tanto en la academia como en las políticas públicas, al tiempo que cuestionan el sesgo modernizante bajo el cual se aborda el tema de las juventudes rurales.

Al respecto, González (2003), reitera que la categoría “jóvenes”, forjada a la luz de la modernidad y el capitalismo, se reconoce fundamentalmente como urbana, fruto de las transformaciones económicas, tecnológicas, de la migración campo-ciudad, de la necesidad de especialización y del surgimiento de la industria. Condiciones que hacen que los jóvenes rurales pasen desapercibidos o se conceptualicen en oposición a los jóvenes urbanos, manteniéndose un pensamiento de lo rural como arcaico, conservador y homogéneo con, “un solo actor protagónico: el campesino hombre y adulto. Por lo tanto, la juventud rural aparece como un interregno, una categoría sitiada en intersticios oscuros, casi invisibles” (González 2003, 155).

Es necesario aclarar igualmente que una de las grandes dificultades que encierran los trabajos académicos sobre esta categoría es el establecimiento de los límites de lo que significa “juventud rural”. Al respecto Kessler (2006) señala la existencia de investigaciones que consideran solo a los jóvenes residentes en el campo, a jóvenes de origen campesino o aquellos que por razones familiares se encuentran vinculados al mundo agrícola; inclusive algunas investigaciones incluyen dentro a jóvenes que viven en áreas urbanas pero que mantienen lazos identitarios con lo rural.

Nuestro trabajo sigue, sin embargo, la recomendación de Durston (1998), quien sostiene que es necesaria la construcción de un marco conceptual adecuado y datos empíricos desagregados que contribuyan a dar cuenta de la gran variedad de maneras de vivir la juventud en distintos espacios rurales. Por ello esta investigación se interesa por entender la realidad que viven los “jóvenes rurales” herederos de una tradición agrícola familiar.

2. Las agriculturas familiares y globalización

Este apartado se centra en la noción de “agricultura familiar” como una de las características fundamentales del campesinado, que se ha modificado en los últimos años para adaptarse a las transformaciones que trae consigo la expansión del capitalismo en la agricultura. Precisamente, autores como Breton (1993), Llambí y Pérez (2007), Matijasevic y Ruíz (2013), dan cuenta de los cambios en el espacio rural, producto de la globalización, la cual trae aparejada una nueva conceptualización del campesino más allá de su vinculación con el espacio rural y agrícola.

Las nuevas condiciones en las que se vive la ruralidad hacen que el debate sobre quiénes son los campesinos se oriente a definir este grupo de acuerdo con sus particularidades actuales. Aunque el debate en las ciencias sociales sobre quiénes son los campesinos continúa,⁵ autores como Breton (1993) y Weisheimer (2009), proponen pensar en una de las características principales que tiene el campesinado y que se ha mantenido a lo largo de la historia, se trata

⁵ Breton (1993) da cuenta que, desde el surgimiento de esta categoría, el debate acaecido en las ciencias sociales gira entorno a la comprensión sobre si los campesinos mantienen o no un tipo de economía independiente del capitalismo. El autor señala que: “En el transcurso de los últimos cincuenta años, las ciencias sociales han conceptualizado al campesino como una cultura tradicional (antropólogos funcionalistas y teóricos del “desarrollo”), como una economía específica (¿modo de producción?) Articulada a sistemas económicos más amplios chayovistas), como un segmento social subordinado y heterogéneo (Wolf), o como un residuo histórico en trance de extinción (descampesinistas)” (Breton 1993, 152).

de la noción de “agricultura familiar” la cual hace referencia a “una forma de organización de la producción caracterizada, fundamentalmente, por la utilización mayoritaria de fuerza de trabajo procedente del mismo grupo doméstico (este último culturalmente definido) y por coincidir la unidad de producción con la unidad de consumo” (Breton 1993, 153).

La importancia de tomar en consideración esta forma de producción campesina radica en que este concepto permite traspasar las dificultades teóricas que conlleva la definición de campesinado puesto que, como Breton (1993) aclara, la noción de “agricultura familiar” es común tanto para el campesino tradicional como para el empresario agrícola moderno. La “agricultura familiar” no es una forma de producción ni específicamente feudal, ni específicamente capitalista, sino que se trata de un modo de explotación que ha sido apropiada por diferentes modos de producción, y que permite entender la penetración del capitalismo en la agricultura. Por lo tanto, aunque las concepciones sobre el campesinado se han ido moldeando con el tiempo, la importancia de la “agricultura familiar” se mantiene. En la conceptualización de los campesinos Wolf (1982) identifica en las sociedades campesinas:

Tres factores imprescindibles: la explotación agraria familiar, que se construye al mismo tiempo la unidad de esencial de acción social y de la vida económica; la aldea, marco donde operan las explotaciones domésticas y donde se desarrollan las relaciones sociales; y los vínculos con el mundo exterior (Wolf (1982) citado en Breton 1993, 134).

En el contexto latinoamericano, la consideración de la familia como base de la economía campesina, es un eje de análisis y discusión desde el ámbito académico y desde las políticas públicas, que cobra relevancia a partir de la mitad de los años 70 del siglo pasado, desde cuando se analiza la posibilidad de vinculación de este sector productivo al mercado sin que sea, necesariamente, desestructurado por éste (Martínez, 2013).

Una mirada a la “agricultura familiar” en la región, la ofrecen el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMSP) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). En su análisis sobre el Estado de la Agricultura Familiar en Latinoamérica (2014), destacan que la “agricultura familiar”, que en general, describe la actividad productiva de pequeños agricultores, puede ser pensado desde tres posibilidades. La primera posibilidad hace referencia al constructo teórico detrás de este concepto, una segunda posibilidad se relaciona con la consideración de algún criterio empírico, como puede ser la disponibilidad de la tierra,

el ingreso o el nivel de especialización, que puede facilitar la construcción de tipologías, aunque reconocen cierta arbitrariedad en esta forma de definir esta categoría. Finalmente, se señala que el concepto de “agricultura familiar”, también puede ser pensado desde la política, como una construcción social, que puede ser apropiada por distintos grupos sociales, movimientos u organizaciones que le atribuyen sentidos y significados propios de una acción política.

Pensando en las particularidades que presenta la región, el RIMSP y FIDA (2014), reconocen que en Latinoamérica existe una pluralidad de campos y, por tanto, una gran heterogeneidad de formas de agriculturas familiares dependiendo de cada escenario. Sobre esta heterogeneidad, el análisis aclara que, aunque a menudo, se vincula la “agricultura familiar” con la pobreza, esto no es necesariamente cierto. Lo mismo ocurre con el pensamiento de que estas unidades están desconectadas de los mercados y de las ciudades, por ello señalan que es necesario considerar la importancia de esta forma de producción desde las conexiones que se establecen con el Estado a través de las políticas públicas y con la globalización sociocultural.

Un ejemplo de la pluralidad del campo latinoamericano es descrito por, Machado y Botello (2013), quienes analizan la realidad del campo en Colombia a partir de los resultados proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sobre las Encuestas de Hogares en Colombia, aplicada por última vez en los años 2008-2011. En base a estos datos y en base a encuestas anteriores suministradas por el mismo organismo, los autores destacan dos formas de agricultores familiares en el país, incluyendo en esta tipología a la Agricultura Familiar Especializada (AFE), para dar cuenta de la actividad agrícola de las familias y la Agricultura Pluriactiva, que incluye a hogares con actividades distintas a las agrícolas.

En relación a las características de estas formas de agricultura, los autores destacan que, hacia el 2011, el número de hogares rurales se ubicó en 2.804.714, de los cuales el 38.3% pertenecían a la categoría AFE y 0.1% a los pluriactivos. Aunque los autores destacan el crecimiento de la economía campesina en los últimos años, también reconocen que esta ha estado sometida a difíciles situaciones que no han permitido superar los niveles de pobreza, persistente en el área rural con un 46% para el año 2011. Esta realidad se relaciona, según los autores con la ineficiencia de las políticas de desarrollo y por la difícil situación de los

agricultores en relación al conflicto que vive el país. Esta vulnerabilidad del campo es mayor en áreas en las que se ubican grupos indígenas y afrodescendientes.

El ejemplo anterior de heterogeneidad nos sirve para ilustrar el carácter desigual del impacto de la globalización. Precisamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), llama la atención sobre el carácter desigual e incompleto de la modernización de la agricultura en Latinoamérica, entre los países y al interior de cada país, en donde existe una agricultura familiar bipolar con unidades de producción de diferente dimensión, y con distintas racionalidades, como son la agricultura empresarial, y los pequeños productores o agricultores familiares. Este organismo entiende por Agricultura familiar, aquella producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que, pese a su gran heterogeneidad posee algunas características comunes:

Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el (la) jefe(a) de familia quien participa de manera directa en el proceso productivo; es decir, aun cuando pueda existir cierta división del trabajo, el (la) jefe(a) de familia no asume funciones exclusivas de gerente, sino que es un trabajador más del núcleo familiar” (FAO 2012, 6).

La actividad agropecuaria/silvícola/pesquera/acuícola es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar, que puede ser completada con otras actividades no agrícolas que se presentan dentro o fuera de la unidad familiar (servicios relacionado con el turismo rural, beneficios ambientales, producción artesanal, pequeñas agroindustrias, empleos ocasionales, etc. (FAO 2012, 6).

Volviendo sobre el impacto de la globalización en la agricultura, autores como Llambi, (2012) y Kay (2009), advierten que la penetración del capitalismo en la agricultura ha significado un cambio importante de modernización y tecnologización, aunque esto no significa que hayan disminuido las desventajas y las desigualdades. Al analizar el impacto del neoliberalismo en el campo los autores advierten, que este ha significado para las personas menos oportunidades de acceder a los recursos productivos, y en ocasiones, incluso, ha provocado que pierdan sus propios recursos, como sus tierras, debido a los procesos de acumulación por despojo. Al respecto aclara Llambi (2012) que, si bien es cierto, varias unidades familiares tienen acceso al mercado, la realidad para un gran sector no lo es.

En muchos territorios rurales, con dificultades de acceso y pequeña población, la agricultura familiar suele estar vinculada a unidades de pequeña escala, lo que generalmente supone dificultades de acceso tanto a los activos productivos como a los mercados más dinámicos (Llambi 2012, 129).

Según el autor, la falta de un mercado dinámico es una de las razones que ha llevado a las personas de las zonas rurales a desarrollar actividades no agrícolas en las que los salarios son bajos, flexibles y con una constante feminización del trabajo. Del mismo modo, Kay (2009), advierte que la intensificación de la globalización neoliberal acrecienta las presiones competitivas sobre la agricultura de América Latina, empeorando las condiciones del empleo rural.

2.1. Los jóvenes como parte de la agricultura familiar

Los trabajos sobre juventud rural Durston (1998) y Kessler (2006), entre otros, nos dan cuenta del contacto más próximo y temprano que tienen los jóvenes rurales con el mundo del trabajo respecto a sus pares urbanos. El primer contacto, en la mayoría de los casos, está vinculado con el trabajo en la agricultura familiar. La familia es, siguiendo a Weisheimer (2009), una fuente de socialización profesional a través de la cual se inicia a los jóvenes en el mundo de la agricultura. El autor sostiene que la sucesión en agricultura familiar tiende a ser endógena, con al menos uno de los hijos que suceden al padre en la unidad productiva. Recalca, además, que es poco frecuente que personas que no provienen de una familia agrícola, se dediquen con el tiempo a esta actividad.

Respecto a la forma específica que asumen las relaciones familiares dentro del hogar, Kessler (2006), señala que éstas dependen de la tradición e historia de cada región, aunque recalca que los hogares rurales pueden mostrar una mayor interdependencia entre los miembros del hogar, y que existe, además, una participación de toda la familia en la decisión y estrategias de vida que desarrollan los jóvenes. Debido a la importancia del aporte juvenil en el hogar campesino, Durston considera que, “la etapa juvenil del ciclo de vida suele coincidir con la etapa de mayor prosperidad del hogar campesino, porque los jóvenes pueden aportar a la producción al mismo tiempo que los padres siguen siendo productivos también” (Durston, 1998, 14).

Aclarando algunos aspectos sobre el modo de producción de las familias campesinas Tepicht (1973), citado por Weisheimer (2009), sostiene que la “agricultura familiar” como modo de

producción, hace que la familia se encuentre al interior de una cápsula de *colectivismo interno* y de *individualismo externo*. A esta encapsulación, que ha permitido la permanencia del trabajo familiar en la agricultura a través de la historia, se debe a un fuerte individualismo en relación al exterior y un colectivismo interno riguroso, que subordina el destino personal de cada uno de los miembros al interés del grupo familiar. Esto conlleva, tal como sostiene Durston (1998), a que las transiciones a la edad adulta que realizan los jóvenes tengan, en el espacio rural, particularidades especialmente relacionadas con la forma y organización de la familia. En este sentido, aclara que el hogar rural, a pesar de los intereses divergentes de sus miembros, puede entenderse como un "sistema complejo adaptativo, con mecanismos de retroalimentación individuales y del conjunto que le permiten funcionar para avanzar en pos del bienestar común" (Durston, 1998,10).

El autor concibe la agricultura familiar como una empresa, en la cual existen factores que condicionan las relaciones del trabajo familiar, entre estos se encuentran: la sucesión de una nueva generación de dicha empresa con la correspondiente herencia de la tierra, el aprendizaje del oficio, la comercialización y colaboración con otras unidades de la comunidad. De igual forma, el funcionamiento económico del hogar rural, ya sea de supervivencia o de acumulación, depende de los aportes de todos sus miembros. Dichos aportes están culturalmente definidos y sancionados como una obligación ética esencial. Esta situación hace que los proyectos individuales de los hijos puedan no estar en concordancia con los de la familia, pues los jóvenes también definen sus proyectos en relación a la influencia que ejerce sobre ellos la escuela o los lugares de recreación (Weisheimer 2009).

Por otro lado, las condiciones materiales de la familia campesina influyen sobre los proyectos juveniles. Esta realidad estaría relacionada, según Weisheimer (2009), con la renta de la tierra, de tal modo que la posibilidad de acceso a la tierra determina la intención de los jóvenes de permanecer o no en la agricultura, desempeñando un papel fundamental en los proyectos a futuro. En este sentido, el autor, recalca que continuar en la agricultura como profesión es pensado como posibilidad por jóvenes cuyas familias logran réditos altos gracias a la agricultura.

Por otro lado, Sili, Fachelli, Meiller (2016) y Durston (1998), ponen en evidencia que la posesión de tierras para el cultivo es una de las principales problemáticas de los jóvenes rurales. El vínculo con la tierra afecta la dimensión económica productiva de quienes pueden

ser afectados por una tardía sucesión familiar. El acceso a tierra también se agrava debido a la carencia de políticas públicas capaces de promover dicho acceso para los jóvenes. También debe considerarse que la falta de acceso a la tierra acarrea otra problemática: los jóvenes sin tierra se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, lo que provoca una creciente proletarización de la juventud rural y una creciente dependencia del salario debido a la dificultad de subsistir mediante la agricultura familiar, siendo además una de las principales razones de los jóvenes para migrar (Kessler 2005).

La dificultad del acceso laboral exitoso en el campo también se debe a las dificultades estructurales para acceder al empleo en zonas rurales, a la falta de experiencia de formación, o a la falta de empresas que generen empleos formales (Sili, Fachelli, Meiller 2016). Otra de las dificultades, que contempla para que los jóvenes puedan desplegar sus estrategias de vida en el campo es la limitación que puede suponer el vivir bajo condiciones especiales como guerras y escasez de alimentos, factores que aumentan la inseguridad e incertidumbre de los jóvenes con respecto a las trayectorias de vida futura (Durstun 1998).

2.1.2. Transiciones e inserción laboral precaria

Las aspiraciones de los jóvenes se hacen más evidentes en el periodo de transición de la juventud a la edad adulta. Siguiendo a Casal, Masjoan y Planas (1988), esta transición sería un proceso en el que las expectativas de los jóvenes pueden chocar con la realidad, debido a factores como el contexto sociocultural en el que este cambio se concreta y que determina la inserción de los jóvenes en el tejido social de la población adulta. Sobre esta transición, Salas y de Oliveira (2013), sostienen que debe entenderse como un proceso de emancipación individual, mediante el cual las personas adquieren una mayor autonomía y ejercen un mayor control sobre sus vidas, lo cual se expresa, entre otros elementos, en las posibilidades de actuar a partir de criterios definidos por el individuo.

La transición viene marcada muchas veces por la posibilidad de movilidad social, que se enmarca para muchos jóvenes en la aspiración de una inserción laboral exitosa, la cual está condicionada por aspectos socio-culturales que se corresponden con las exigencias del mercado laboral. Recordemos que los jóvenes rurales al igual que sus pares urbanos están atravesados por la idea del “éxito”, mayoritariamente marcado por las posibilidades reales de trabajo que tienen. Estas posibilidades tanto en el espacio rural como urbano se corresponden con exigencias de un mercado laboral concreto y desigual. Muchos jóvenes tienen una

inserción laboral precaria y deben enfrentar las desigualdades producto de la globalización que se han superpuesto a las desigualdades tradicionales. Así lo reconocen Pérez y Salas (2004), quienes señalan que es en el mercado laboral en donde se sanciona monetariamente gran parte de los recursos de la sociedad, al permitir que entren en juego mecanismos básicos causales de la desigualdad.

Esta nueva desigualdad estaría marcada por lo que los autores denominan la “exclusión laboral”, la cual puede entenderse por el declive del empleo público, la precarización de las relaciones salariales, el desempleo estructural, la migración internacional y la persistencia de una economía de la pobreza. Casal, Masjoan y Planas (1988), analizan la importancia que reviste la inserción laboral en la independencia de los jóvenes, y sostienen que, “la crisis del mercado de trabajo muestra su dimensión en lo social en la generalización de la desocupación, el incremento del trabajo subterráneo y precario, y en la incapacidad de absorción de jóvenes activos” (Casal, Masjoan y Planas, 1988, 101). Una situación que, según los autores, amplía la situación de marginalidad y desarraigo social, afectando de manera directa las expectativas de futuro de los jóvenes, a la vez que incrementa la segmentación y marca periferias sociales.

Entre las principales razones que Kay, (2009) encuentra sobre las dificultades que tienen los jóvenes del área rural de encontrar un trabajo digno en su propio territorio se destaca la falta de presencia del Estado que no toma acciones específicas para el fortalecimiento de los derechos laborales y condiciones dignas de trabajo. Al respecto sostiene que, “a los empleadores les ha sido relativamente fácil evadir la ley de salario mínimo (si tal ley existe en el país) y pasar por alto sus obligaciones en relación con la seguridad social” (Kay, 2009, 616). Para este autor es claro que el efecto de la globalización neoliberal en el campo se basa en lo que denomina la “flexibilidad primitiva” o “flexibilidad salvaje”, que, aunque crea nuevas oportunidades laborales también agudiza la explotación de los jornaleros rurales y multiplica la exclusión social, afectando tanto a hombres como a mujeres. Durston (2005), muestra precisamente la gran heterogeneidad de inserciones laborales de estos jóvenes evidenciándose:

- a) una importante tasa de trabajo familiar no remunerado; b) proletarización rural completa o parcial, en este último caso con c) pluriactividad al combinarse con trabajo no remunerado en las fincas familiares; d) pluriactividad combinándose trabajo familiar y ocupaciones informales no rurales y en otros casos, e) trabajo no agrario en el sector informal y, f) un

sector minoritario -real o potencialmente- inserto en sectores dinámicos del rubro servicios o de la producción agroalimentaria (Durstun 2005, 15).

De este modo, las relaciones laborales en el campo se relacionan con el impacto de las políticas neoliberales, que precarizan el trabajo, sobre todo de los jóvenes. Por otro lado, los problemas de inserción laboral que tienen los jóvenes en el espacio rural también están atravesados por relaciones de género. Sobre el modo en que las relaciones de género se hacen presentes en el espacio rural, Sampredo (2000) sostiene que éstas se manifiestan a través de la invisibilidad del trabajo femenino que pone a la mujer en desventaja frente a los distintos escenarios de desarrollo rural. Además, en el espacio rural estas desventajas se amplían a medida que se deja de ser “joven”, pues la mujer asume roles asociados con lo que representa lo “femenino”, a menudo ligados al matrimonio y la maternidad. El sistema patriarcal al que se ven sometidas se hace evidente en una división del trabajo de acuerdo al género que diferencia entre ámbitos claramente femeninos o masculinos (Sampredo 2000).

En el espacio laboral rural, Sampredo (2000), asocia al trabajo femenino con el ámbito doméstico y con un trabajo eventual o de tiempo parcial, lo que pone a las mujeres en una posición de precarización y desventaja respecto a los hombres. Además, en el ámbito familiar las mujeres en el ámbito rural trabajan en el espacio agrario, lo que las hace parte del mundo productivo, aunque no necesariamente reciban una remuneración por ello.

Del mismo modo, la flexibilidad de las actividades rurales ha afectado particularmente a las mujeres, pues parecen estar más dispuestas a aceptar trabajos temporales y menos pagados que los hombres, lo que ha traído consigo una feminización del trabajo asalariado agrícola (Kay 2009).

2.2.1. La idea del éxito en los jóvenes originarios de zonas rurales

En contraste con las dificultades de acceso laboral que tienen los jóvenes en las zonas rurales encontramos que sus aspiraciones de transición con respecto a la vida adulta están marcadas por la idea del “éxito”. Vásquez (2010) sostiene que el “éxito”, es una idea que tiene su origen en la práctica discursiva de la sociedad y que repercute en las aspiraciones y proyecciones de los jóvenes al ejercer un poder simbólico que promueve, debido a la influencia del neoliberalismo, el individualismo y el ego personal.

Cuando hablamos del discurso del éxito estamos hablando de “algo que la gente habla” y que, aunque quizá no todos quisiéramos entrar en este discurso, las instituciones lo han reproducido de una forma tal que llega a tocar nuestros deseos (y con ello las diversas instancias de nuestra vida) provocando una forma de comprender el poder (Vásquez 2010, 39).

En la difusión de este discurso del “éxito”, se debe considerar lo que Vásquez (2010), define como, “la máquina adultocéntrica”; una máquina institucionalizada y masificadora del deseo que logra que los deseos de los jóvenes se ajusten al sistema, gracias a la reiteración de discursos teóricos en los hogares, escuelas y organismos del Estado, negando de este modo el reconocimiento de las formas juveniles de vivir la vida, pues les enseña qué es el éxito y cómo deben conseguirlo.

Del mismo modo, Sánchez, Salcedo, Rodrigues de Souza (2014), reflexionan sobre el dispositivo escolar, y la asociación de la educación con el discurso del éxito creado por el modelo de modernidad capitalista, el cual funciona como un contenedor de niños y jóvenes y de instancia propedéutica para el mundo del trabajo, y que además instaura un imaginario muy prometedor muy acorde al gran modelo social: educación + empleo = movilidad social. En esta ecuación la movilidad social es entendida como una línea ascendente a una mejor posición de vida en el sistema social, lo cual implica también, mayores niveles de consumo como una forma de cubrir las necesidades de subsistencia y de socialización. Según los autores, esta ecuación atrae a muchos jóvenes, puesto que se vincula a un imaginario social y a estructuras ideológicas que lo refuerzan.

Aunque, en el caso de la educación de los jóvenes rurales latinoamericanos, los autores destacan que hay un incremento de la cobertura y los años de escolaridad en las últimas décadas, siendo mayor en las generaciones actuales que en las de los padres, en varios países de la región. Sin embargo, reconocen que aún existen problemas de acceso y una educación no lo suficientemente buena para cubrir las necesidades actuales. También señalan que en el campo existe una mayor educación de las mujeres en comparación con los hombres al igual que una valoración extra de las competencias laborales aprendidas extra escolarmente.

Por otro lado, Osorio (2016), recalca que, generalmente, se piensa que en el campo existe un limitado acceso a recursos en comparación con los que la ciudad tiene, por lo que la ciudad

ejerce una alta influencia simbólica vinculada a la idea de bienestar y progreso, que atrae a los jóvenes rurales y que convierte a la migración a las ciudades en una de las principales fuentes de empleo para quienes buscan una forma de alcanzar la realización personal (Osorio 2016). Esto provoca que los jóvenes tomen decisiones migratorias atravesadas por conexiones y proximidades entre el lugar de procedencia y el o los potenciales lugares de destino, a pesar de que las posibilidades laborales en el área urbana también son reducidas (Osorio 2016). En este sentido, si bien la estrategia de superación de muchos jóvenes de zonas rurales está asociada a la idea de migración, otros deciden quedarse en el campo en donde las posibilidades laborales fuera de la agricultura son escasas.

3. La incidencia de los “mercados de violencia” y las “nuevas guerras” en las zonas rurales y sus jóvenes

Este último apartado busca desarrollar la relación entre esos espacios rurales, marcados por agriculturas familiares y las problemáticas de sus jóvenes, con el impacto que tiene sobre ellos la introducción de economías ligadas a actividades ilícitas. Estas economías se desarrollan, en muchas ocasiones, al calor de conflictos bélicos, o lo que autores como Kaldor (2001) y Münkler (2005) definen como “nuevas guerras”. El campo puede ser un escenario de disputa de actores armados o “señores de la guerra”, que buscan instaurar su legitimidad en el territorio y manejar una economía, generalmente ilegal, que se beneficia de las condiciones que implanta el conflicto, es lo que Elwert (2002) y Kululambi (2003), definen como “mercados de violencia”.

Aunque estos mercados pueden ser de distinta índole, y se instauran en cualquier lugar en el que exista marginalidad, violencia y recursos exportables (oro, esmeraldas, madera etc.), por las particularidades de la investigación y su ubicación en espacios rurales, nos centramos en la economía del narcotráfico como “mercado de violencia”, prestando atención a sus características en relación con las “nuevas guerras” y con el modo en que involucra a distintos actores en la cadena de producción, particularmente los campesinos. Dombois (1998) y Duncan (2013) hacen énfasis en el modo en que se organiza este tipo de economía y la división del trabajo que supone. Al igual que Laserna (2011) y Pontes (2012) llaman la atención sobre la vinculación de los campesinos en esa cadena productiva, especialmente cuando se trata de cultivos como la coca, que les reporta mayores ganancias, pero, al mismo tiempo, mantiene todo un sistema de sometimiento y de violencia del que además es muy difícil salir.

3.1. ¿Qué son las nuevas guerras?

El concepto de “nuevas guerras” surge de autores como Mary Kaldor (2001) y Herfried Münkler (2005), los cuales dan cuenta de la transformación que han sufrido los conflictos armados de la mano de la globalización, implicando, entre otros aspectos, su inserción en la economía globalizada gracias a los bajos costos que supone en la actualidad mantener las actividades bélicas. Al respecto, Mark Duffield (2004), refiriéndose a la importancia que cobran las “nuevas guerras” dentro del orden mundial y la economía de mercado, establece como éstas han utilizado el discurso del desarrollo y de la inseguridad para instaurarse.

En las “nuevas guerras” no existe una batalla decisiva, no determinan su curso por la concentración sino por la disociación de las fuerzas en el espacio y en el tiempo, haciendo difícil distinguir entre un frente de guerra o una zona de retaguardia. Las acciones bélicas pueden además aparecer en cualquier lugar del territorio (Kaldor 2001).

Kaldor (2001) y Münkler (2005), sostienen que las “nuevas guerras” se diferencian de las anteriores principalmente por su forma de financiación. En ellas resulta difícil comprender el límite entre el interés político e ideológico y los intereses de tipo económico. Estos mercados adquieren además diferentes formas según la región de la que se trate.

La ubicación histórica de este cambio hacia “las nuevas guerras” se produce para Kaldor, durante los años 80 y 90 del siglo pasado, periodo a partir del cual se va desarrollando un nuevo tipo de violencia organizada. Este nuevo tipo de violencia se conoce también como guerras internas o como conflictos de baja intensidad. Para Kaldor (2001), es fundamental reconocer las “nuevas guerras” a partir de la globalización, ya que implican un proceso de intensificación de las interconexiones políticas, económicas, militares y culturales a escala mundial. Por su parte Münkler (2005) ubica el surgimiento de las “nuevas guerras” a partir del fin de la Guerra Fría. El autor hace referencia al cambio que significó la clásica guerra entre Estados, y el surgimiento de nuevos conflictos en los que la resolución a través de un enfrentamiento definitivo ya no es posible, pues las “nuevas guerras” se prolongan indefinidamente sin que se vislumbre un final del mismo.

Duffield (2004) también hace referencia al fin de la Guerra Fría como el inicio del surgimiento de las “nuevas guerras” al respecto señala que gran parte del periodo posterior a 1945 se basaba en la igualdad de los Estados, pero con que, con el triunfo del orden

democrático liberal, esta igualdad formal se ha transformado en una desigualdad de facto, sumiendo en una profunda crisis al sistema legal internacional defendido en la etapa anterior.

A pesar de que tanto Münkler (2005) como Kaldor (2001) sitúan a las “nuevas guerras” y su surgimiento con el fin de la Guerra Fría y con el auge de la globalización en los años 1980, otros autores como Gutiérrez y Sánchez (2006), reflexionan también sobre las guerras de larga duración, como es el caso del conflicto colombiano. Estos conflictos pueden adoptar la forma de las nuevas guerras, pues si bien el conflicto interno en Colombia data de los años 1950, éste ha sabido incorporar mecanismos vinculados al proceso de globalización económica que han permitido su pervivencia durante décadas. Entre estos mecanismos se encuentra la constante innovación en armas y el intervencionismo internacional en especial de Estados Unidos, que toma relevancia a través de la implementación del Plan Colombia.

3.1.1. Las “nuevas guerras” y los “mercados de violencia”

Las “nuevas guerras” se caracterizan ante todo por un abandono del monopolio de la violencia por parte del Estado, y por el surgimiento de nuevos actores paraestatales que tienen un interés político y económico sobre un territorio. Esta característica ha permitido el surgimiento de los llamados “señores de la guerra”, se trata de empresarios que aprovechan la capacidad económica del territorio conquistado para financiarse (Münkler 2005). Este abandono del control de la violencia por parte del Estado está asociada para Duffield (2004) con el surgimiento de un nuevo orden mundial que desde los años 90 se corresponde con la internacionalización de la política y el tratamiento de los conflictos. También Kaldor (2001) reconoce que la privatización de la violencia es un elemento importante de estas “nuevas guerras”, y señala que en ellas es imposible distinguir entre, “lo privado y lo público, lo estatal y lo formal, lo que se hace por motivos económicos o políticos” (Kaldor 2001, 16), puesto que las “nuevas guerras” suponen una privatización de la violencia y un entrelazamiento profundo con la economía.

Kululambi (2003), trabaja precisamente la relación entre guerra y economía, concretamente a través de lo que denomina “mercados de violencia”. La economía se instaure en lugares de conflicto a través de estos mercados, los cuales constituyen sistemas supremamente rentables, que permiten la continuidad de la violencia y la guerra como una especie de rueda sin fin, de ahí la idea de que estos conflictos nunca acaban.

El mercado de violencia es la relación de producción, distribución y consumo de recursos necesarios para actuar en un marco de relaciones sociales y económicas en las que prima la capacidad de coacción entre los participantes. Suelen desarrollarse en contextos de poca regulación y surgen como el resultado de procesos de conflicto y guerra interna, implicando la generación de oportunidades para agentes preparados para la administración de violencia en contextos donde el Estado no ha tenido o ha perdido el monopolio de la violencia o en contextos de violencia (Kululambi 2003, 33).

En las “nuevas guerras” existe un acomodamiento de las economías domésticas a las exigencias de la economía mundial. Esto es posible por el surgimiento de nuevas redes de gobernación que incluye actores estatales y paraestatales que se encuentran tanto a nivel supranacional como local. Estos actores se encargan de formar redes, mayoritariamente económicas, aunque pueden incluir contactos de carácter tecnológico, político y militar (Duffield 2004).

Pensando en la lógica bajo la cual estos mercados trabajan, Elwert (2002), aclara que en los “mercados de violencia” opera un comportamiento económico racional en donde el odio y el temor se naturalizan. De esta forma, en una estructura social gobernada por la violencia, los que la monopolizan no solo son aquellos que pueden hacer uso de ella sino también los que han logrado someter a la población civil. En estos territorios cada actor armado tiene un determinado número de opciones básicas que le permiten el intercambio comercial y, las oportunidades económicas son las que determinan con quien se coopera y a quién se ataca.

La continuidad de estos mercados se relaciona, según, con la coincidencia de zonas de producción de violencia y recursos exportables con su mercado correspondiente, lo que hace que los mercados florezcan allí donde existen empresarios de la guerra que puedan obtener una rentabilidad con el conflicto (Elwert 2002). El autor cita como ejemplo la realidad del contrabando de diamantes y de oro en el Congo/Knisha o la realidad de los contrabandistas de esmeraldas en Colombia o los coyoteros que transportan ayuda alimentaria a Sudán, Somalia, Liberia y Bosnia, lugares en los que “los señores de la guerra” están en competencia de acumulación.

3.2. Un “mercado de violencia” particular: el narcotráfico en escenarios de “nuevas guerras”

Si bien veíamos anteriormente como Kaldor (2001), Elwert (2002) y Münkler (2005) relacionan las “nuevas guerras” y los “mercados de violencia” desde la fragmentación y descentralización del Estado, con la pérdida de la legitimidad y la erosión del monopolio de la violencia legítima por parte de éste, otros autores como Misse (2013), y Duncan (2013), reflexionan sobre el rol del Estado en la regulación de la economía ya sea esta legal o ilícita. Misse (2013), sostiene que, gracias a este rol regulador, el Estado puede criminalizar la producción y la comercialización de determinados productos posibilitando la aparición de la oferta ilegal de esos bienes. En el caso del narcotráfico es la conjunción de estos factores lo que hace que esta economía sea rentable.

Aunque los tentáculos del narcotráfico no se extienden exclusivamente en territorios en los que existen conflictos bélicos o lo que hemos denominado “nuevas guerras”, cuando esto ocurre, la población civil es más vulnerable a la violencia. Un ejemplo concreto de cómo el narcotráfico se instaura en lugares de conflicto armado lo ofrece Guerrero (2002) analizando el caso peruano (1980-1993). El autor sostiene que durante el conflicto que duró 13 años, la globalización reforzó, fortaleció y ayudó a consolidar los sistemas de economías de la guerra. Según Guerrero (2002), fueron los recursos de la coca junto con el fundamentalismo maoísta de Sendero Luminoso lo que permitió el auge de la guerra, gracias al florecimiento de grandes zonas productoras de coca como la de Ayacucho, que atraía a la población debido a la rentabilidad de los cultivos.⁶

Volviendo sobre los factores de rentabilidad del narcotráfico, Dombois (1998), aclara que, en el caso de la economía cocalera, sus circuitos de dinero están incluidos en el sistema económico ilegal y legal, constituyéndose en un negocio rentable a pesar de que su producción, distribución y consumo están penalizadas tanto en los países de consumo como en los países productores. Según el autor, detrás de la globalización acelerada de la economía mundial también se encuentra la globalización de los negocios ilegales que continúan ampliando su rango e influencia.

⁶ Guerrero (2002) sostiene que fue la conjunción de las drogas y las armas las que permitieron ampliar los mercados ilegales, articulados a estrategias de contrainsurgencia. En Ayacucho, Sendero Luminoso, logró establecer una economía basada en una red de impuestos a los campesinos sembradores de coca que permitía la continuidad de sus acciones y que elevó la tasa de violencia contra la población civil durante este periodo.

Las economías ilegales como la industria de la cocaína, lo mismo que la economía legal, están determinadas por la producción y el intercambio en el mercado, de bienes y servicios y orientadas en función de costos, precios y expectativas de ganancia (Dombois 1998, 17).

Para comprender cómo la economía cocalera ingresa al mundo de la ilegalidad y al narcotráfico, es necesario revisar la prohibición que acompaña a las sustancias psicoactivas. Cardinale (2018), señala que a pesar de la antigüedad de estas sustancias ciertos factores provocaron su conversión en mercancías globales de consumo masivo a partir del siglo XIX. Esta última fase se caracteriza por la mercantilización de la producción y por la prohibición legal de algunas sustancias, entre las que se encuentra la cocaína. El prohibicionismo originado inicialmente en Estados Unidos será responsable posteriormente de volver a esta economía un negocio rentable. Sobre una de las primeras leyes prohibicionistas de este país Cardinale señala:

La Ley Harrison es promulgada en 1914, y creó el Narcotics Control Department para regular la inscripción administrativa de fabricantes y dispensadores de opio, morfina y cocaína, así como restringió las cantidades disponibles y estableció sanciones. Los beneficiarios eran médicos y farmacéuticos que obtuvieron un sistema de rigurosa exclusividad para cocaína, opiáceos y cualquier otra droga bajo control (Cardinale 2018, 107).

Por otro lado, y siguiendo a Duncan (2013), el éxito del narcotráfico como empresa se basa en su capacidad de minimizar riesgos. El autor, señala que el narcotráfico es un negocio volátil, en el que hay amenazas y posibilidades de perder la vida o ser privado de la libertad, por ello el desarrollo de la economía depende de un ejército o de una mafia que proteja el corredor de la droga.

Una vez instaurados en el territorio, los “señores de la guerra” asociados al narcotráfico pueden recibir amenazas ya sea de otros grupos armados o de las instituciones estatales, por ello les resulta esencial la coerción privada y la influencia sobre el Estado, a través de funcionarios públicos (Duncan 2013). Cuando se trata de enfrentamientos entre fuerzas coercitivas similares, los “señores de la guerra”, tratan de imponerse como única fuerza

reguladora, estas vendetas, sin embargo, pueden prolongarse en el tiempo sin que se defina un ganador.

3.2.1. La organización interna de la economía del narcotráfico y su criminalización

La ilegalidad del narcotráfico conlleva la criminalización por parte del Estado de las distintas fases operativas de esta economía. De hecho, para entender cómo funciona el narcotráfico en su estructura interna y su capacidad para solventar los problemas típicos de la ilegalidad, Dombois (1998) señala que “las empresas ilegales” tratan de funcionar como una empresa “normal”, solucionando problemas como, “la consecución y ubicación de materias primas, el reclutamiento y la socialización del personal, la distribución de los productos, el aseguramiento de la legitimidad de dominio empresarial etc.” (Dombois 1998, 17). Para estas empresas es necesario evitar la persecución legal, por ello establecen sociedades secretas que se basan en el compromiso de silencio de sus miembros, lo cual, a su vez, implica jerarquías y subordinaciones en un ambiente en el que, a menudo, la violencia es el medio para imponer las órdenes y la dinámica del mercado, por parte de quienes ostentan las armas.

Por otra parte, no se puede entender el funcionamiento interno del narcotráfico sin establecer la relación entre la geografía del Estado y la división del trabajo que se da en este negocio ilegal, según si el manejo de la droga se produce como mercancía o como capital (Duncan 2013). En las fases iniciales: producción agraria, transformación de los insumos y distribución en mercados, la droga se maneja como mercancía, mientras que la última fase se relaciona con el lavado de activos, con el manejo del capital.

Las operaciones del narcotráfico que involucran la producción y transporte de mercancía por su alto grado de criminalización tienden a ubicarse en zonas de baja población y capital, donde la presencia del Estado es menor, mientras que, las operaciones relacionadas con transacciones de capital por su menor grado de criminalización por la necesidad de movimientos legales de capital para lavar ganancias criminales tienen lugar en espacios donde la presencia del Estado es mayor. Es decir, ocurren en áreas donde existe acumulación de población y capital y donde las instituciones estatales reclaman para sí un mayor espectro de regulación de la sociedad (Duncan 2013, 130).

La mayor criminalización por parte del Estado de las fases iniciales del narcotráfico, ocasiona que las zonas periféricas y marginales en las que ésta se realiza, presenten un rechazo a las

prácticas regulatorias del Estado, precisamente por la intensidad de la represión que puede darse, por ejemplo, incrementando la intensidad de erradicación de los cultivos, lo que afecta de manera directa a los campesinos (Duncan 2013).

3.2.2. Los campesinos en la cadena productiva del narcotráfico

Como vimos en el apartado anterior, el narcotráfico como negocio involucra operaciones económicas distintas que van desde la siembra de la materia prima en selvas, hasta el lavado de dinero en las urbes. Esto implica a su vez, según Duncan (2013), diferencias en las necesidades de las organizaciones que ejecutan las operaciones del negocio, provocando con ello una clara división del trabajo con sus respectivas particularidades de acuerdo a la ubicación geográfica de cada una de las fases del negocio.

Es así que en el primer eslabón de la cadena se encuentran los campesinos. Varias de las investigaciones revisadas, Bedoya, (2003), Almario (2004), Laserna (1997) entre otras, sugieren que los campesinos incorporan el cultivo de coca en sus parcelas debido al beneficio económico en relación con los cultivos lícitos, pero, sobre todo, gracias al amplio mercado al cual pueden abastecer. En contraste con estas facilidades se encuentra la violencia asociada al cultivo y el riesgo en cuanto a la seguridad que significa para los agricultores mantener esta economía. Un caso que ilustra la situación de los campesinos con respecto al cultivo de coca es el descrito por Laserna (2011) referido a Bolivia, en donde los campesinos cultivan la hoja de coca y buscan con sus ingresos, salir de la marginalidad. El autor advierte, además, que con el auge de la coca se da en el país:

Una “recampesinización” de una población que estaba siendo expulsada de las áreas rurales tradicionales por la excesiva parcelación de la tierra, prolongándose de esa manera la supervivencia de una economía campesina que apenas logra satisfacer las necesidades de subsistencia más elementales de la gente, pero que no ofrece oportunidades para alcanzar los niveles de bienestar a los que aspiran (Laserna 2011, 46).

Por otro lado, respecto a las consecuencias que acarrearán los cultivos ilegales para los campesinos, Pontes (2012) señala que, a pesar de la aparente rentabilidad para los agricultores, estos tienen que lidiar con las disposiciones legales que criminalizan el cultivo. Los campesinos se exponen a pérdidas cuando los plantíos son descubiertos; pueden ir a la cárcel y perder toda la inversión financiera y el trabajo. Duncan (2013), señala que el

resultado de la intervención del Estado en lugares de producción puede ser una progresiva criminalización de las comunidades vinculadas al negocio.

Al aspirar a imponer su autoridad sobre una población donde el narcotráfico es la fuente de recursos que alimenta el mercado local y el canal de ascenso social de los jóvenes lugareños, las retaliaciones contra el estado no solo provienen de las organizaciones criminales sino de diversos sectores sociales que se ven afectados (Duncan 2013, 151).

Según Pontes (2012), frente a esta realidad, los agricultores tienden a desarrollar “estrategias agrícolas” a fin de evitar la represión sistemática y la pérdida de los cultivos. Entre estas estrategias, están el trabajar en áreas con protección ambiental, cultivar en terrenos en los que el dueño no se ocupa de la tierra, además de desarrollar contratos de aparcería, en los que se diferencia quien da la tierra y quien la siembra. Otro de los factores que debe considerarse, según el autor dentro de la economía campesina que gira en torno a cultivos ilegales, es que estos no se encuentran dentro de una economía aislada, sino que existen múltiples relaciones entre el tipo de economía que se deriva de este cultivo y los cultivos legales. Al respecto señala que el cultivo de plantaciones ilícitas tiene dos características principales a través de las cuales se vinculan las actividades legales con las ilegales:

1) es una actividad laboral que se realiza de la misma manera que otros cultivos lícitos tradicionales que, pese a las especificidades, absorbe la fuerza de trabajo de otros cultivos lícitos, lo cual desemboca en el involucramiento inmediato de agricultores en una actividad ilícita con todas las implicaciones legales resultantes y; 2) a menudo es utilizado por los agricultores como una fuente alternativa de ingresos que ocasionalmente financia los cultivos legales debido a la falta de políticas agrarias en los países productores (Pontes 2012, 165).

Así, mientras las políticas agrarias en estos países sigan siendo ineficientes, los cultivos ilícitos continuarán siendo una fuente de ingresos alternativa para los campesinos. De este modo, mientras el campo no logre tener una mayor presencia del Estado, los campesinos seguirán inmersos en una economía en la cual la distribución de recursos, tal como sostiene Dombois (1998), es mínima para los campesinos en comparación con los comerciantes exportadores.

3.2.3. Los jóvenes del mundo rural. Entre el miedo y la fascinación por la narcocultura

Los jóvenes rurales viven el entrecruzamiento de dos realidades con respecto al narcotráfico, la primera de estas realidades hace referencia a la vinculación de los jóvenes en el mundo agrario que, como lo hemos explicado anteriormente, se produce a través de la familia y de la relación que la familia campesina como unidad productiva establece que con las organizaciones criminales que controlan la producción y la distribución de la droga. La segunda forma de relación de los jóvenes rurales con el mundo del narcotráfico se realiza debido al influjo cultural y social que implica vivir en un espacio marcado por el poder que mantienen los grupos armados que controlan el mercado. Los grupos organizados alrededor del narcotráfico pueden despertar la “fascinación” de los jóvenes y ser un referente de éxito social.

Duncan (2013), llama la atención sobre el poder que puede llegar a tener el narcotráfico en las regiones estratégicas de producción agraria y de tráfico de mercancías. En estas regiones las familias son parte de la cadena productiva de esta economía y los jóvenes crecen en un ambiente en que el narcotráfico es un referente social. Los efectos sobre la sociedad son mayores, debido a la “protección” de la actividad de ejércitos privados, guerrillas, mafias o “señores de la guerra”, que no solo regulan la producción de drogas sino también la cotidianidad.

Quando el narcotráfico influye directa e indirectamente sobre la capacidad del mercado, cuando define los atributos para clasificar el estatus de las personas y cuando los servicios de protección privada de una actividad ilegal se extienden hasta proveer los servicios de justicia de la comunidad, la mafia se convierte en un elemento esencial del orden social” (Duncan 2013, 145).

En estas regiones, el narcotráfico hace que se establezcan jerarquías sociales, al extender su capacidad regulatoria con instituciones de dominación social alternas a las impuestas por las instituciones del Estado y sus élites. Esto es posible porque la presencia del Estado es precaria. De acuerdo a Duncan (2013) los jóvenes ven en el narcotráfico un referente para sus proyectos de vida.

Uno de los principales motores que impulsan la guerra es el resultado de la combinación estructural con una desproporcionada participación de los jóvenes en la población total, con

que éstos quedan excluidos de la economía de la paz. No están sometidos a los mecanismos disciplinadores del trabajo regular y, al mismo tiempo les está vedado el acceso al mundo del consumo (Munkler 2005, 25).

Del mismo modo, Elwert (2002), señala que, en escenarios de conflicto, convertirse en parte del ejército de los “señores de la guerra” es una opción para los jóvenes. Los “señores de la guerra”, en general tratan de reducir los gastos explotando “el prestigio social” que puede traer a los jóvenes ingresar a sus filas. Munkler (2005), señala que este puede ser un método mediante el cual los jóvenes pueden lograr la posesión de un arma y con ella asegurar comida y ropa o de apoderarse por una vía más sencilla de los ansiados bienes de consumo y símbolos de condición social que de otro modo les están negados.

También Duncan (2013), señala que el controlar a una sociedad mediante la coerción, le permite al narcotráfico extender su control al respeto de transacciones locales, logrando moldear y controlar las nuevas instituciones de dominación. Gracias a este ambiente, pueden, por ejemplo, aparecer subculturas con su propio sistema de normas, valores y comportamientos bajo el cual los jóvenes de las comunidades vulnerables afectadas por el narcotráfico pueden optar por una modalidad criminal como medio de realización social. Los jóvenes pueden encontrar en la mafia mayores recursos, poder y proyección profesional frente a la falta de posibilidades que vengan desde el Estado.

Quienes controlan la principal fuente de capital de una sociedad mediante el ejercicio privado de la coerción pueden fácilmente extender su control al resto de transacciones locales y por consiguiente pueden moldear y controlar las nuevas instituciones de dominación que surgen del auge del narcotráfico (Duncan 2013, 137).

Y aunque no todos los jóvenes sienten atracción por las armas y por pertenecer a estos grupos, la influencia del narcotráfico puede llegar también desde la cultura. Al respecto, Becerra y Hernández (2019), aclaran que detrás del rápido crecimiento económico y fuerza del narcotráfico que provoca una transnacionalización de la economía, está el surgimiento de una “narcocultura” a la cual define como:

Un vasto conjunto de elementos simbólicos que conforman una visión del mundo del narcotráfico y permiten su difusión, reproducción y legitimación. En la actualidad se

despliega en una variedad de formas: música, literatura, cine, series de televisión, arquitectura, religión, artes plásticas, videojuegos, comics, lenguaje y vestimenta (Becerra 2019, 261).

Según Villatoro (2012), la percepción de las personas sobre el narcotráfico se relaciona con la oferta mediática de la narcocultura que pueden consumir los jóvenes, la cual puede inducir deseos y esperanzas de pertenecer a este mundo. Los jóvenes que se pueden sentir identificados con los elementos simbólicos a través de los cuales se difunde, reproduce y legitima esta economía.

El narcotráfico ha dado lugar a la aparición de una serie de relaciones y procesos sociales que incluyen no sólo a los Cárteles del narcotráfico como actor específico, sino también a los involucrados y beneficiarios directos e indirectos de la industria de la droga, a los integrantes de las redes de complicidades y los nuevos espacios sociales que generan y en los cuales se mueven (Villatoro 2012, 65).

Reyes, Larrañaga, Valencia (2017), sostienen que en lugares en donde el narcotráfico es parte de la cotidianidad los jóvenes, como el campo o los barrios suburbanos, existe generalmente una ineficacia de las instituciones tradicionales y que en estos lugares las industrias culturales no solo son espacios de entretenimiento, sino también referentes a través de los cuales, los jóvenes construyen proyectos de vida. En la narcocultura, los jóvenes encuentran símbolos de poder que permiten visibilidad de los entornos en donde se desarrollan, independientemente del nivel económico, del género y de su ocupación en el narcotráfico.

Capítulo 2

Un recorrido por la comunidad negra de Policarpa y la economía de subsistencia en torno a los cultivos de coca

Introducción

Este capítulo tiene como finalidad detallar la realidad socioeconómica que vive la comunidad negra de Policarpa, ubicada en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, y en especial uno de sus corregimientos, Sánchez, en el que se encuentran las veredas El Cocal y Las Varas, lugares de estudio de la presente investigación. La comunidad negra de este municipio forma parte del Pacífico sur colombiano, y guarda con el resto de comunidades de este territorio características comunes en cuanto a la historia de su asentamiento, que desde la época colonial se empezó a poblar alrededor de la explotación de oro.

Policarpa comparte con todo el Pacífico sur características comunes en cuanto a la actividad productiva, la cultura y los problemas sociales derivados principalmente del abandono estatal, la falta de inserción de esta región en la economía nacional y a la implantación, desde los años 90, de una economía basada en la siembra de la coca. Esta economía, provocó un nuevo auge colonizador acarreado consigo problemas de violencia asociados al narcotráfico y al enfrentamiento de grupos irregulares. Esto ha llevado a la población a estar expuesta al control de distintos actores armados, que tienen entre sus intereses el manejo del capital derivado de este recurso. Estos grupos que se presentan con fuerza en la región son parte del conflicto interno que vive Colombia desde la década de los años 60 del siglo pasado.

Policarpa, al igual que ocurrió con el sur del departamento del Cauca y el departamento de Nariño, se convirtió desde 1986 en la zona de influencia del bloque 29 de las FARC. Un bloque que con el auge de la economía de la coca se convierte en uno de los principales actores armados, disputándose el control territorial frente a grupos paramilitares que surgirán posteriormente como los Rastrojos, las Águilas Negras y Nueva Generación.

La primera parte de este capítulo pretende ser un preámbulo a la historia común de Policarpa con el resto del Pacífico. Se inicia con la descripción del Pacífico como una región extractiva, autores como Escobar (2010), Rúa (2002), Leal y Restrepo (2003) dan cuenta de la colonización de estas tierras a partir la extracción de distintos recursos, siendo el más relevante el aurífero, desarrollado principalmente a orillas de los caudalosos ríos de esta

región.⁷ En el siguiente apartado se revisa la importancia de esta colonización y la dimensión que adquiere para las comunidades negras y su identidad, (Escobar 2010; Gonzales 2003; Almario 2004). En la década de los noventa, las comunidades negras del Pacífico vivieron un periodo de activismo político que los llevó, gracias a la Constitución de 1991 y al decreto 70 de 1993, a la reivindicación de sus derechos, con la consecuente creación de Consejos Comunitarios que facilitaron la administración autónoma de su territorio. Autores como Castillo (2013), Coronado y Beltrán (2012), Hoffmann (2002), señalan la importancia de esta reivindicación para las comunidades negras. Como veremos posteriormente, estas reivindicaciones se ven afectadas con el dinamismo de la coca en la región a partir de la década de 1990.

En un segundo apartado se describe la llegada de la coca al departamento de Nariño y su relación con el conflicto armado (Ferro 2004; Valencia y Silva 2018), para ello nos retrotraemos a la instauración de la coca en el campo colombiano y la lucha contra las drogas del Estado, principalmente a partir de la implementación del “Plan Colombia”, el cual generó un efecto boomerang, causando la reubicación de los plantíos de coca y expandiendo el conflicto a departamentos como Nariño (De Rementería 2001; Ruano 2017). En este apartado nos centramos concretamente en Policarpa: su situación geográfica, su población, las actividades económicas y la situación de los jóvenes rurales. Veremos cómo en el departamento y en el municipio de Policarpa el conflicto se agudiza, vulnerabilizando a la población civil, sus organizaciones y líderes sociales.

En el tercer apartado de este capítulo se analiza el rol de los programas del Estado en la erradicación de los cultivos ilícitos, a partir del primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), indicando el impacto de políticas de erradicación en torno a los cultivos ilícitos y mirando especialmente, las expectativas que abre el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP, sobre la sustitución de cultivos.

1. El Pacífico colombiano como región extractiva

El Pacífico colombiano fue integrado en la economía mundial desde la época de la colonia a través de la explotación minera aurífera, el esclavismo y el sometimiento o eliminación de los

⁷ En esta región existen caudalosos ríos como el Patía, Atrato, San Juan, Baudó, Mira que desembocan en el Océano Pacífico.

habitantes indígenas (Escobar 2010).⁸ La diversidad y condiciones ambientales del Pacífico, que se extiende entre las fronteras de Ecuador y Panamá, “se caracteriza por una abundante variedad de ecosistemas litorales y de bosque húmedo tropical, con un área aproximada de 100.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 10.050.000 hectáreas” (Rua, 2002, 566), que hicieron de este territorio un lugar propicio para la extracción de materias primas.

Desde el siglo XVIII se extrajeron una gran cantidad de materiales de esta región como oro, caucho y madera (Escobar 2010). De este modo, el Pacífico colombiano se constituye históricamente como una zona de economía extractiva, es decir, aquella que tiene la naturaleza como fuente de riqueza y genera procesos económicos acumulativos que mantienen un mercado extra regional convirtiendo a esos recursos en “el eje de la economía de una región” (Leal y Restrepo 2003, 2). La economía extractiva ha sido una constante histórica en el Pacífico, esto a pesar del difícil acceso a este extenso territorio, asequible únicamente por trochas y caminos informales que se abrieron durante la colonia. No es sin embargo hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando empiezan a abrirse vías modernas hasta los puertos de Buenaventura y Tumaco (Almario 2004). Refiriéndose a la historia reciente del Pacífico, Escobar (2010) señala que, si bien esta región es imaginada como un lugar distante y atrasado, con posibilidades únicamente extractivas, la realidad cambia hacia mediados de los años 80 y 90 del siglo pasado al acelerarse las transformaciones de la región con la llegada de cultivos como la coca y la palma de aceite africana.

Constituido históricamente de manera marginal con respecto al resto del país, el Pacífico empieza a tener cierta presencia del Estado, debido a los discursos de desarrollo y gracias los instrumentos legales que otorga la ley 70 de 1993 con respecto al agua y los bosques.⁹ Con ello el Estado se convierte en uno de los principales agentes de transformación del territorio por medio de la implementación de políticas neo-liberales (Escobar 2010).

⁸ Según Castillo (2010), la región sur y centro del Pacífico estaba habitada por grupos indígenas como los Awá, Eperara Siapidara, Wounnan y Tule. Dentro de los cambios que trajo consigo el auge aurífero se produce casi la eliminación de las comunidades nativas, debido a la incursión española que durante los primeros años utilizó para las actividades mineras mano de obra autóctona. Debido a que se diezmo la población indígena, se empezó a utilizar mano de obra esclava. Almario (2009) aclara que desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XVII se consolidó una irreversible sustitución de la población indígena por población negra. No obstante, al final de este periodo los indígenas habrían logrado estabilizar sus poblaciones.

⁹ “Con la expedición de la Constitución de 1991 y su reconocimiento de los derechos étnicos/territoriales colectivos, el Pacífico empezó a ocupar un lugar destacado dentro de las agendas políticas del Estado. Lo anterior llevó a la elaboración de todo un marco institucional y, en general, a la formulación de políticas públicas con la intención de paliar, según se sostenía en los discursos oficiales, las condiciones de pobreza y la escasa integración de la región.” (Galvis, Moyano, Alba, 2016, 20).

La intervención del Estado en este territorio se hace también a partir de un control militar que busca salvaguardar los intereses del capital (nacional y transnacional), dando paso a una mercantilización de la biodiversidad y los recursos naturales, esto, sin embargo, no ha significado una mejoría en cuanto a niveles de pobreza y marginalidad. La realidad de la privatización, la apertura económica, sumada al conflicto armado y las economías ilegales, han provocado un incremento en la vulnerabilidad, la desprotección social y la violencia (Galvis, Moyano y Alba 2016).

1.2. Colonización del Pacífico e identidad de la comunidad negra

En el caso del Pacífico Sur, el periodo de colonización está asociado con la fundación exitosa de Barbacoas,¹⁰ un pueblo que sirvió de base para las expediciones que buscaban poner a producir las minas de los ríos del sur, y en el que, como señala González (2003), utilizaba a esclavos africanos para lavar el oro de las minas de aluvión que producían las minas de Barbacoas e Iscuandé.¹¹ Bajo la influencia de estos centros mineros se fueron consolidando los poblados a lo largo de los ríos, principales ejes de comunicación, al igual que en las costas. Las comunidades negras del departamento de Nariño se asentaron en las cuencas de los ríos Iscuandé, Patía y Magüí. En el caso del Municipio de Policarpa, la comunidad negra se asentó a las orillas del río Patía, en el que empezaron a desarrollar la actividad minera. Se debe considerar que desde la época de la colonia el Pacífico se convirtió en uno de los territorios de resistencia al régimen esclavista. De hecho, la resistencia de las comunidades negras empieza a articularse desde el mismo proceso minero iniciado en el territorio a partir del siglo XVI (Castillo 2013; Escobar 2010). Este fenómeno de resistencia conocido como cimarronismo se amplió con la guerra de independencia en el siglo XIX y se consolidó con la abolición de la esclavitud en 1851.

Almario (2009) y Echeverri y Gómez (1993) sostienen que el auge aurífero que próspero a manera de enclave desde inicios del siglo XVI, no sólo fue la base económica de la colonia, sino también permitió a los esclavos que trabajaban en las minas forjar su identidad, la misma que estaría ligada a al surgimiento de comunidades negras con su propio quehacer económico

¹⁰ Esta provincia formaba parte de la división administrativa y territorial de Nueva Granada. La provincia de Barbacoas existió hasta 1885, cuando fue suprimida y su territorio repartido entre las provincias de Pasto y Popayán. Desde su creación fue un importante centro minero y fluvial.

¹¹ Durante los siglos XVII y XVIII tanto Barbacoas como Iscuandé fueron los centros económicos y de poder local de mayor importancia en el Pacífico sur, dominados por una élite blanca estrechamente relacionada con Pasto (Gonzales 2003).

y su propio territorio. Al respecto, Almario (2002) considera que las comunidades negras del Pacífico sur vivieron “un proceso de etnogénesis” (Almario, 45, 2002). Durante la última fase de dominación colonial. Una etapa de formación de identidad que, según el autor, inició a mediados del siglo XVII y se prolongó a lo largo del siglo XIX y que permitió la desesclavización y la territorialización de los grupos negros, que afianzaron su diferenciación étnica y la búsqueda de territorios propios.

1.3. Derechos comunitarios y cultivos ilícitos

No es sin embargo hasta mucho después, casi a finales del siglo XX, con la promulgación de la Constitución de 1991 y la posterior redacción de la Ley 70 de 1993, que se visibilizaría la presencia de las comunidades negras en Colombia, otorgando derechos especiales a los grupos negros e indígenas y ratificando su presencia mayoritaria en el Pacífico (Castillo 2013; Coronado y Beltrán 2012). La ley 70 de 1993, reconoce a las comunidades negras como:

El conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparte una historia y tienen sus propios usos y costumbres dentro de la relación como poblado, que revelan y conservan una conciencia de identidad que los distingue de otros grupos étnicos (Ley 70 de 1993, artículo 2).

Hoffmann (2002), sostiene que estas reivindicaciones se apoyaron en la reconstrucción de la historia de la población negra, en las que se consideraron las modalidades específicas en las que esta población llegó y se asentó en las tierras bajas de este territorio.

Gracias a un marcado activismo,¹² iniciado a mediados de los 80, se logró que la nueva Constitución de 1991 reconociera el carácter multicultural y pluriétnico de la nación

¹² Este proceso reivindicativo no puede entenderse, sin embargo, sin el activismo previo que tuvo lugar desde mediados de los ochenta, conjuntamente con los grupos indígenas, conceptualizaron el Pacífico como un “territorio-región de grupos étnicos, convirtiéndose en un principio de gravitación de las estrategias políticas como también de las políticas de conservación” (Escobar 2010, 24). En esta época, se dieron condiciones para que las comunidades negras de la región mantuvieran un alto activismo político y cultural lo que permitió la creación de organizaciones étnico-territoriales conocidas como el Proceso de Comunidades Negras (PCN), que buscaban la defensa de los derechos étnicos y territoriales.

Por otro lado, este periodo de reivindicación de los derechos étnicos a nivel nacional, coincide con el reconocimiento y dinamismo en Latinoamérica de los grupos negros. Costa (2015) señala que, a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promulgada en 1989, casi todos los países de América Latina, ratificaron los derechos de los pueblos indígenas. Según el autor, el término “pueblos” es importante, pues permite la referencia a derechos colectivos como reivindicaciones de tierras y la preservación de lenguas. Esta es la razón por la cual la Convención se volvió un argumento central de legitimación para promover las demandas de los movimientos étnicos en América Latina, más allá de lo que se entiende estrictamente como

colombiana, constituyendo a las comunidades negras en sujetos políticos que buscaban la defensa de su territorio y su subsistencia. Posteriormente, con el artículo transitorio 55 y la posterior expedición de la Ley 70 de 1993, comenzó un proceso de reconocimiento de derechos territoriales. La importancia de la ley 70 de 1993 radica en que reconoce el carácter "étnico" de las poblaciones negras, y justifica por ello la adopción de dispositivos legales específicos, como ocurre en el caso de los indígenas (Hoffmann 2002). Así "se otorga un estatus especial a las poblaciones negras, y establece medidas especiales en los campos de la etnoeducación, la representación política, la participación en los proyectos de desarrollo regional, entre otros" (Hoffmann. 2002, 354).

Sobre esta misma ley, Castillo (2013), señala que posibilitó la conformación de Consejos Comunitarios que permitieron una "interlocución y concertación con el gobierno" (Castillo 2013, 71), a través de líderes comunitarios que canalizan las demandas. Dentro de las reivindicaciones se encuentra el proceso de titulación de las tierras gracias a los Consejos Comunitarios.¹³ Escobar (2010) hace referencia a una evaluación del programa de titulación realizada en el 2001 indicando que:

Los territorios indígenas se aumentaron en 324.288 hectáreas, que correspondían a 44 nuevos resguardos y a la expansión de 12 más para un total de 1.994.599 hectáreas. Los resultados para las comunidades negras fueron muy impresionantes: 2.359.204 millones de hectáreas tituladas a más de 22.000 familias organizadas en 58 concejos comunitarios; para el 2003 estos territorios colectivos para las comunidades negras cubrían aproximadamente 4.8 millones de hectáreas. El área titulada representa el 52% del total de la región (Escobar 2010, 73).

En el caso del municipio de Policarpa, la comunidad negra se organizó en torno al Consejo Comunitario Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño (COPDICONC),¹⁴ constituyéndose en una organización de carácter

pueblos indígenas, incluyendo a las comunidades afrodescendientes. Este hecho repercutió en Colombia, en donde las comunidades negras mantuvieron un importante activismo político.

¹³ "Con la Ley 70 de 1993 se logró el reconocimiento al derecho a la propiedad colectiva y el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como el mecanismo para la protección de su identidad cultural y sus derechos como grupo étnico. Este mecanismo fue reglamentado en 1995, definiendo a los Consejos Comunitarios como persona jurídica que "ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que los rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad. (Las Zonas Afectadas por la Violencia, Diagnóstico, 2010,34)"

¹⁴ Fundada el 10 de agosto de 1996 y legalmente constituida el 4 de marzo de 1997.

regional étnico-territorial de comunidades negras.¹⁵ Gracias a este Consejo se logró la extensión territorial de 136.265 hectáreas en el año 2003 en los municipios de Policarpa, Cumbitara, Santa Bárbara Iscuandé, Leiva, Rosario, Argelia, Balboa y Guapi (Plan de desarrollo Municipal de Policarpa 2012 – 2015).

Aunque este reconocimiento constitucional de las comunidades negras es importante, la Constitución se planteó en un periodo de un gran, auge neoliberal en el país, que dieron paso a políticas económicas de privatización a gran escala y que coincidieron con una avanzada del narcotráfico y el paramilitarismo, especialmente en el Pacífico (Grueso 2000). De ahí que “el movimiento social negro étnico – territorial es visto como una severa amenaza tanto para el sector gubernamental como en el privado” (Grueso 2000, 13). Desde entonces el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades Pacífico se ha visto fuertemente condicionado por los intereses del capital.

El avance del narcotráfico en el Pacífico Sur, a través de su producción, procesamiento y distribución, supuso también la entrada de una lógica empresarial relacionada con un cultivo exógeno que al no hacer parte de la tradición agrícola afectó tanto al ecosistema como al tejido social de las comunidades (Almario 2004). La llegada de la coca también implicó una menor capacidad organizativa de las comunidades debido a los conflictos que surgen entre éstas y los grupos armados. Como sostiene Almario (2004), la lógica de guerra que libran guerrillas y paramilitares contra el Estado ha reducido las iniciativas de negros, indígenas y mestizos y sus organizaciones. La llegada de la coca al Pacífico resquebrajó las conquistas anteriores, cuando las comunidades negras e indígenas lograron reivindicar la propiedad colectiva de la tierra y con ello la organización étnica territorial a través de los Consejos Comunitarios.

2. La situación de Nariño y Policarpa en el conflicto: el desarrollo de la economía cocalera

La implantación de cultivos de coca en Colombia y su desimanación en departamentos como el nariñense, constituye un problema estructural, relacionado con el abandono de las políticas

¹⁵ Esta institución abarca Consejos Menores, Comités Veredales, Asociaciones, Coordinaciones de Trabajo y Comité de Foráneos. Gracias a este Consejo se logró la extensión territorial de 136.265 hectáreas en el año 2003 en los municipios de Policarpa, Cumbitara, Santa Bárbara Iscuandé, Leiva, Rosario, Argelia, Balboa y Guapi (Plan de desarrollo Municipal de Policarpa 2012 – 2015).

económicas en determinadas zonas del país, la escasa inversión del Estado en programas de fortalecimiento del campo y el conflicto armado interno. A partir de la década de 1970 una parte de la producción del agro colombiano empezó a girar en torno al cultivo de la coca, lo que generó una economía ilegal relacionada con su producción, transporte y venta (Ferro 2004).

Esta transformación convirtió al campo colombiano en un espacio disputado por diversos grupos armados y narcotraficantes, lo que generó escenarios de violencia constante. Resulta por lo tanto imposible entender el conflicto interno en este país sin analizar el desarrollo que se produce desde la década de los setenta de los cultivos ilícitos¹⁶ y del narcotráfico. Desde los años ochenta el Pacífico, fue una región de tránsito y exportación, para luego, desde finales de los noventa, ser una parte activa en el cultivo, procesamiento y transporte (Informe Defensoría del pueblo Colombia 2016).

A finales de los años noventa la estrategia del gobierno colombiano de frenar la expansión de los sembríos de coca, hasta entonces localizados en otras regiones del país, tuvo efectos contrarios a los esperados. Según un informe de la UNODC (2011), el Putumayo era desde 1999 y hasta el 2001 la región del país con mayor concentración de coca con 66.000 ha equivalentes al 40% de la producción nacional, pero después de la aplicación del programa de fumigación, para finales del 2001 y durante el 2002, el departamento presentó una disminución del 71% de los cultivos. Este hecho es interpretado como un éxito contundente de la política antidroga,¹⁷ pero en verdad produjo un “efecto globo”, al desplazar la producción a otros departamentos (de Rementería 2001).

El mecanismo económico que subyace al efecto globo es simple: el éxito de la erradicación en un área reduce temporalmente la oferta y esto se traduce en un alza de precios. Luego,

¹⁶ Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), el cultivo de la coca se ha extendido en el 2015. Tan solo 3 de los 32 departamentos de Colombia estaban libres de su cultivo. Por otra parte, de 2013 a 2014 Colombia registró un aumento de más de 20.000 hectáreas cultivadas, de 48.189 a 69.000 (UNODC 2016).

¹⁷ La política antidroga en Colombia cuenta con el apoyo de Estados Unidos desde 1986 y estuvo orientada a la asistencia jurídica y al fortalecimiento de la policía nacional. En el gobierno de Pastrana (1998-2002) se dio paso al llamado Plan Marshall, que continuó con la cooperación de Estados Unidos en Colombia y que se fortaleció durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) (2006-2010), bajo el nombre del Plan Colombia, que implica “principalmente, una estrategia de fortalecimiento militar del Estado para su lucha contra el narcotráfico, la violencia guerrillera y el terrorismo” (UNDP, 2003, 468).

dado que la demanda por drogas es bastante inelástica, los mayores precios estimulan la siembra en otros lugares (UNDP 2003, 310).

Las cifras del desplazamiento campesinos hacia Nariño, según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) (2003), pasó de 6.000 personas en el año 2000 a 19.000 en 2001. La implementación del Plan Colombia, sumado al fracaso de los acuerdos de negociación desarrollados en San Vicente del Caguán con las FARC y el “Plan Patriota”,¹⁸ en el año 2003, también favoreció la expansión del conflicto hacia la región del Pacífico (Ruano 2017).

2.1. Situándonos en Policarpa

El Municipio de Policarpa se encuentra ubicado en la zona nororiental del departamento de Nariño.¹⁹ Este Municipio está conformado por 8 corregimientos, los cuales agrupan a 62 veredas y una cabecera municipal. Debido a su ubicación geográfica, el Municipio de Policarpa forma parte de lo que se conoce como la región del Pacífico Sur,²⁰ correspondiéndose también con la región cordillera de Nariño. El Municipio se caracteriza por tener un relieve montañoso y por estar bañado por el río Patía. Este río es de gran importancia para las comunidades que se asientan en su ribera, en sus cuatrocientos kilómetros de recorrido, el Patía alberga a 15 poblados con unos 10.000 habitantes.²¹

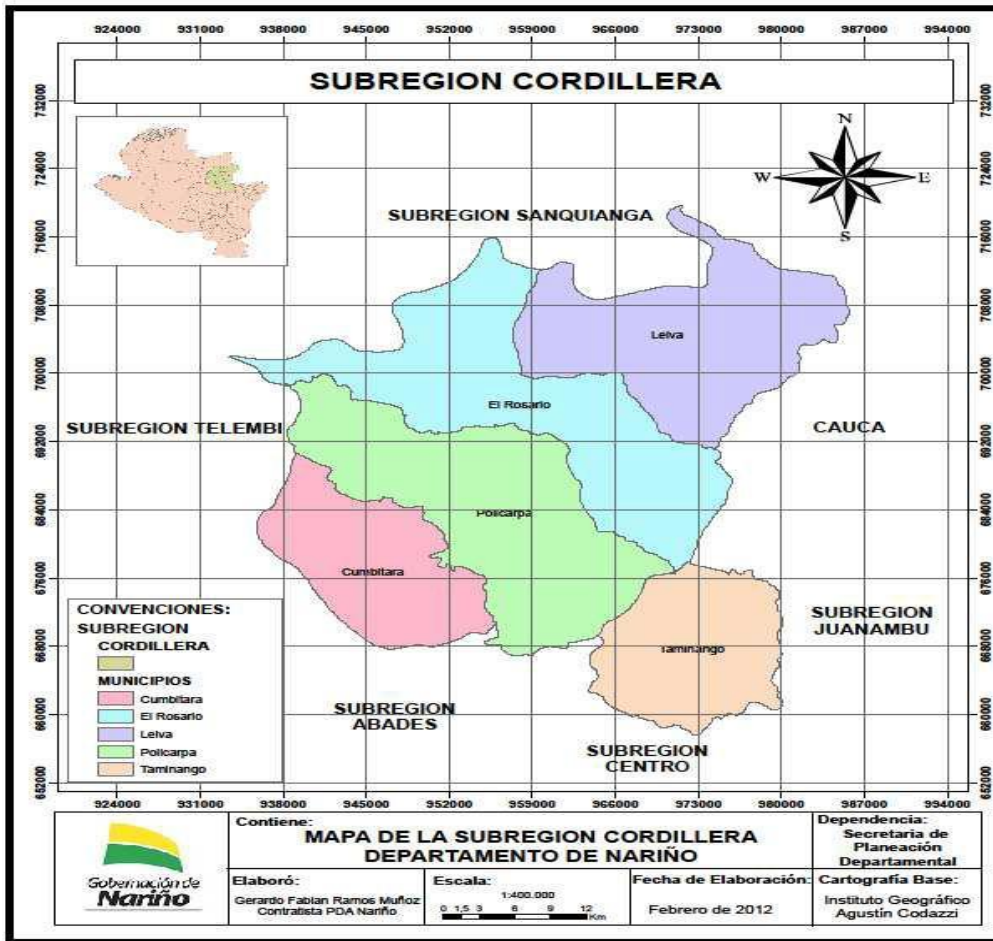
¹⁸ El Plan Patriota fue una campaña militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Colombia, implementada desde 2003 en los departamentos del Meta, Caquetá y parte del Putumayo.

¹⁹ Datos del IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

²⁰ El Pacífico Colombiano está conformado por las zonas costeras de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Se ubica entre el ramal occidental de la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, cubriendo un área terrestre de 83.170 km cuadrados y un área marina de 339.500 km cuadrados: es decir el 7,7% del territorio continental nacional y el 36,5% del territorio marítimo (DNP 2010).

²¹ El río Patía tiene una longitud de 415 km. El municipio de Policarpa se encuentra ubicado en los primeros kilómetros de recorrido de este río.

Mapa 1. Policarpa subregión Cordillera



Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019

El río es además el límite natural entre el departamento de Nariño y Cauca. A partir de la cabecera corregimental de Sánchez (último poblado al que se accede por carretera) el río se convierte en la principal vía de comunicación con otros municipios como Barbacoas y Tumaco, constituyéndose en una ruta alterna de salida al mar. A su vez, el Corregimiento de Sánchez está conformado por 7 veredas, entre las cuales se encuentra la vereda Las Varas y El Cocal, en donde se ha realizado la investigación.

Mapa 2. Municipio de Policarpa



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

La topografía de Policarpa es montañosa en su mayor parte. Sus tierras tienen una temperatura promedio anual de 22,8°C aproximadamente (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2016). Estas características topográficas hacen que esta región sea propicia para el cultivo de la coca.²² Del mismo modo esta región es propicia para la siembra de otro tipo de cultivos como el arroz, el cacao y el plátano, así como para la ganadería. La mayor parte de su economía gira entorno a la agricultura y la minería aurífera. Su población hasta 2018, según proyecciones estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sería de 17.469 personas, de las cuales el 82% se localizaban en el área rural. Policarpa, y en especial del corregimiento de Sánchez, está habitada en su mayoría (60%) por personas negras.

²²Destacándose principalmente la variedad E. cocavar coca boliviana o de Huánuco, la variedad *Erythroxylum* y la E. novogranatense. Estas variedades se cultivan también en Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela (Matteucci y Morello, 2016).

2.1. Empleo rural y economía cocalera en Policarpa

Para entender la dinámica económica rural de Policarpa y su relación con la oferta laboral, se debe señalar que en general, el departamento de Nariño mantiene un fuerte enclave agrícola, en donde el sector agropecuario representa el 30% de las actividades económicas del departamento, seguido por el comercio, el transporte y la industria. Esta débil economía mantendría tres ejes fundamentales: la producción para el consumo nacional, las exportaciones agroindustriales y el intercambio comercial con Ecuador PNUD (2010).

Nariño presenta, además, un alto nivel de desempleo con una población de 1.680.795 habitantes, para el año 2012 la cifra de desempleados en el departamento ascendía al 12,6%, afectando de manera considerable al sector rural, en donde se ubica el 52% de su población. Según el Plan Departamental de Empleo de Nariño (2014), la población rural también presenta un nivel de subempleo objetivo del 48,5%, siendo este mayor que el índice que se registra en el área urbana, en donde el subempleo objetivo es del 45,3%. Esta realidad afecta mayoritariamente a los hombres que registran una tasa de subempleo objetivo de 50,4%, mientras que, en el caso de las mujeres la tasa es del 40,8%.

Por otro lado, el sistema agrícola, sobre el cual recae el empleo rural, se caracteriza por presentar sistemas tradicionales de exportación. El minifundio tiene un gran peso en la región; el 84% de las unidades productivas en Nariño son menores a 10 hectáreas, esto según el Diagnóstico, Las Zonas de Nariño Afectadas por la Violencia (2010). Esta realidad se evidencia en el municipio de Policarpa, en donde el tamaño promedio del terreno por propietario es de 4.3 hectáreas, presentando, además, problemas en cuanto a la legalidad de los predios. Según datos del Perfil Productivo Municipio de Policarpa – Nariño (2015), el 80% de la tierra no se encuentra legalizada y su propiedad radica en un proceso de posesión.²³

²³De acuerdo con el Diagnóstico de Las Zonas Afectadas por la Violencia (2010), la constitución legal de “Consejos Comunitarios” es la organización social exigida para la entrega de los territorios colectivos (artículo 5º) 55. En este sentido, disminuyó las posibilidades de venta de estos territorios a personas que no hicieran parte de la comunidad que está bajo el ámbito del respectivo Consejo Comunitario (artículo 70). Esto hace que en la práctica se presenten conflictos entre la propiedad colectiva y propiedad individual, que tienen la tendencia a convertirse en conflictos entre los Consejos Comunitarios y algunos individuos. Esto se debe a que existe tradición de propiedad familiar entre la comunidad negra y en muchos casos hay individuos que para respaldar sus reivindicaciones individuales poseen escrituras públicas, expedidas con anterioridad a la vigencia, por predios situados dentro del terreno global adjudicado al Consejo Comunitario. Según el Perfil del municipio de Policarpa (2015), en el municipio se registran 11 latifundistas propietarios de predios que oscilan entre 200 y 500 hectáreas ubicadas en los corregimientos de Sánchez, Santacruz y San Roque, quienes explotan las tierras con cultivos ilícitos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC (2011), Nariño, a diciembre del 2009 presentaba, 16.428 hectáreas de coca. En este mismo año, los datos del Diagnóstico, las Zonas de Nariño Afectadas por la Violencia (2010), señalan que la economía de Policarpa se sustentaba en un 60% de cultivos ilegales y que estos cultivos generaban empleo (necesitando más de 3 mil raspachines) y jaloneando a la vez actividades de comercio, transporte y construcción. Según este mismo Diagnóstico, para el año 2009 existían en los departamentos afectados por la violencia y cultivos ilegales de Nariño alrededor de 42.000 niños de entre 11 y 17 años, de estos, alrededor de 32.000, es decir, 3 de cada 4, trabajaban como raspachines. Además, se reportaba la llegada de niños y adolescentes de otras zonas para trabajar en la coca (Diagnóstico, Las Zonas de Nariño Afectadas por la Violencia 2010, 108).

Un monitoreo más reciente de la UNODC (2017), muestra que Nariño presenta en el 2016, un total de 57.777 hectáreas de coca y continúa siendo el principal productor del país. Con base en este monitoreo, se puede suponer que el índice de la economía de Policarpa que depende de estos cultivos ha crecido considerablemente, siendo la economía ilegal de la coca el principal receptor de mano de obra rural del municipio.

2.1. Policarpa, marginalidad y abandono del Estado

Para describir la situación en que vive la población es necesario revisar la relación que existe entre la ausencia del Estado y el abandono en que se encuentra la comunidad de Policarpa. La población presenta, en términos generales, condiciones económicas y sociales precarias debidas, según el Plan de Desarrollo un Policarpa Mejor 2012-2015, a la baja inserción de la productividad agrícola local en la economía nacional, a la baja inversión social, al incremento de la pobreza y la violencia. Respecto a la calidad de vida que tiene la población dicho Plan ofrece los siguientes datos:

Tabla 1. Índice de Pobreza Multidimensional de Policarpa

DIMENSIÓN		VARIABLE	POLICARPA	NARIÑO	COLOMBIA
EDUCACIÓN	1	Logro Educativo	92,50%	89,93%	84,51%
	2	Analfabetismo	19,77%	29,45%	30,80%
NIÑEZ Y JUVENTUD	3	Asistencia Escolar	30,17%	23,45%	18,44%
	4	Rezago Escolar	54,23%	45,01%	44,59%
	5	Acceso Servicios para la primera infancia	32,48%	30,99%	27,20%
	6	Trabajo Infantil	25,95%	15,88%	13,92%
TRABAJO	7	Tasa De Dependencia Económica	48,32%	60,65%	59,03%
	8	Tasa De Empleo Formal	99,65%	99,70%	99,22%
	9	Aseguramiento en Salud	23,68%	42,91%	31,23%

SALUD	10	Acceso a Servicio de Salud Dada Necesidad	17,68%	14,65%	10,49%
VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS	11	Acceso A Fuente De Agua Mejorada	18,43%	36,04%	37,27%
	12	Eliminación de Excretas	25,12%	38,65%	34,14%
	13	Piso	22,90%	30,41%	21,04%
	14	Material paredes exteriores	1,6%	5,59%	6,78%
	15	Hacinamiento	41,72%	51,61%	36,27%
Incidencia (H) k-5/15			81,60%	70,00%	40,00%
Proporción de variables en las cuales los hogares son pobres			50,60%		
Umbral de pobreza extrema (K)= 47% (7/15)					

Porcentaje promedio de personas que sufre privación según variable.

Fuente: Plan Desarrollo un Policarpa Mejor 2012-2015

Según estos datos, el municipio posee un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 81,6% (H), el umbral de pobreza es de 50,6%, este último está más cerca del umbral de pobreza extrema con un porcentaje del 47%, que corresponde a la proporción de variables en las cuales los hogares son en promedio pobres. Las variables con mayor índice de IPM son las de logro educativo (mayor a 15 años), e indican que en el 92,5% de las familias, al menos un miembro no ha alcanzado el logro. Igual ocurre con la tasa de empleo formal con un 99,65% de las familias que registran que al menos un miembro no tiene empleo formal. El nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, no ofrece un detallado unificado sobre este indicador, pero señala que la pobreza multidimensional de la subregión de la Cordillera de Nariño, a la cual pertenece el municipio de Policarpa, presenta avances significativos en su reducción (de un 33,74%) en el periodo 2005 – 2015, ubicándose este indicador en el 59%.²⁴ Este Plan, reconoce, sin embargo, que hay persistencia de problemas estructurales que impactan de manera negativa a las personas condicionando su desarrollo y aumentando su vulnerabilidad.

En cuanto a la cobertura en servicios públicos domiciliarios (acueducto, electricidad, alcantarillado), el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, indica que entre los años 2013 - 2015, la cobertura del servicio de acueducto en el área urbana era del 97,32%, mientras que en el área rural se presentaba una cobertura del 96,06%. Sobre este servicio se aclara que la calidad del agua es deficiente; el agua no es lo suficientemente tratada, y que esta realidad es aún peor en el área rural. El Índice de Riesgo de Calidad de Agua para el Consumo Humano (IRCA) en la Zona Urbana en el periodo 2013 – 2015, se incrementó de manera negativa en un 20,96%; su promedio del 66% está por encima del promedio del Departamento. Del mismo

²⁴ El Plan de Desarrollo 2016-2019, toma como referencia los datos del texto “Nariño: Análisis de conflictividades y construcción de paz (2014).

modo, el Índice de Riesgo de Calidad de Agua para el Consumo Humano (IRCA) en la Zona Rural tiende a incrementarse en el periodo 2013 – 2015, de manera negativa en 2,71%; su promedio del 66,08%.

En lo que respecta al servicio de energía eléctrica el Plan de Desarrollo un Policarpa Mejor 2012-2015, señala que el 80,2% de la totalidad de las viviendas tanto urbanas como rurales posee el servicio de energía. El nuevo Plan de desarrollo Municipal 2016 -2019, señala que existe una cobertura del 100% en el área urbana pero no ofrece cifras del área rural por lo que no se puede entender cómo ha cambiado la cobertura en los últimos años.

En cuanto al servicio de alcantarillado, el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, señala que la cobertura total del alcantarillado en el municipio es de 46.8%., con una cobertura para el periodo 2013-2015, del 93,98% en zona urbana y del 41,44% en el espacio rural.

Por otro lado, la mala calidad en la prestación de servicios se agrava por el aislamiento geográfico de la localidad en relación con el resto del País. Como señala el Diagnóstico, las Zonas de Nariño Afectadas por la Violencia (2010), Policarpa tiene más relaciones con el Sur del Cauca que con su propio departamento debido al mal estado de las vías de comunicación que empezaron a ser carreteables con Pasto en los años 70. Este factor de inaccesibilidad determina, a su vez, la precariedad de los servicios de transporte, los cuales hacen que la distancia entre la población rural y los centros de servicio urbanos se puedan realizar únicamente con restricciones y a un costo muy elevado.

Esta falta de vías de comunicación afecta de manera considerable el acceso a la salud de toda la población, al igual que el acceso a la educación. En el caso de la salud se presenta una oferta débil de servicios con una baja calidad, la cual tiene que ver, de manera general, con el personal de salud que atiende a la población, con la infraestructura física y las dotaciones, que no permiten prestar un buen servicio (PNUD, 2015). Policarpa cuenta únicamente con un hospital de primer nivel y 8 subcentros de salud en las áreas rurales en las cuales no existe un médico de tiempo completo.

2.3. La vulnerabilidad de los jóvenes de Policarpa

En Policarpa las desigualdades se ceban particularmente con el segmento poblacional joven. Tanto jóvenes como niños y niñas tienen limitadas posibilidades de superación en esta región, debido al conflicto, al aislamiento geográfico y su quehacer económico.

En primer lugar, el acceso a educación en la región es limitado presentándose tres factores que influyen en esta realidad: el conflicto, la baja calidad con mínima pertinencia, y la accesibilidad. Esta dificultad la padece en gran medida la población indígena y negra de Nariño, esto según el Diagnóstico de las Zonas de Nariño Afectadas por la Violencia (2010). En esta región las acciones armadas ilegales y la educación están relacionadas y pueden crear un círculo vicioso del cual es difícil salir. Por un lado, el conflicto genera reclutamiento de menores, ausencia escolar y desplazamiento; por otro, incide también sobre las dinámicas familiares, culturales y laborales. La ausencia en inversión por parte del gobierno hace que no exista una adecuada infraestructura en cuanto a la prestación del servicio educativo. Con estas limitaciones, la tasa de cobertura en educación, según los datos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, para el año 2015, serían los siguientes:

Tabla 2. Cobertura en Educación Municipio de Policarpa año 2015

Categoría	Tasa de cobertura Bruta	Tasa de cobertura Neta
preescolar	66,77%	59,18%
Primaria	96,39%	74,64%
Secundaria	65,20%	43,70%
Media	27,10%	16,46%

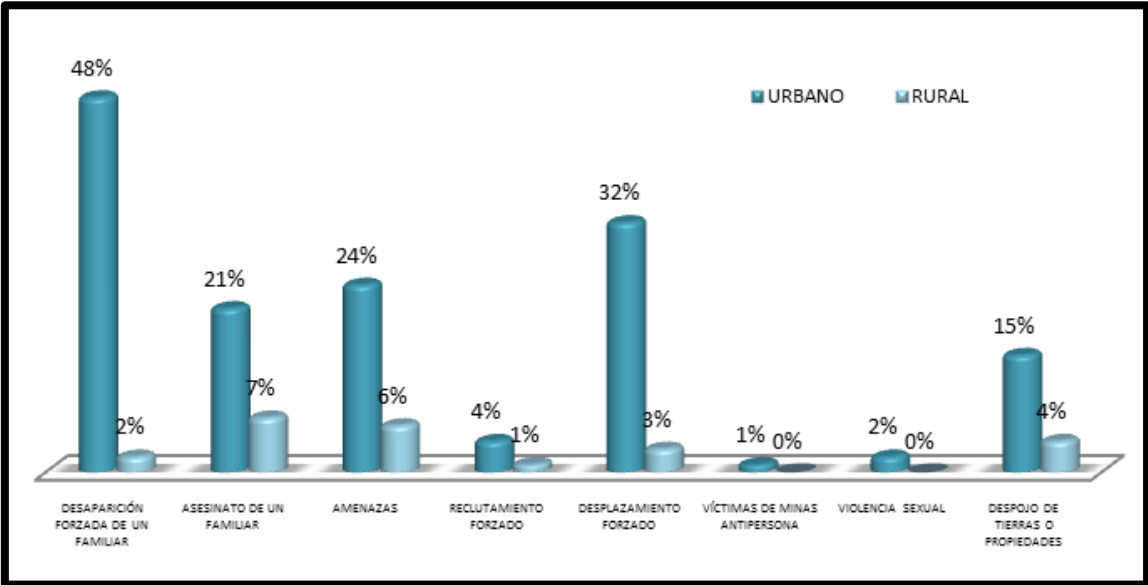
Fuente: Datos del Plan de Desarrollo de Policarpa 2016-2019

Entre los datos que muestra el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, llama la atención la elevada tasa de extra-edad, con jóvenes que presentan una edad que está por encima de la edad que deberían tener para los respectivos cursos, con un porcentaje del 29,02%, además del porcentaje de población que por su edad debería estar dentro del sistema educativo y no lo está, siendo este porcentaje del 31,09%. Este último indicador, muestra una variación en comparación con el año 2010, cuando esta cifra se ubicaba en el 34%. En los cascos corregimentales de la zona rural de Policarpa, de la totalidad de niños y jóvenes entre 5 y 24 años que no asisten al sistema educativo formal es del 38%. Este último dato recogido en el Plan de Desarrollo un Policarpa Mejor 2012-2015, retoma las cifras del Censo educativo realizado por el Consejo Noruego para los Refugiados del año 2010. Aunque los datos del

Consejo Noruego no son recientes, podrán ilustrar la situación que continúa presentándose hasta la actualidad.

El Censo indica, además, que la población inasistente abandona sus estudios al culminar el grado quinto de primaria. Señala además que del total de la población entre 5 y 10 años tan sólo el 13,19% ha asistido alguna vez al sistema educativo formal, el restante nunca lo ha realizado. Las razones por las cuales los jóvenes no están inscritos o no han terminado la educación media, se justifica en el área rural por problemas económicos en la casa con un 44% y con 23% por la necesidad de trabajar. Indicadores similares se presentan en el campo con un 43% de jóvenes con problemas económicos en casa y con un 17% con necesidad de trabajar. En el área rural se destaca también la lejanía de los centros educativos con un 13% de las razones por las cuales los jóvenes no estudian. Un factor importante que se analiza dentro del Censo es también el impacto de hechos violentos en los hogares de la población que no asiste a instituciones educativas:

Gráfico 1. Hogares de población entre 5 y 24 años que no asiste al sistema educativo y no es bachiller debido a hechos violentos



Basado en el censo de identificación escolar fuera del sistema educativo formal 2012 del Consejo Noruego para los Refugiados

Fuente: (Plan de Desarrollo un Policarpa Mejor 2012-2015, 89)

Como se observa en el (gráfico 1.), la inasistencia por razones de violencia se da con mayor fuerza en el área urbana, en donde el 48% se ha visto afectado por la desaparición forzada de un familiar, mientras que en el sector rural el porcentaje es de un 2%. De igual forma, llama la atención que los jóvenes urbanos estén sometidos a mayor amenaza con un 24%, frente al 6%

de los jóvenes rurales y que el despojo de tierras o propiedades se viva en un 15% en el sector urbano y un 4% en espacio rural. En el sector rural es la cuestión socioeconómica la que determina la inasistencia o deserción escolar.

En los siguientes apartados se trata de comprender cómo la economía del narcotráfico en Policarpa se relaciona con el conflicto armado interno y cómo las políticas que buscan la supresión de los cultivos ilícitos han repercutido en el departamento y en especial en las comunidades de este municipio.

3.1. El conflicto en Nariño y Policarpa

Como señala Almario (2004), debido a la presencia de grupos armados interesados en las fuentes de riqueza que encierra el territorio, el Pacífico pasó de ser un “espacio de refugio” a convertirse en un “espacio de inseguridad” Como señala Berúre (2004), Nariño era considerado como una zona de descanso para las FARC, y en menor medida para el ELN. Estas guerrillas se radicaron principalmente en el departamento del Cauca e incursionaron ocasionalmente a Nariño. Esta realidad cambia a mediados de los ochenta con la llegada de la coca al departamento. Según El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2002), las FARC –concretamente el frente 29– se interesaron desde 1985 por regular la actividad cocalera en la zona.²⁵

En el caso concreto de Policarpa, desde 1999 los grupos guerrilleros han protagonizado enfrentamientos con grupos paramilitares disputándose el control territorial del municipio. Según el PNUD (2010), después de los 90 dos frentes de las FARC (8 y 29), tenían presencia en Policarpa, al igual que el (ELN) que se encuentra en Nariño desde la década de los 80.

La presencia de grupos armados irregulares deja de ser únicamente guerrillera en los años siguientes, es así que el departamento vive una agudización del conflicto a partir de la incursión en el territorio de grupos paramilitares.²⁶ Sobre la llegada de los paramilitares a

²⁵ “La zona de influencia tradicional del frente 29 corresponde a los municipios de Leiva, La Llanada, Sotomayor, Policarpa, Cumbitará y Barbacoas” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2002, 5).

²⁶ “Los irregulares en lucha contra la guerrilla prefieren llamarse “autodefensas”, mientras en el lenguaje ordinario es más común llamarlos “paramilitares”. Estos dos términos difieren en que el primero apunta a un fenómeno espontáneo de autoprotección ciudadana ante la ausencia de Estado, mientras el segundo sugiere un cuerpo de combate paralelo a la Fuerzas Militares y en algún grado de connivencia con agentes del Estado” (UNDP 2003, 29).

Nariño Berúre (2004), señala que, hacia 1999 estos grupos entraron a Buenaventura y se extendieron por varios municipios de la costa, aunque según un informe del PNUD (2014), la presencia de los paramilitares en Nariño se daría años antes, cuando el Bloque Libertadores del Sur llegó al Piedemonte y Tumaco con la finalidad de disputar espacios a la guerrilla y controlar los circuitos del narcotráfico. En el Municipio de Policarpa la presencia guerrillera se da a partir del año 2000.

El poder de esas bandas político-criminales significó su control sobre las actividades extractivas y la actividad económica privada y gubernamental, a la par con la introducción masiva de cultivos de coca, la cooptación sistema electoral y político y el abierto desconocimiento de la protección legal de negros e indígenas, de sus territorios y del medio ambiente (Prado 2016, 336).

Este periodo de tiempo también coincide con la mayor presencia del narcotráfico, Arias y Prieto (2011), señalan que la implantación del paramilitarismo está correlacionada con el narcotráfico, “los grandes capos de la droga conforman y financian grupos de seguridad privada con capacidad para ampliar las zonas de cultivo de droga y protegerlas del ataque de otros actores armados ilegales” (Arias y Prieto 2011, 329). Los autores sostienen que los paramilitares también se crearon debido a la debilidad del Estado y sus fuerzas de seguridad que no podían hacer frente a los grupos guerrilleros.

Los informes de la Fundación para la Investigación, la Educación y la Pedagogía Regional FUNIEP (2012) y Human Rights Watch (2010), sobre los grupos armados de la región, evidencian que estos tienen un especial interés por el control de las principales vías de comunicación. En el caso de Policarpa se trata de una disputa por el control del río Patía, principal vía de acceso a la costa Pacífica; los afluentes del Patía confluyen en el puerto de Tumaco. El interés en Policarpa se relaciona también con el interés en el narcotráfico y la minería aurífera. La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, 2017) registra así el crecimiento de los cultivos ilícitos en la región del Pacífico pasando de 25.976 Has de coca en 2014 a 55.777 Has en 2016, De modo que el incremento en los enfrentamientos directos entre las FARC y los paramilitares, se da especialmente por el control de municipios productores de coca y el acceso a las principales salidas hacia el mar, hacia el resto del país y hacia la frontera con Ecuador.

Las FARC desplegaban su accionar sobre el piedemonte, el curso de los ríos más importantes y los cultivos de coca; el ENL controlaba especialmente algunas zonas amapoleras sobre la cordillera Andina. Los grupos de autodefensas ubicaron los laboratorios para el procedimiento de coca y ejercían el control sobre una amplia franja costera, en los municipios donde los narcotraficantes procedentes del valle registraron la compra de tierras, controlando además las principales vías y puentes de salida del producto procesado (FUNIEP 2012, 15).

Se debe resaltar que el interés de los actores armados no se restringe a los cultivos ilícitos, sino que está relacionado también con la explotación de recursos naturales “como la minería, los monocultivos de palma africana, la pesca industrial y la camaronearía, entre otros—y los megaproyectos de infraestructura: puerto de Buenaventura y ampliaciones portuarias, proyectos para la carretera binacional Tumaco-Esmeraldas (Ecuador)” (Bérubé 2004, 725).

El capital y el conflicto de intereses detrás de estos recursos ocasionaron el desplazamiento masivo de comunidades afrocolombianas. El conflicto se mantiene en los años siguientes, reforzándose la presencia de la Policía Nacional, La Infantería de Marina, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército, a partir de la implementación de la política de “Seguridad Democrática”,²⁷ que causa una intensificación de los operativos militares (Leal 2006).

En Policarpa, además de la coca es la minería desarrollada a través del barequeo a orillas del Patía, de interés para los grupos armados.²⁸ Esto a pesar de la organización de la comunidad en lo referente a la minería, a través del COPDICONC. Como indica Pulido, “las rentas de la minería de oro son lo suficientemente importantes para estimular el accionar de actores armados, ya sea brindando seguridad en los territorios, en el lavado de activos, o actuando directamente como inversionistas” (Pulido 2015, 35). Otro de los atractivos del oro es que al

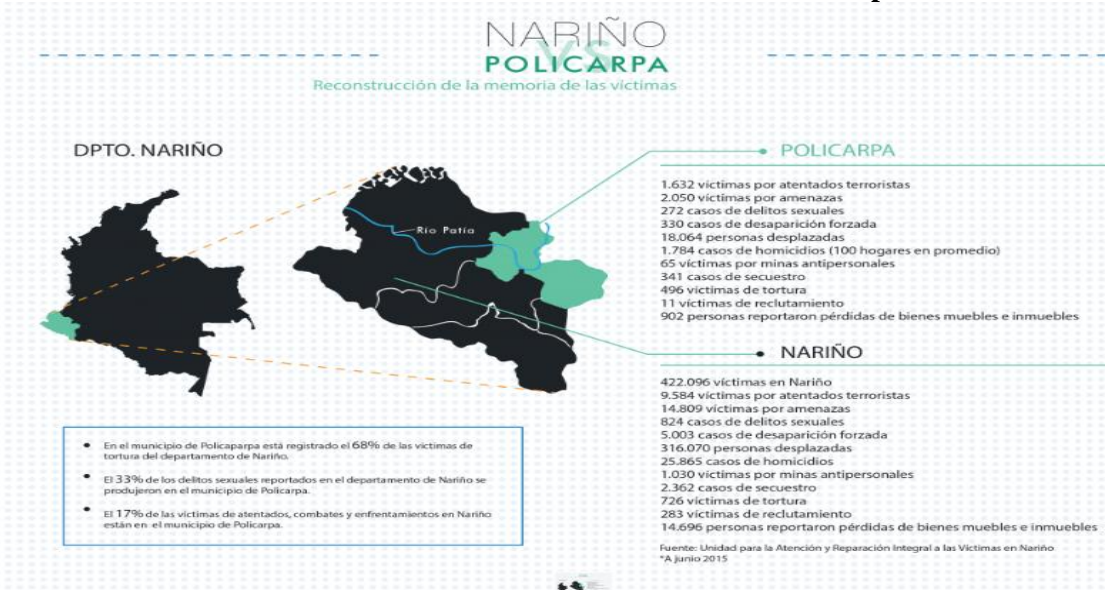
²⁷El programa de “Seguridad Democrática”, se inició en el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006). Según Human Right Watch (2018) entre el 2002 y el 2008, miembros de brigadas del Ejército en toda Colombia ejecutaron a civiles, en lo que ahora se conoce como “falsos positivos”. Soldados y oficiales se vieron recompensados por incrementar el número de bajas en el combate a las guerrillas.

²⁸ Valencia (2017), reconoce que desde el 2010 en muchas comunidades del Pacífico la realidad del barequeo ha cambiado con la llegada de retroexcavadoras y dragas, lo que ha hecho que esta actividad cambie drásticamente debido al interés de grupos armados en este tipo de minería. Del mismo modo, la autora señala que esta realidad destruye la propiedad colectiva de los Consejos Comunitarios debido a las expectativas lucrativas que se generan dentro de las comunidades, y que ha calado en los imaginarios a través de la idea de que la población va a mejorar su situación económica. Esto ha permitido legitimar a los actores poderosos de la minería, cobijando en muchos lugares proyectos mineros financiados por los grupos armados.

ser un producto legal que no se puede rastrear fácilmente, puede ser utilizado fácilmente para el lavado de dinero. Esto motiva la inversión del narcotráfico y la captación ilegal de regalías (Massé y Camargo 2012).

Policarpa, caracterizada por la presencia guerrillera, sufre un periodo de aumento de la violencia a partir del año 2000, mostrando un pico de violencia mayor en los años 2005-2006 (Plan de Desarrollo un Policarpa Mejor 2012-2015). El Bloque Libertadores del Sur de las AUC bajo el mando de “Pablo Sevillano”, incursiona en el territorio contra las FARC, logrando replegar a este grupo fuera de los corredores estratégicos para la comercialización de armas y cocaína y de los lugares de cultivo. Como consecuencia de esta disputa se agravará la crisis humanitaria. La Unidad para la Atención Integral a las Víctimas de Nariño (2015) muestra cifras alarmantes, evidenciando masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzoso y uso de minas antipersonales.

Gráfico 2. Las cifras del Conflicto Armado en Policarpa



Fuente: Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas en Nariño / Cobertura Periodística para el Trabajo y la Paz (junio 2015)

El informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de 2002, y el de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES) de 2008, dan cuenta de distintos desplazamientos masivos de la comunidad de Policarpa durante estos años. Destacan por ejemplo el de la

“Operación Felino”.²⁹ por parte del Ejército contra el frente 29 de las FARC que causó el 29 de junio de 2003 el desplazamiento de 2000 familias que estuvieron confinadas durante dos semanas en medio de los enfrentamientos en las veredas de El Remolino, Bajo Patía y El Edén (CODHES 2008). El desarrollo de combates similares se presenta también en marzo 2004, cuando la población campesina fue nuevamente desplazada.

2.4.1. Policarpa y la desmovilización de las AUC, un nuevo auge de violencia

Entre el año 2005-2006 se produce, bajo la administración de Álvaro Uribe, la implementación de un plan de desmovilización de 37 grupos armados que integraban la coalición paramilitar conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dentro de estos grupos se da en el 2005, la desmovilización del Frente “Libertadores del Sur” que desmovilizó 689 combatientes (Ruano, 2017). Aunque se esperaba que con este hecho se diera fin al conflicto, este lejos de terminarse se exacerbó. El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2002), señala que la desmovilización de las AUC, dejó intacta la lógica criminal y del narcotráfico haciendo emerger otros grupos que se han convertido en un grave factor de amenaza y riesgo para los derechos de las comunidades, además sostiene que al ser este proceso incompleto tuvo como resultado la conformación de las llamadas “bandas emergentes”: “Rastrojos”, “Águilas Negras”, “Nueva Generación” que continuaron con el conflicto.

Desde la desmovilización del BLS, Nariño ha estado sumido en la violencia ocasionada por grupos que operan de manera similar a las AUC: reclutan, amenazan, violan y asesinan a civiles, participan en narcotráfico y compiten entre sí y con las guerrillas por el territorio. Inicialmente, el más prominente de estos grupos fue la Organización Nueva Generación (también llamada por la sigla ACNG—Autodefensas Campesinas Nueva Generación—, que actualmente se conoce simplemente como Nueva Generación o NG). Posteriormente, el grupo los Rastrojos adquirió mayor poder (Human Rights Watch 2010, 87).

En abril del 2006 los duros enfrentamientos entre las FARC y la nueva organización provocaron un desplazamiento masivo de más de 2000 personas desde el corregimiento de Sánchez hasta la cabecera de Policarpa. El conflicto se agravó más aún con la aparición en la

²⁹ La “Operación Felino”, fue llevada a cabo por Tropas de los batallones de Infantería número 9 y Contraguerrilla número 3. En este operativo se decomisaron tres toneladas de explosivos en igual número de campamentos del frente 29 de las FARC en zona selvática del corregimiento de Madrigales, en Policarpa (Diario el Tiempo 2003).

región en el 2009 de otras bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que se sumaron a los grupos ya existentes (Diario el Tiempo, 2015).

El Plan de Desarrollo un Policarpa Mejor 2012-2015, sostiene que El frente 29 de las FARC en el 2011 desarrolló acciones para retomar el territorio desde los cerros de influencia del Bajo Patía como El Cerro de Peñas Blancas, Cerro San Roque, Pital, Pesquería, Tortuga Magui, Río Escuanesito. De igual forma, la coerción sobre de la población civil se ve reflejada por la presión, en algunos casos por parte de las FARC, para protestar contra las fumigaciones con glifosato impuestas por el gobierno. Según Human Rights Watch (2010), en mayo de 2006, aproximadamente 10.000 personas de Nariño participaron en una manifestación masiva.³⁰

2.4.2. Un nuevo Acuerdo de Paz con las FARC

Una situación similar, la encontramos durante la negociación del desarme del gobierno colombiano con las FARC, iniciada en el 2012, y que concluyó con la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Un resumen ejecutivo adelantado por International Crisis Group (2014), señalaba que entre los principales temores con respecto al acuerdo estaba la posibilidad de un rearme, reclutamiento y disidencia de los integrantes de las FARC, debido a que:

La mayoría de los cerca de 7.000 combatientes, y el triple de miembros en redes de apoyo, se concentran en zonas periféricas en las que apenas existe infraestructura y presencia civil del Estado. Algunos frentes guerrilleros están involucrados en la economía de las drogas y la minería ilegal (International Crisis Group 2014, 1).

International Crisis Group (2014) menciona que, dado que también existen viejas redes de paramilitarismo, la violencia podría intensificarse si estos grupos sienten que sus intereses se ven afectados por el acuerdo de paz. Estos temores se ven confirmados en los años

³⁰ La Defensoría del Pueblo informó que, cuando los habitantes de Policarpa y Cumbitara comenzaron a trasladarse hacia el municipio de Remolino para participar en la manifestación del 15 de mayo en la Carretera Panamericana fueron agredidos por el grupo Nueva Generación. Se informó que, una vez que los manifestantes llegaron a la carretera, las fuerzas de seguridad pública respondieron con violencia; 130 civiles resultaron heridos y 17 “desaparecieron” (CODHES 2008, 113).

posteriores. Según Insight Crime (2017), se estima que a la fecha hay unos 2.800 guerrilleros disidentes de las FARC; esa cifra representa casi el 40 por ciento de todos los milicianos que tenía el grupo antes de los acuerdos. Según la organización, varios guerrilleros desilusionados con la vida civil y ante la amenaza continua de los paramilitares, volvieron a tomar las armas, poniendo en peligro el acuerdo de paz. Dentro de la región del Pacífico Sur, específicamente en Tumaco y sus alrededores la presencia de grupos surgidos de las FARC como “Gente del Orden”, “Guerrillas Unidas del Pacífico” y “Frente Oliver Sinisterra”, han ido adquiriendo fuerza en el territorio (Álvarez, Prado y Cajiao 2018).

3. Las políticas de erradicación de cultivos ilícitos

El inicio del auge de la coca en Nariño, y especialmente en Policarpa, se corresponde con los períodos presidenciales consecutivos de Álvaro Uribe Vélez. El primer periodo se caracterizó por el fortalecimiento del Plan Colombia que, además de suponer una lucha contra las guerrillas, planteaba la lucha contra el narcotráfico a través de su erradicación forzosa, voluntaria o la interdicción (Vargas 2010). A pesar de que el gobierno de Uribe contempla el Desarrollo Alternativo (DA).³¹ dentro del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, y da continuidad a programas de sustitución de cultivos tales como “El Plante”.³² es la reducción de la oferta de las drogas mediante la erradicación técnica de los cultivos ilícitos, ya sea en forma manual o aérea, la que se aplica con fuerza en Nariño. Vargas (2010) señala que los programas de Desarrollo Alternativo son una parte complementaria a la erradicación que busca la vinculación de campesinos a través del Programa de Proyectos Productivos (PPP)³³ y el Programa Familias Guardabosques (PFGB).³⁴ aunque es la erradicación de los cultivos

³¹ El DA pretende ser de una estrategia integral para eliminar el cultivo ilícito al dar al agricultor acceso a otras fuentes de ingresos. El programa evolucionó en los 80 y 90 hacia estrategias de desarrollo más amplias que tienen en cuenta aspectos socioeconómicos determinantes en el cultivo de hoja de coca y de amapola. Las estrategias de acción que supone este concepto van desde la creación de condiciones de acceso a salud, educación, infraestructura, mercados y créditos, hasta la toma de medidas de represión y erradicación forzada (Vargas 2010).

³² El Programa Plante se inició con la administración del presidente Ernesto Samper (1994-1998). Este programa fue un complemento a la campaña de erradicación forzosa de cultivos ilícitos y buscaba contribuir al desarrollo integral de las zonas afectadas, garantizando a corto plazo ingresos económicos para las familias afectadas por la erradicación. Se aplicó también durante la administración de Andrés Pastrana (1998-2002) y continuó durante el gobierno de Álvaro Uribe.

³³ El Programa de Proyectos Productivos (PPP) se enmarca en la Estrategia de Erradicación Manual Voluntaria de los cultivos de coca. Se instauró como un complemento a los fines de reducción de áreas de cultivos ilícitos. Esta estrategia incluye la sustitución voluntaria y es realizada bajo la concertación de las comunidades. Bajo este enfoque se promueve la vigencia de proyectos agrícolas y agroforestales de mediano y largo plazo como cacao, caucho, palma de aceite, cafés especiales, de acuerdo con la priorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

³⁴ Según el CONPES, el Programa Familias Guardabosques, buscaba comprometer a familias campesinas, indígenas y afro-descendientes mediante un apoyo directo “para la recuperación y conservación de ecosistemas, el uso sostenible de los recursos naturales, la implementación de bienes y servicios ambientales y la generación de ingresos alternativos en zonas social y ambientalmente estratégicas” (CONPES 2010, 3669).

mediante la fumigación aérea.³⁵ y a la erradicación manual forzosa,³⁶ la que acaba teniendo prioridad en su gobierno.

Según la UNODC (2012), hacia el 2011, cerca de la mitad de la producción nacional se localiza en tres departamentos, siendo Nariño el principal productor. El Informe de la Misión de Observación sobre los efectos del Plan Colombia en Nariño y Putumayo (2004), señala que después del traslado de las plantaciones de coca del Putumayo a Nariño, este último empezó a recibir fumigaciones, realizándose las mismas con un intervalo de 6 o 7 meses. La UNDOC (2012) muestra los siguientes resultados en la aspersión aérea que se presentó en los principales departamentos productores.

Tabla 3. Aspersión aérea de cultivos de coca (en hectáreas) 2001-2011 en los tres principales departamentos productores

Departamento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nariño	8.216	17.911	36.307	31.307	57.630	59.865	36.275	54.050	39.992	25.940	34.988
Caquetá	17.252	18.567	1.060	16.276	5.452	4.574	5.084	11.085	6.652	16.947	12.888
Cauca	741		1.308	1.811	3.292	1.536	3.567	6.891	11.136	14.450	11.834

Fuente: UNODC (2012, 80)

Como muestra la UNODC (2012), las fumigaciones que se realizaron entre el año 2000 y 2011, evidenciaron la ampliación del número de hectáreas fumigadas con el paso de los años, con un mayor número de hectáreas fumigadas en el 2006 con 59.865 has en el departamento. Paralelamente a estas acciones, el gobierno estableció programas como el PPP y el PFGB. Sobre estos programas un informe de la UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho (2016), señalan:

Los programas de DA en Nariño se iniciaron en 2002, y se desarrollaron bajo la modalidad de Familias Guardabosques (FG) hasta el 2006; a partir del 2007 la intervención incorporó proyectos productivos (PP) junto con la modalidad de FG, y esta combinación se mantuvo hasta 2010, cuando se suspendieron las acciones de FG. Con una suspensión casi total de los programas de DA en el departamento en el 2011, se retomó la acción en el 2012, y se ha mantenido hasta el 2015 bajo las diferentes modalidades que se han implementado a nivel nacional durante este período (UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho 2016, 11).

³⁵ Las aspersiones aéreas inician con el presidente Julio César Turbay en 1987 con la “Operación Fulminante” y se mantienen durante los gobiernos siguientes.

³⁶“La estrategia de erradicación manual en Colombia, se divide en dos modalidades: i) erradicación manual forzosa con Grupos Móviles de Erradicación (GME) y, ii) erradicación manual forzosa realizada por la Policía Nacional y las Fuerza Militares en patrullajes a lo largo del país” (UNODC 2016, 144).

De este modo, el programa de erradicación de cultivos en Nariño se realiza a través de las fumigaciones aéreas, a la vez que se implementan programas de DA. Refiriéndose a esta política antidrogas de Rementería (2001), sostiene que son medidas de “la zanahoria y el garrote”, debido a la falta de coordinación entre los planes de DA y las acciones de fumigación, pues, por un lado, incentivan a los campesinos a cambiar de actividad productiva y, por el otro, los someten a intensas fumigaciones.

La intensificación de las fumigaciones con glifosato durante estos años en el departamento, en especial durante el 2006, dieron paso a movilizaciones campesinas que buscaban que el gobierno las suspendiera debido a los efectos del herbicida en la salud y el medio ambiente.³⁷ A partir del 2005, en parte por las presiones campesinas en distintos sectores del país y a conflictos con Ecuador, sobre los efectos del glifosato, el gobierno priorizó la estrategia de Erradicación Manual Forzada, la UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho (2016), muestran los siguientes datos en el periodo 2001-2014 en Nariño y a nivel nacional.

Tabla 4. Intervención (ha) mediante Erradicación manual y Aspersión aérea en Nariño y a nivel nacional 2001-2014

ERRADICACIÓN MANUAL		AÑO	ASPERSIÓN AÉREA	
27	1.745	2001	94.153	8.216
18	2.763	2002	130.364	17.962
1.095	4.220	2003	132.817	36.910
388	6.234	2004	136.551	31.307
7.030	37.523	2005	138.775	57.630
7.050	41.346	2006	172.025	59.865
14.788	66.392	2007	153.134	36.275
7.803	96.003	2008	133.496	54.050
16.499	60.555	2009	104.772	40.297
21.283	43.804	2010	101.940	25.940
15.008	35.201	2011	103.302	34.988
5.588	30.456	2012	100.549	37.831
5.996	22.121	2013	47.052	8.101
2.575	11.703	2014	55.532	15.205
			Departamental	Nacional

Fuente: UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho (2016,10)

³⁷ Las manifestaciones principalmente se realizaban con la finalidad de pedir la suspensión de la fumigación con glifosato, ayuda del gobierno para la sustitución de los cultivos de coca con proyectos productivos y, sobre todo, dos años de gracia para erradicar los cultivos por parte de los mismos campesinos. Las fumigaciones con glifosato se extendieron en este territorio nariñense hasta el 2014 (Entrevista Clara Mendoza). Las operaciones aéreas con glifosato en Colombia se suspendieron definitivamente en octubre de 2015 (UNODC, 2016).

El Informe señala que esta intervención del Estado no trajo como resultado una reducción del área de cultivo de coca, puesto que para 2006 se identificó un incremento del 9% de los cultivos en relación al año anterior. Entre 2008 y 2010 se aprecia una reducción del área, aunque el cultivo vuelve a tener un mayor auge en el 2013.

3.6. El acuerdo de paz, un nuevo enfoque en la sustitución de cultivos

Durante los diálogos que dan lugar al acuerdo de paz de 2016 se plantearon distintos puntos clave que fueron analizados en varias mesas de negociación. El punto 4 del acuerdo: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” contó con la participación del Estado, el grupo guerrillero y distintos sectores sociales, agrupados en torno a la Cumbre Agraria, quienes definieron la necesidad de terminar con los cultivos ilícitos a través de un plan integral de sustitución de cultivos (Gonzales 2016). Las negociaciones dieron paso a propuestas de acción que debían implementarse a través del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS).³⁸ El PNIS está relacionado, al mismo tiempo, con el punto 1 del acuerdo, el cual señala que la transformación estructural del campo puede permitir una paz estable y duradera. Por ello el PNIS se plantea como parte de la transformación estructural del campo una Reforma Rural Integral³⁹ que favorezca el desarrollo económico de los campesinos⁴⁰ FIP (2018). El PINIS contempla los siguientes principios, componentes y elementos:

Tabla 5. Principios, componentes y elementos del PNIS

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS		
Principios	Componentes	Elementos
Integración del PNIS con la Reforma Integral-RRI	Plan de atención médica	Condiciones de seguridad para las comunidades y territorios afectados por el uso de ilícito

³⁸ El PNIS se pone en marcha mediante el Decreto 896 de 2017. Este decreto articula su funcionamiento, organización, nivel de jerarquía de sus instancias, la relación con los territorios, trazando elementos para el desarrollo del programa según el punto 4 del acuerdo de paz. Mediante el decreto el Gobierno Nacional garantiza durante el año 2017 el despliegue del PNIS en todas las zonas con cultivos ilícitos para que se puedan celebrar acuerdos con las comunidades. La vigencia del PNIS es de 10 años y el Plan Marco de Implementación define productos a cuatro años. Del mismo modo, se conformó la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM, constituidos como un actor que apoya la sustitución de cultivos de uso ilícito.

³⁹ El PNIS también se relaciona con la implementación de obras de infraestructura social que comprende vías terciarias, centros de salud y demás iniciativas contempladas en la Reforma Rural Integral, tales como adecuación de tierras, electrificación rural e instalación de obras de conectividad. Plantea temas como la recuperación de zonas de especial interés ambiental que registran la presencia de cultivos de uso ilícito, en el caso de Parques Nacionales de Colombia. De igual forma, busca mediante mecanismos legales la adjudicación de los predios explotados por los beneficiarios, y de manera especial implementará planes especiales de sustitución en zonas de difícil acceso (Defensoría del Pueblo 2018).

⁴⁰ Al respecto, FARC-EP plantean que la transformación del campo permitiría solucionar las causas históricas que desarrollaron el conflicto armado interno, dentro de las cuales se encuentran la concentración de la propiedad de la tierra y la exclusión del campesinado como sujeto individual y colectivo de derechos.

Construcción conjunta participativa y concertada	Obras de infraestructura social	Acuerdos que formalizan el compromiso de las comunidades y del Gobierno Nacional con la sustitución voluntaria
Sustitución voluntaria	Cierre de la frontera agrícola	Priorización de los territorios
Enfoque diferencial según las condiciones de cada territorio	Plan de formalización masivo de la propiedad	Tratamiento penal diferencial
Convivencia ciudadana	Cronogramas de ejecución	Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo PISDA

Fuente: (Defensoría del Pueblo Colombia 2017, 28)

Como se observa, el PNIS, pretende ser un plan integral que contempla la seguridad y priorización según los territorios, además la construcción conjunta entre las comunidades y autoridades de alternativas que permitan a los campesinos abandonar los cultivos ilícitos y transitar mediante la sustitución a otras actividades económicas, mediante la implementación de Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). Además de cumplir con estos componentes el PNIS, debe respetar a las unidades indígenas y afrodescendientes, garantizando la sostenibilidad ambiental y las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, a través de la ampliación de la presencia del Estado que debe cumplir con la ejecución de los planes integrales, municipales y comunitarios o de sustitución de cultivos de uso ilícito (Gonzales 2016).

El acuerdo incluye la formalización del compromiso tanto de las comunidades con la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, el compromiso pleno de no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos, como el compromiso del Gobierno con la ejecución del plan de atención inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta participativa y concertada de los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo (Acuerdo Final de la Habana (2016) citado por Gonzales 2016, 9).

De otro lado, el PNIS, contempla enfocarse en tres actores principales: cultivadores, recolectores⁴¹ y comunidad en general, a quienes se les ofrecen distintos beneficios, al tiempo

⁴¹ El programa de atención inmediata contempla cuatro elementos: i) asistencia alimentaria inmediata, que comprende la entrega de mercados de su equivalente en bonos o dinero hasta por un año, de acuerdo con las particularidades de la región y las necesidades de los grupos familiares; ii) adecuación de huertas caseras y entrega de especies menores; iii) entrega de proyectos productivos de ciclo corto y generación rápida de ingresos, observando las particularidades de la zona y iv) implementación de proyectos productivos de largo plazo,

que considera como primera opción en la erradicación de los cultivos la sustitución voluntaria; aunque no descarta la erradicación forzosa en aquellos lugares en los que el gobierno no llegue a un acuerdo con la comunidad (Gonzales 2016). De este modo, las familias cultivadoras de coca que tienen la voluntad de erradicar sus cultivos, dependen de los lineamientos establecidos por el PNIS y de su implementación a través de instituciones nacionales y regionales como la Comisión Municipal de Planeación Participativa, en la que se articulan los planes de cada comunidad en el Plan de Atención Inmediata (PAI)⁴² y Plan Integral Comunitario y Municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).

Según la FIP (2018), el PNIS incluye una etapa de alistamiento y otras de socialización de acuerdos y creación de espacios de participación, así como la firma de acuerdos colectivos y vinculaciones individuales. En un segundo momento se encuentra la fase de implementación, que incluye el pago a familias, la verificación de la eliminación del cultivo, asistencia técnica, la generación de entradas económicas y la estructuración de proyectos productivos con una visión de largo plazo. Del mismo modo, los campesinos cultivadores de hasta 3,8 hectáreas de extensión de coca, cuentan con un Tratamiento Penal Diferenciado (TPD) para que pequeños cultivadores puedan acogerse a la sustitución voluntaria sin miedo de ser judicializados (FIP 2018).

Tabla 6. Asignaciones por familia

PERIODO	ASIGNACIÓN/FAMILIA	VALOR/FAMILIA	SUBTOTAL AÑO/FAMILIA
AÑO 1	Ingreso laboral por 12 meses (\$1.000.000)	12.000.000	
	Incentivo de auto sostenimiento y de seguridad alimentaria	1.800.000	
	Proyecto Productivo / Ingresos rápidos	9.000.000	
	Asistencia técnica	1600.000	24.400.000
AÑO 2	Proyecto productivo de largo plazo (incluye algunos costos laborales)	10.000.000	
	Asistencia técnica	1.600.000	11.600.000
TOTAL ASIGNACIÓN POR FAMILIA			36.000.000

Fuente: FIP (2018, 12)

enmarcados en el proceso de Reforma Rural Integral. Para el caso de los núcleos familiares de recolectores se contemplan como beneficios; i) medidas de asistencia alimentaria para las familias recolectoras por el término de un año; ii) opciones de empleo temporal, sin perjuicio de contar con la posibilidad de ser beneficiario de los planes de adjudicación gratuita y subsidio integral (Defensoría del Pueblo 2018, 26).

⁴² El Plan de Acción Inmediata Comunitario (PAI) se define y desarrolla de manera concertada y tiene los siguientes componentes, según las necesidades de cada territorio: programas de guarderías rurales; construcción y dotación de comedores escolares y suministro de víveres; mecanismos de información para facilitar el acceso a oportunidades laborales; programas contra el hambre para la tercera edad y otros de superación de la pobreza y generación de ingresos, y brigadas de atención básica en salud” (FIP,2018).

La FIP (2018), señala que hasta el 16 de noviembre de 2017 se registraron en todo el país 54.180 familias vinculadas voluntariamente al PNIS, las cuales cultivaban una cifra aproximada de 40.000 ha de coca. Así mismo, se señala que del universo de las familias vinculadas al PNIS, 24.850 habían recibido el primer pago o se encontraban en proceso de entrega.

3.6.1. El PNIS en el departamento de Nariño y las tensiones en su implementación

Como resultado de la implementación del punto 4 del acuerdo de paz, la Dirección para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, ha suscrito con las comunidades del departamento de Nariño 29 acuerdos de sustitución voluntaria de este tipo de cultivos. Entre estos acuerdos se destacan los planes de sustitución firmados en los municipios de Tumaco y Policarpa, incluidos dentro de los 170 en los que el PNIS debe desarrollar el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)⁴³ los cuales presentan, (i) afectación del conflicto armado, (ii) cultivos de uso ilícito y economías ilícitas, (iii) niveles de pobreza, y (iv) capacidades institucionales (FIP, 2018).

Particularmente Policarpa, es un escenario de relevancia en el postconflicto. En uno de sus corregimientos se instaló uno de los centros de acogida para los guerrilleros de la FARC-EP desmovilizados, conocidos como Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)⁴⁴ (Verdad Abierta 2019). Este hecho le ha significado a Policarpa muchas tensiones, especialmente con las disidencias de estos grupos⁴⁵ De este modo, el no cumplimiento de los planes de desmovilización y varias trabas con la implementación del PNIS, han afectado el tránsito de los campesinos cultivadores de coca a economías lícitas.

El reporte de la FIP (2018) y de la Defensoría del Pueblo (2017), dan cuenta de las dificultades de implementación del PNIS en distintas regiones del país en donde, al igual que ha ocurrido en el Municipio de Tumaco y Policarpa, se ha presentado la ejecución acelerada

⁴³ Para el desarrollo del PDET se firmó el decreto presidencial 893 de 2017, el cual busca una transformación de la ruralidad en 16 regiones prioritarias que abarcan un total de 170 municipios del país (FIP 2018).

⁴⁴ La zona de acogida a guerrilleros de las FARC-EP en Policarpa, tuvo lugar en el corregimiento de Madrigal. Como parte del acuerdo de paz se instalaron en el cerro de La Paloma, en lo alto de la vereda Betania, en donde se concentraron poco más de 200 guerrilleros, que fueron trasladados posteriormente a otro lugar fuera de Policarpa.

⁴⁵ En una alerta temprana emitida el 20 de noviembre de 2018 la Defensoría daba cuenta de que en Policarpa, Cumbitara, Leiva y El Rosario estaban incrementando acciones violentas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Frente Estiven González, compuesto por ex integrantes de las extintas FARC que no se acogieron al proceso de paz (El Espectador 2018).

de programas de erradicación forzosa en lugares que registran la celebración de Acuerdos Colectivos y Regionales de Sustitución Voluntaria, lo que ha generado confrontaciones con la fuerza pública, movilizaciones y protestas sociales, con la muerte de campesinos que se oponen a la erradicación forzosa. Los informes señalan igualmente las amenazas y afectaciones en contra de la integridad de la población rural debido a las presiones ejercidas por grupos armados al margen de la ley y disidencias de las FARC.

En el caso concreto de Policarpa, el Acuerdo Regional realizado con el COCCAM Nariño, firmado el 4 de marzo de 2017, presenta un retraso en la ejecución, además de reportarse amenazas por parte de los grupos armados a los campesinos que se vinculen al PNIS. El reporte del FIP (2018) y de la Defensoría del Pueblo (2017), destacan que existe incumplimiento de las condiciones de seguridad para las comunidades afectadas por los cultivos. Esto hace que, aunque exista la disponibilidad de acogerse a la sustitución voluntaria, las amenazas contra la población civil obstaculizan los acuerdos. Como señala la Defensoría del Pueblo, “si desde el Estado, se impulsa con la población la estrategia de sustitución voluntaria, los grupos armados legales ejercen presión para que no abandonen las actividades de cultivo, recolección y procesamiento de la pasta base de coca, valiéndose de amenazas, hostigamientos y asesinatos colectivos” (Vega et al., 2017, 84).

El incumplimiento de lo acordado no solo tiene implicaciones en la confianza y credibilidad de las instituciones, sino que genera un riesgo de resiembra y el posible aumento de las hectáreas de coca debido a la generación de subsidios que pueden generar efectos no deseados como la expansión del área y las personas dedicadas a los cultivos de coca.

Capítulo 3

Producción agrícola familiar y narcotráfico

Mira cómo tengo las manos de tanto raspar coca compadre
- Sí, es verdad, pero qué le vamos a hacer. Es en lo único que nos está yendo bien. O qué quiere que nos devolvamos a seguir jornaliando en esas fincas por un sueldo miserable. No eso ni loco. Mejor vamos a seguir raspando coca a ver si algún día la suerte nos cambia y salimos de esta pobreza miserable.

Corrido “El cocalero”

Introducción

Este capítulo busca visibilizar de qué forma la llegada de la coca al corregimiento de Sánchez y sus veredas cambió estructuralmente la forma de vida de las familias de la comunidad pasando a formar parte de la cotidianidad de los pobladores. Esto ha sido así, a tal punto, que ha terminado desplazando a otro tipo de economías como la aurífera, desarrollada tradicionalmente en la región, y el cultivo de productos como el arroz, el maíz o el plátano. Del mismo modo se busca exponer los riesgos que supone para las familias vivir de un cultivo ilícito.

En la primera parte del capítulo se relata la situación de abandono estatal de Policarpa, y la injerencia de los grupos armados en este territorio. En este apartado también se describe la evolución del cultivo de la coca desde su introducción en la región, pasando por su auge a partir del 2000. Del mismo modo, se describen los cambios sociales asociados al cultivo, los cuales implican un cambio en la mentalidad del campesino que deja de producir para el auto sustento familiar para dar paso a una agricultura que le genera un excedente.

En un segundo apartado veremos cómo las familias campesinas se involucran en el circuito de la coca a través de la siembra, producción de pasta base y la comercialización de la mercancía, lo cual implica una relación indirecta con los grupos armados que regulan el mercado. Mientras se da cuenta de esta relación, se describe igualmente la forma en que se organizan las familias para realizar el trabajo en estas etapas.

En un tercer apartado, se describe cómo los cultivos crecieron durante años hasta ponerse en la mira del gobierno que implementó con fuerza entre el 2004 y 2009 la política de

erradicación de cultivos ilícitos, incluyendo la fumigación con glifosato y la erradicación manual forzosa. Hechos que están particularmente grabados en la memoria de los campesinos, por ser un tiempo de pobreza y por la exacerbación de la violencia ocasionada por el enfrentamiento entre grupos paramilitares y guerrilleros. En los años siguientes el territorio continuó siendo un importante escenario del conflicto armado interno del país, presentando un nuevo auge cocalero hacia el 2010, con la llegada al poder de Juan Manuel Santos. Finalmente, en el apartado se describen las tensiones y las expectativas que genera la posible supresión de la economía cocalera del territorio después del Acuerdo de Paz de 2016.

1. Policarpa: presencia de grupos armados, ausencia del Estado

La coca llegó a Policarpa a mediados de los 90 cuando algunos campesinos empezaron, aisladamente con los cultivos, pero entre el 2000 y 2001 el municipio recibe a campesinos, la mayoría de la región, que inicialmente se habían radicado en el Putumayo y el Caquetá, atraídos por los mejores jornales que recibían como trabajadores de la coca. Con ellos trajeron la coca para sembrarla en sus parcelas cuando estos departamentos fueron fumigados con glifosato. Del mismo modo, la coca llegó de municipios como Llorente y Tumaco. Algunos de los entrevistados como Margarita Rosales, eran niños cuando la coca llegó a Sánchez, otros, como el señor Pedro Acosta, quien es además presidente de la vereda Las Varas, fueron parte de la instauración de los cultivos en el corregimiento.

Lo que yo recuerdo de la llegada de la coca es que la semilla había que comprarla lejos y era carísima, mi papá y otros de la vereda la compararon al mismo tiempo para que fuera más barato, porque decían que era difícil traerla (Margarita Rosales, mujer cocalera, en entrevista con la autora, vereda El Cocal, 11 de septiembre de 2018).

Yo trabajé unos 4 años en el bajo Putumayo, en Orito, cuando fumigaron fue que regresé, volví ya con familia. Yo quería ayudar a los que estaban aquí y, primero, trabajamos a jornal para comparar la semilla, después con mis hermanos le metimos mano a la finca y empezamos a sembrar, en la familia trabajábamos todos y fuimos arreglando las matas (Pedro Acosta, presidente veredal, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 15 septiembre de 2018).

La migración campesina “foránea” también empezó a crecer. Según las entrevistas, se empezaron a comparar tierras y a buscar otras baldías para adaptarlas al cultivo. La llegada de la coca provocó un cambio en la economía tradicional presente hasta los años 90 cuando los

cultivos de la región como el maíz o el cacao eran básicamente de autoconsumo debido a la baja inserción de la región en la economía nacional que hacía que estos no tuvieran un mercado. La principal actividad económica estaba relacionada con la minería, desarrollada por las familias de Policarpa desde el periodo colonial. Nelly García, líder comunitaria de su vereda y dirigente de la COCCAM relata:

Las primeras personas que llegaron aquí trajeron las semillas del plátano, la yuca y ellos las cultivaron para el autoconsumo y el poco dinero que manejaban venía de la minería artesanal, que les servía para comprar lo que ellos no producían como la sal. El aceite lo conseguía con la crianza de marranos y pues el trabajo se hacía a préstamo, es decir un día cultivaban la tierra de alguien y al siguiente la del vecino, así se daban la mano. Cuando empezaban las cosechas la gente se prestaba igualmente el producto hasta que llegue la nueva cosecha. Para coger el dinero era con la minería artesanal con la barra, la batea, el amocafre que sirve para raspar la peña. La gente barequeaba, incluso las bateas las hacían ellos mismos con sus herramientas. Las mujeres se dedicaban a la minería, aunque los hombres ayudaban cuando había trabajo difícil como voltear piedras (Nelly García, líder comunitaria, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 10 septiembre de 2018).

La forma de trabajo a partir de la cual las familias trabajaban la tierra se define como “préstamo”, es decir que existía una vinculación de la comunidad en el trabajo de los vecinos, no se habla de un salario o de un jornal sino de una suerte de cooperativismo a través del cual se laboraba la tierra. En las entrevistas los campesinos también mencionan que era el trueque el que determinaba el mayor parte del intercambio, aunque sí se conocía de la economía monetarizada, esto era posible únicamente a través de la minería artesanal del oro. El relato de la señora Teresa Ayovi, una mujer mayor de la vereda las Varas ejemplifica cómo era el trabajo minero.

Desde que era niña a mí me gusta la batea, el amocafre y el mate para echar el orito. Desde esa edad la mamá llevaba al río el plátano, llevaba su olla, su carne para hacer el tapado, cocinaba, comíamos y seguíamos haciendo el playado. Yo no me dedique a la minería desde que tengo 10, desde esa edad ya me gustó la batea. Lo que es ahora yo voy a los cultivos de coca, pero no me olvido de la batea, me gusta playar. Más playamos los antiguos, los jóvenes no van, que mucho sol, que no sé qué, prefieren la coca (Teresa Ayovi, mujer minera, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 15 septiembre de 2018).

Escobar (2010), señala que el Pacífico Colombiano se pobló en base a auge extractivos detrás de productos como el oro, la madera, la pesca y la coca. De estos auges, el autor señala que el que causa cambios más acelerados en la región es la coca, pues exagera las condiciones de la población ya afectada por el abandono estatal. Con el tiempo, los sembríos fueron aceptándose como parte del quehacer económico de la comunidad y la economía de la coca fue subordinando todo el dinamismo económico, influyendo en los negocios legales y determinando un mercado regional que se rige por el flujo de dinero proveniente de ésta. Así, detrás de la rentabilidad de la economía de la coca se activaron negocios como la prostitución, la venta de insumos químicos, indispensables para la elaboración de la pasta base de la cocaína, al igual que el comercio en general que encuentra en la circulación del dinero proveniente de la coca la posibilidad de una rentabilidad. Como señala Isabel Narváez, “lo que más se conoce del Estado, es el Ejército, que siempre viene por acá, más no porque la educación, la salud, las vías todo está a medias. Más hacen los campesinos que el mismo gobierno” (Isabel Narváez, secretaria de la Junta de Acción Comunal de Sánchez, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 3 septiembre de 2018).

Aun cuando los cultivos de coca generan un gran movimiento económico, este no suple la falta de inversión social, notoria años después de la llegada de la coca. El corregimiento de Sánchez está conformado por siete veredas, y constituye el centro poblado más cercano para las mismas. Es también el último poblado al que puede accederse por carretera desde la vía Panamericana después de 4 horas de viaje en vehículo por una carretera de segundo orden. Desde Sánchez a las veredas es posible acceder únicamente por caminos de trocha, o a través de una lancha que se internan en las aguas del río Patía. En esta región la presencia e inversión del Estado es casi nula, el acceso a servicios básicos como agua y luz son extremadamente deficientes, al igual que la cobertura en salud y educación. Los jóvenes en especial son críticos con la ausencia estatal y a la falta de inversión social. Como señala Jaime Maldonado, un joven residente en Sánchez:

El principal problema que tiene la comunidad es el gobierno, ellos atacan la coca y la minería ilegal, pero no hay ningún proyecto para la comunidad, no hay vías, ni la posibilidad de vender los productos que uno cultiva por acá. Las organizaciones que hay en la comunidad no han mantenido proyectos que evidencien un cambio, ellos hacen asambleas, pero más de eso no hay. En temas de la salud y la educación estamos estancados (Jaime

Maldonado, joven cocalero, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 13 septiembre de 2018).

Desde que la coca llegó los cultivos empezaron a crecer rápidamente, la economía se reactivó dando paso a un alto flujo de dinero. En este tiempo la presencia de la guerrilla se volvió más visible, el grupo mantenía legitimidad frente a los campesinos y empieza a regular la economía cocalera, al permitir que los campesinos mantengan los cultivos. La guerrilla de las FARC, inmersa en el conflicto interno colombiano, tiene presencia en el territorio desde antes de la llegada de la coca, desde inicios de los años 80. Este grupo mantuvo durante un largo tiempo una hegemonía que es reconocida por la población y es aceptado como legítimo por las familias campesinas debido al abandono experimentado por el Estado y sus instituciones. Kaldor (2001) y Münkler (2005), hablaban precisamente de la facilidad de la instauración de actores armados en lugares en los que el Estado ha perdido el monopolio legítimo de la violencia, logrando así constituirse en autoridad en el territorio que controlan.

La presencia de las FARC en Policarpa a través del frente 8 y 29 empieza a verse perturbada con la incursión e instalación de grupos paramilitares desde el año 2000, un poco más tardíamente, en 2005, en Sánchez. Es a partir de este momento que la población empieza a sentir las consecuencias de sus cultivos ilegales. El manejo económico y territorial, deja de ser exclusivo de las FARC, y los enfrentamientos no se hacen esperar. Las confrontaciones tienen lugar principalmente en la zona urbana de Policarpa con quienes se disputan el control de la economía y de las principales vías de comunicación, como la carretera que conduce a la vía Panamericana y el río Patía, principal vía de acceso a la costa pacífica. En Policarpa sucede como sostienen Kaldor (2001) y Münkler (2005), cuando definen las “nuevas guerras”, que el campo se convierte en un escenario de disputa fundamental para los actores armados quedando desde entonces los campesinos en medio del fuego cruzado.

Hablar de la violencia y de los grupos armados no es sencillo para los entrevistados, las respuestas a este tema son más bien generales y la mayor parte de los datos importantes se obtienen cuando la grabadora no está encendida. Los entrevistados coinciden en señalar que, desde que inició el conflicto el mayor riesgo que corren es el de ser señalados como colaboradores, ya sea de la guerrilla o de otro grupo armado. Del mismo modo reconocen que al haber incursionado en los cultivos ilegales es poco lo que pueden reclamar en términos de

justicia al Estado, se sienten criminalizados y juzgados ante la posibilidad de ser relacionado con los grupos armados. Andrés Males, un joven raspachín, señalaba:

Reclamar justicia no hay a quien, cuando nos ven así con botas, como campesinos que somos piensan que somos guerrilleros o que tal vez estamos de narcotraficantes, yo creo que la gente se acostumbra a ya no reclamar porque no hay a quien (Andrés Males, joven cocalero, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 5 de septiembre de 2018).

Al ser parte de la población civil, las familias campesinas se ven forzadas con frecuencia a abandonar su tierra y a soportar la pérdida de sus seres queridos. En Policarpa se dio la desmovilización de los integrantes del Bloque Libertadores del Sur de las AUC en el 2005, pero luego, se formaron nuevos grupos disidentes como las “Autodefensas Campesinas de Colombia Nueva Generación”, además en el 2009 emergen otras bandas criminales como los “Rastrojos” y las “Águilas Negras”, que se sumaron a los grupos ya existentes y que complicaron aún más la situación de los campesinos. Esta realidad se repite en el 2016 con la firma de Paz entre el gobierno y las FARC, pues con una dinámica similar, reaparecen grupos disidentes que siguen en la disputa por la acumulación y el control. Los campesinos también sienten de forma directa el control del Estado en sus vidas a través de la regulación de las plantaciones.

1.2. Los campesinos ya no piensan sino en la coca

Aunque las familias campesinas saben que su trabajo está en la base del enriquecimiento de otros sectores como comerciantes y transportistas que obtienen mayor beneficio, continúan con la siembra de la coca. Son conscientes también del problema social y legal que acarrea el cultivo, pero se arriesgan a vivir de este modo. Entre las razones que los campesinos esgrimen para cambiar su producción tradicional por la coca están el volumen y el peso en relación a productos como el plátano, el cacao o la yuca. Al encontrarse en lugares de difícil acceso, los campesinos coinciden en afirmar que transportar coca se les facilita por la ligereza del producto, aunque en las parcelas se cultiva junto con la coca sembríos de pancoger (plátano, yuca, maíz) y además existen terrenos para ganado. Alexander Mancilla, tiene 16 años, desde su perspectiva señala que no es de estos productos de los que se espera generar rentabilidad.

Vender la pasta de coca, incluso vender la hoja de coca, es más rentable que vender los productos que tradicionalmente se cultivan aquí. Salir de la finca, cargando a veces a la

espalda o a caballo el plátano o la yuca, es muy duro y lo que pagan en el pueblo no representa lo que cuesta llevarlo hasta allá (Alexander Mancilla, Joven cocalero, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 17 de octubre de 2018).

Entre los aspectos atractivos de la siembra de coca está también el corto periodo de tiempo espera en la producción de la cosecha y la demanda asegurada que tiene la coca en el mercado, lo que permite al campesino hacer proyecciones de ganancia. Algunas investigaciones (Bedoya, 2004, Castrillón 2007, Laserna (1997)) sustentan este hecho.

Dado que en esta región no existe un consumo tradicional de la hoja de coca toda la producción se destina al narcotráfico y su producción no puede realizarse sin tener en consideración la “protección”, que los grupos armados ofrecen para este cultivo, lo que lleva a las familias a tener, les guste o no, contacto con los grupos paraestatales. La actividad cocalera involucra prácticamente a todos los miembros de la comunidad, convirtiéndose en un factor de empleo que los ocupa desde la siembra, la recolección, la fumigación y su procesamiento. Las familias campesinas tienen una forma de ingreso adicional gracias al trabajo de sus integrantes como “raspachines” en parcelas vecinas. Los miembros de una familia pueden vender su fuerza de trabajo mientras esperan su propia producción.

Como señala Durston (1998), las familias rurales funcionan como una “empresa” en la cual se cuenta con el aporte de todos sus miembros para sacar adelante la unidad agrícola y las rentas del hogar. Según el autor, existe una estrecha relación entre los objetivos de esta “empresa” y los objetivos personales del jefe de familia, los cuales pueden estar direccionados a proporcionar un bienestar económico, un hecho que a su vez es legitimado por los miembros del hogar, lo que le permite al jefe del hogar, un control sobre el trabajo de los hijos. Según Durston (1998), mientras los hijos e hijas son jóvenes, tienen una capacidad productiva similar a la de un adulto, esto sumado al trabajo de los padres, facilita que el hogar tenga una alta posibilidad de escapar de la pobreza.

En el trabajo como raspachines se involucran especialmente jóvenes. Nos señala Mariela Ordoñez de 20 años y vecina de la vereda las Varas:

Con la llegada de la coca la estrategia de supervivencia de las familias ha cambiado mucho, para bien y para mal. Para bien porque los ingresos económicos son más altos, podemos

comer, podemos vestir y podemos tener acceso a salud y educación que nosotros mismos financiamos gracias a la coca, y malo porque la coca trae también violencia. Aparte de la coca, la región tiene la minería, más posibilidades económicas no hay (Marinela Ordoñez, mujer cocalera, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 10 septiembre de 2018).

El sembrar coca no supone sin embargo para las unidades agrícolas familiares una fuente de altos excedentes económicos. En realidad, el jefe de la familia puede entrar en una suerte de endeudamiento progresivo con los dueños de almacenes fungicidas y con los vendedores de precursores químicos que se utilizan para la elaboración de la pasta base, como la gasolina. Cuando el hogar campesino logra que la coca genere un excedente monetario, este le sirve para suplir carencias. Los campesinos ven en la economía de la coca es la posibilidad de mejorar su condición de vida, los ingresos extra que recibe se invierten en educación para los hijos, en salud, en vivienda e inclusive en gustos o en organización comunitaria.

Por otro lado, los campesinos sostienen que la circulación del dinero en el pueblo depende de las cosechas de los campesinos. Cuando hay cosecha entonces la economía del pueblo se reactiva. Cómo señalaba Pontes (2012), la economía campesina que gira en torno a cultivos ilegales no se encuentra dentro de una economía aislada, sino que existen múltiples relaciones entre el tipo de economía que se deriva de este cultivo y las economías legales a los fluye el dinero ilegal. El dinero ingresa en un nuevo circuito y deja de percibirse como ilegal. Así lo expresa el joven Felipe Arteaga, vecino de la vereda el Cocal, quien trabaja como raspahín en las fincas:

Cuando uno sale al pueblo encuentra de todo, zapatos, ropa, bebida, lo que usted quiera, pero eso sí el precio en comparación a lo que cuesta en las ciudades como en Pasto, no es ni parecida, aquí el precio lo triplican, por el difícil acceso dicen. Pero no importa, el campesino compra y bebe hasta que se acaba la plata y después vuelve al trabajo, si uno piensa toda la ganancia se queda en el pueblo, con gente de afuera que ha venido a poner su negocio (Felipe Arteaga, joven cocalero, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 13 septiembre de 2018).

Como mencionamos anteriormente, la inversión social del Estado es casi nula en las veredas. Frente a la orfandad del Estado es la organización comunitaria la que prima gracias a los recursos que provienen de la coca. El presidente de la vereda las Varas, es crítico a la ausencia del Estado:

¿Es la coca motora de progreso?, progreso en medio de tanta violencia es difícil, pero una cosa si es cierta, mire cuando hay plata de la coca y la comunidad se organiza se puede hacer cosas que el Estado no hace, como pagarles a los maestros para las clases de los niños, arreglar la escuela o abrir vías. La organización de la vereda se puede gracias a la coca, porque sin coca no hay plata y sin plata no se hace nada (Pedro Acosta, presidente veredal, en entrevista con la autora, vereda Las Varas, 15 de septiembre de 2018).

Los campesinos saben que no todo es bueno con la coca. Más allá de la violencia que atrae, el sembrío ha causado destrucción de los bosques. En veredas como El Cocal la tala de árboles es tan significativa que en verano la comunidad sufre por la carencia de agua. Margarita Rosales, vecina de la vereda el Cocal, nos cuenta sobre este hecho:

En verano acá no hay agua, se sufre por agua. Los animales no tienen agua, la familia de uno mismo no tiene agua y eso es malo, antes eso no pasaba porque había harta selva y animales salvajes también había, lo que es ahora por la coca ya no tenemos agua, la gente sigue sembrando coca y el monte se está acabando (Margarita Rosales, mujer cocalera, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 11 septiembre de 2018).

Para mantener los cultivos los campesinos usan varios agroquímicos que también afectan la fertilidad del suelo, entre los productos más usados está el Manzate, Tamarón, Triple 15, que se usan con gran intensidad contaminando con ello ríos y quebradas sin que haya un control. En la visita a las fincas fue posible constatar el abandono de varios frascos de estos productos a orilla de los riachuelos y quebradas. Los campesinos no parecen darle importancia.

Volviendo a los cambios que ha traído consigo la implementación de la economía de la coca en la comunidad de Sánchez, es quizá la pérdida de la soberanía alimentaria, conjuntamente con el tema medioambiental y la violencia, uno de los cambios más significativos que puede palpase en la zona. Al ser más barato comprar que producir para el autoconsumo todo se compra. Este es uno de los hechos que más llama la atención, el abastecimiento de las familias campesinas viene de fuera, es muy poco el comercio interno de productos que inclusive se producen en la región, como ocurre por ejemplo con el arroz. En su afán de producir coca, los campesinos han dejado de lado la producción agrícola tradicional.

Es que, si la rentabilidad está en la coca, entonces se produce coca y lo que se necesita se va y se compra. Los cultivos legales son pocos, porque el campesino invierte y cuando quiere

venderlos no saca ni lo que invirtió, así es acá. Es mejor sembrar coca, porque si no, la familia de uno es la que sufre. Todos sembrando coca y sólo uno en otra cosa, eso no puede ser (Pedro Acosta, presidente veredal, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 15 septiembre de 2018).

Con el ingreso a la economía de la coca, gran parte de su producción de autoconsumo de las familias se pierde y su alimentación y bienestar pasa a depender del mercado de la coca, de la posibilidad de poder satisfacer la demanda externa de este producto. Por otro lado, al no existir un producto tan rentable como la coca la familia campesina no se interesa por buscar un ingreso alternativo. La demanda crece y con ello la necesidad del campesino de extender los cultivos. Los campesinos señalan que dentro de la comunidad todas las tierras tienen dueño, sin embargo, al internarse más en la selva, los campesinos pueden llegar a colonizar El Parque Nacional Natural Sanquianga, que pertenece al Estado, y hacer uso de esta tierra.

Durante el recorrido por las fincas llama mucho la atención que las familias estén constantemente renovando el cuidado del cultivo y su método de obtención de la pasta base. Las familias se tecnifican en su “cocina” y en sus cultivos, sin embargo, esta tecnificación no se presenta en los cultivos tradicionales. Finalmente, otro elemento relacionado con las consecuencias negativas que tiene para la familia la ilegalidad de los cultivos es, como veremos a continuación, la relación del circuito económico de la coca y con los diversos actores que lo controlan y regulan.

2. El circuito económico de la coca en su primera fase

Las impresiones que se recogen en este apartado fueron posibles gracias a la visita a dos fincas cocaleras en la vereda “Las Varas” y “El Cocal”, en las que pude constatar de primera mano la forma en que los campesinos realizan el proceso de obtención de la pasta base y dialogar con algunos líderes comunales. En estas veredas se puede observar algunos sembríos de cacao y maíz, además de los cultivos de coca que ocupan la mayor parte del terreno. Los campesinos dialogan sobre el cultivo como algo cotidiano, la mayoría de las personas de las veredas están involucradas en esta actividad y aunque son conscientes de la ilegalidad, se asumen como campesinos, para ellos esta es una fuente de ingresos legítima que se justifica por la ausencia del Estado y la dificultad para vivir de otros cultivos.

Como señalan Duncan (2013) y Dombois (2016), en la cadena del narcotráfico existe una clara división del trabajo con sus respectivas particularidades de acuerdo a la ubicación geográfica de cada una de las fases del negocio. En Sánchez, la siembra, el procesamiento y la comercialización de la base de coca forman un circuito económico al que se vincula el sector campesino. En este circuito, sin embargo, los agricultores no pasan de ser productores de hoja y de pasta base que no llegan a estructuras del mercado más complejas, pero debido a la cantidad tan significativa de campesinos dedicados a la actividad, este circuito deviene una fuente de financiación importante para los actores del conflicto interno presentes en Sánchez.

Además, como señala Duncan (2013), en las primeras etapas: plantación y elaboración de la pasta base, el producto es manejado como mercancía, lo que implica una mayor criminalización por parte del Estado de quienes se dedican a esta actividad. Esto implica, según el autor, que las políticas contra el narcotráfico se encaminen a reducir la oferta de la mercancía, controlando ante todo la proliferación del cultivo y no su circulación que es la que manejan los actores armados.

Para describir el funcionamiento de este circuito económico en relación a la primera etapa de la siembra, es indispensable partir de la relación que presentan las familias con la tierra. El ingreso de las familias al negocio inicia con la consecución de las semillas. Aunque cuando llegó la coca se debía pagar un precio elevado por la semilla, en la actualidad el precio se ha reducido considerablemente. Para sembrar una hectárea de coca se necesitan entre 10.000 y 12.000 plantas por hectárea, algunas de estas plantas se pierden a causa de los hongos. El costo de la semilla (variedad guayaba), que es la que se siembra preferentemente en las veredas es de 300 pesos, (unos 10 centavos) por planta. Por facilidad estos semilleros se organizan cerca del terreno a sembrar, se cuidan por un mes y cuando están listos se trasplantan.

Con la organización del semillero, la familia inicia una relación con otros actores, no necesariamente ilegales, como son los vendedores de agroquímicos, con los que generalmente empiezan endeudándose hasta esperar la producción de la primera cosecha. Como explica Juan Ontaneda, un joven cocalero de la vereda las Varas: “En mi caso yo tengo una buena relación con el dueño del almacén de los agroquímicos, yo tengo mi saldito ahí, si necesito me fia y cuando hay cosecha se paga y así vamos dando la vuelta” (Juan Ontaneda, joven cocalero, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 16 de septiembre de 2018).

La organización de la familia en torno a la siembra se realiza con la ayuda de todos los integrantes del hogar. En esta etapa y hasta la segunda cosecha, las familias campesinas no generan ganancias, por lo que se trata de limitar el uso de mano de obra extra familiar, contratando únicamente a jornaleros para realizar labores duras del campo y únicamente, cuando estas actividades no pueden ser cubiertas por la unidad agrícola familiar.

El trasplante de las semillas al terreno puede durar hasta 2 meses. Las plantaciones de coca variedad guayaba empiezan a ser productivas a partir de los 8 meses de siembra y continúan siendo productivas por un periodo de hasta 5 años. Después de este tiempo es necesario volver a plantar. Pasados los ocho meses de espera para la primera cosecha, las plantas pueden ser cosechadas cada tres meses, con un rendimiento de cuatro cosechas al año, esto gracias al uso intensivo de agroquímicos con los que los campesinos intervienen las plantas. Para producir un kilogramo de pasta base son necesarias 40 arrobas de hoja de coca variedad guayaba. Se debe aclarar, además, que la producción de hoja de coca pasa a ser de 80 arrobas de coca en la segunda cosecha y que una hectárea de coca puede llegar a producir hasta 300 arrobas, con los que se puede obtener unos 7 kilos de pasta base por cosecha.

Además de esta variedad, que es la que más se siembra, también se cultivan otras variedades como la bonita, la boliviana y la cuarentona (produce hoja cada 40 días). El establecimiento de una hectárea de coca tiene un costo promedio de 4 millones de pesos, unos 1.100 dólares. La mayor parte de este rubro se invierte en la adecuación del terreno y en el pago de jornales a trabajadores. Después de la segunda cosecha el mayor costo que deben cubrir los campesinos se relaciona con el pago de fungicidas y fertilizantes.

Tabla 7. Inversión en producción de una hectárea de coca, variedad guayaba

Descripción de la actividad	Unidad	Costo de unidad en dólares	Costo total en dólares
Producción de la primera cosecha			
Desmonte/pago jornales	15	12	180
Compra de semillas/variedad guayaba	120 arrobas	50	150
Siembra de semilla / Pago de jornales	10	20	200
Deshierbes 60 jornales y fumigación	60	1200	1200
Compra de agroquímicos	320	320	320
Pago alimentación de trabajadores	150	150	150
Total inversión			2250

Fuente: Trabajo de campo

Desde esta primera fase de sembrado las familias tienen que aceptar que va a producirse un cambio en la forma de agricultura familiar de autoconsumo para ingresar a un cultivo que se rige por las leyes del mercado ilegal, y este mercado depende del conflicto entre actores armados en la región. Los campesinos señalaron en las entrevistas que los grupos armados no cobran un impuesto por plantar coca, sin embargo, es posible que cuando necesiten dinero pidan una contribución a las familias. Esta contribución se justifica como “protección” ante el posible acoso de las autoridades o como “aporte” al sostenimiento de los grupos. Esto lleva a las familias a subordinar la producción a la “buena” relación que deben mantener con los grupos. Dos vecinas de El Cocal, Margarita Rosales y Carla Robles, nos señalaban justamente esa relación con los grupos armados:

¿...los grupos armados?, pues ellos pueden pedir un impuesto para dejarlo a uno trabajar tranquilo, y para no tener problema pues uno tiene que colaborar, pero no es siempre, solo en ocasiones ellos vienen y piden colaboración (Margarita Rosales, campesina cocalera, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 11 septiembre de 2018).

Para sembrar no hay que pagar impuesto, las familias siembran tranquilas, pero cuando los grupos necesitan, entonces toca colaborar para no tener problemas (Carla López, joven cocalera, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 11 septiembre de 2018).

Las familias son también responsables de la elaboración de la pasta base de coca. Esta segunda etapa, inicia en la época de cosecha para la cual el grupo familiar se prepara contratando raspachines que se encargan de arrancar las hojas de la planta para transportarlas hasta los centros de acopio. Las familias albergan entre 3 y 5 trabajadores, dependiendo de las hectáreas de coca a cosechar. Cuando los trabajadores no pertenecen a la comunidad, el dueño de la finca debe alojarlos y proveerles de alimentación mientras dura la cosecha. Entre los raspachines, hay una alta cantidad de jóvenes varones, provenientes de otras regiones del país que, al no tener tierra para cultivar su propia coca, van de finca en finca vendiendo su mano de obra. Para acogerlos los propietarios de las fincas deben adecuar sus casas.

Es difícil describir con detalle la relación que se genera entre los grupos armados y las familias desde que se inicia la recolección de la hoja, pasando por su procesamiento para convertirla en pasta base, hasta su comercialización. En esta cadena de producción entran diversos actores que condicionan este circuito y que no necesariamente son actores armados.

Entre estos cuentan, por ejemplo, quienes abastecen de insumos agrícolas y precursores para obtener la pasta base de coca. Existe toda una red de compradores e intermediarios que surten a la familia agricultora de los químicos que necesita.

Aunque los campesinos compran los productos a estos intermediarios y no tiene mayor relación con estos que la transacción monetaria, los intermediarios deben tener el beneplácito de los grupos armados para poder comercializar los productos, de modo que existe todo un entramado, difícil de describir, detrás de la venta de productos como gasolina, éter, ácido o cetona cuya venta no es libre en la región. Es decir, se encuentra penalizada por la ley y, por tanto, también requiere la “seguridad” que pueden garantizar los grupos armados paralelos al Estado para lograr comercializarlos. Daniel Pineda, un joven raspachín, describe esta situación:

Como le dije, los grupos armados no solo se benefician de los productores de la coca, sino que cuando ellos deciden piden su aporte a los negocios que hay en el pueblo. A ellos claro, les interesa que aporte el finquero cocalero, pero también regulan y piden colaboración en los negocios y a los comisionistas (Daniel Pineda, joven raspachín, entrevista con la autora, vereda El Cocal 16 septiembre de 2018).

Un ejemplo de este entramado se presenta con la venta de gasolina, sobre la cual existe un gran control por parte de las autoridades que hace que este insumo sea mucho más costoso de lo que resulta en la ciudad. Este producto se requiere en gran cantidad para la elaboración de la pasta base y la familia agricultora debe proveérsela a como dé lugar. Por la gran demanda de gasolina las estaciones de gasolina no pueden surtir la totalidad de los requerimientos por lo cual existe un gran contrabando de ésta. Para la producción de un kilogramo de coca, el campesino debe hacer una fuerte inversión en este producto.

Tabla 8. Costos de la elaboración de un kilo de pasta base de coca

Descripción de la actividad	Unidad	Costo de unidad en dólares	Costo total en dólares
Mantenimiento terreno/deshierbe	6 jornales	70	70
Compra de agroquímicos/fumigación	700 dólares	700	700
Pago alimentación de raspachines	150 dólares	150	150
Pago recolección de hoja de coca/raspachines	45 arrobas	2,50	150

Pago diario al “Químico”	35 dólares	35	35
2 ayudantes /pago jornal	18 dólares	36	36
Compra de precursores químicos (gasolina,	300 dólares	300	300
Inversión Total			1291
Precio de venta de coca kilogramo	1000 dólares		
GANANCIA TOTAL/SALDO EN CONTRA			-291

Fuente: Trabajo de Campo

Por otro lado, en cuanto a la parte operativa de la obtención de la pasta base, tenemos que, una vez recolectada la hoja, trabajo en que participan los raspachines, ésta es almacenada en un pozo de maceración, denominado comúnmente en la zona como “cocina”. En este lugar se almacena y tritura la hoja mezclándola con distintas sustancias como cemento, cal, ácido o gasolina, que facilitan la obtención de la pasta básica. Los campesinos también aclaran que la calidad de la hoja influye en el valor de la pasta que se obtiene, por lo que se debe cuidar el cultivo.

Cuando la hoja no es de buena calidad, lo que pasa es que el rendimiento no es bueno, se tiene que cosechar más hoja de coca para producir un kilo de coca, esto pasa cuando la hoja de coca se cosecha antes de tiempo por ejemplo (Pedro Ontaneda, joven cocalero, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 17 octubre de 2018).

Por otro lado, el rol de los jóvenes de la familia vuelve a ser fundamental en esta etapa, con su trabajo se ayuda a reducir los costos de mano de obra externa. Aunque para avanzar en este proceso el campesino debe contratar a una persona con experiencia, un “químico”, quien gana más que un raspachín debido al conocimiento práctico que posee, los jóvenes de la familia trabajan como sus ayudantes mientras se van familiarizando con el proceso, para luego trabajar sin tener que pagar por este servicio. Quienes trabajan en los laboratorios están expuestos a productos que pueden causar problemas de intoxicación o laceraciones en la piel. Todo el proceso de elaboración de la pasta base se realiza, generalmente, en la finca del campesino, quien adecua su propio laboratorio, el cual constituye un pequeño centro de acopio en el que se procesa la coca de manera artesanal hasta obtener la pasta básica. Visualmente el proceso sería el siguiente:



Fotografía 1. Recolección de hojas de coca. Fuente: Trabajo de campo



Fotografía 2. Centro de acopio. Fuente: Trabajo de campo



Fotografía 3. Almacenamiento de la hoja de coca. Fuente: Trabajo de campo



Fotografía 4. Procesamiento de la hoja de coca. Fuente: Trabajo de campo



Fotografía 5. Pasta base de coca. Fuente: Trabajo de campo

La comercialización de la pasta constituye la parte final del circuito en el que participa la familia agrícola. En esta etapa el agricultor debe vender su producto, nuevamente a un “intermediario”, el cual debe contar con el respaldo del grupo armado que tenga el poder en el momento. La pasta base necesita continuar con su proceso de transformación en un “laboratorio cristizador”, pero ya no es el campesino quien se encarga del proceso, pues para esto se necesita de un laboratorio más sofisticado. Este tipo de laboratorios se ubican generalmente en zonas apartadas de las comunidades. El precio de un kilo de coca, al momento de la realización del trabajo de campo se encontraba en 3'000.000 pesos, (unos 1.000 dólares).

El precio de la pasta básica, como señalamos más arriba, depende directamente del control de los grupos armados. El campesino negocia con el “intermediario”, quien, a su vez, se supone, ha pactado con los grupos armados el precio a pagar por la mercancía, de modo que no hay una relación directa entre las familias agrícolas y el o los grupos armados, sino que es a través del contacto con el “intermediario” que las familias aceptan la fijación del precio. Nos contaba Isabel Narváez al respecto que:

Para controlar el precio de la droga lo que hacen los grupos es condicionar la venta de la coca. Los campesinos deben sacar o vender la coca en el caserío en el que ellos tienen para este fin, a quien vende en la finca o en otro lado le cobran una multa alta y puede perder la vida o la finca (Isabel Narváez, mujer cocallera, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 3 de septiembre de 2018).

Como vemos en los testimonios, puede ocurrir que las familias agricultoras, inconformes con el precio ofertado busquen, a riesgo propio, un comprador en lugares más apartados. Esto puede significar un problema para las familias al atreverse a desafiar el orden establecido. En este escenario, también puede ocurrir que no se defina con claridad que grupo mantiene el poder y, por tanto, quien regula el mercado. Cuando ocurren disputas territoriales, por ejemplo, no existen compradores y los campesinos no tienen a quien vender su producto. Es necesario que existan pactos entre los grupos sobre el manejo de sus territorios para que el mercado funcione con cierta regularidad, caso contrario, pueden no existir flujo de dinero, una situación que perjudica fuertemente a las familias que han hecho de la coca una economía de enclave. Una referencia de cómo ha cambiado el mercado de la droga se refleja en el testimonio de una de las líderes sociales del corregimiento de Sánchez entrevistada:

El precio de la coca, cuando el negocio empezó recién, era muy bueno para el campesino, se podía ver la ganancia. Al inicio la guerrilla dejaba entrar a compradores del cartel de Cali, dicen, pero cuando llegaron los “Paras”, ellos fijaron el precio del kilo de coca y de eso no se le paga más al campesino, pero eso sí, los insumos químicos son más caros cada día, ahora los campesinos no hacen sino sobrevivir (Clara Mendoza, líder social, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 3 de septiembre de 2018).

Del mismo modo, al ser la coca una mercancía que se mueve en el mundo capitalista, su producción está regulada por la oferta y la demanda. La oferta puede verse afectada por la sobre producción, dada la expansión del cultivo, o por la persecución legal por parte del Estado provocando una disminución en la oferta. Como mencionaba Misse (2013), uno de los roles del Estado frente a la economía es la definición de lo legal o ilegal. Aunque el actuar del Estado es difuso en un territorio en el que otras fuerzas armadas mantienen el poder, no se puede desconocer que el accionar de las políticas antidrogas en el territorio tiene un efecto directo en el mercado.

Por otro lado, al ser los grupos armados quienes regulan el precio de la mercancía es también claro que gran parte de los recursos que deja esta economía permite financiar la guerra irregular, es aquí en donde las familias pagan el precio más alto para mantener estos cultivos por la inseguridad y violencia.

3. El glifosato pasó y se volvió a sembrar

Veíamos en el primer capítulo, que, a pesar de la aparente rentabilidad para las familias agricultoras, estas tienen que lidiar con las disposiciones legales que criminalizan el cultivo (Duque 2013; Pontes 2012). Esta realidad se vivió con fuerza en Policarpa, cuando el departamento pasó de tener 7.492 hectáreas de coca en 2001 a 15.606 en 2006 (UNODC 2012). En este mismo año, según la entidad, el gobierno fumigó 57.630 hectáreas de coca en Nariño, lo cual significa que las fumigaciones en cada hectárea de coca se repitieron por lo menos tres veces. Aunque las fumigaciones empezaron en otros municipios como Tumaco en 2004, fue a finales de 2005 y durante 2006 cuando los campesinos de Policarpa afrontaron la presión con más fuerza. Según las entrevistas realizadas, las familias agricultoras vivieron mucha pobreza debido a las aspersiones con glifosato que acabaron con la coca y también con las plantaciones de cacao y maíz. Frente a la situación la comunidad también se organizó para protestar.

De los problemas que teníamos con la fumigación eran de salud, el agua no era sana, teníamos problemas respiratorios más que nada, a eso se suma la escasez de alimentos, las plantaciones no producían, el plátano se moría y no había nada que hacer. En ese tiempo estábamos pobres y sin mirar la solución, cuando eso pasó volvimos a playar (sacar oro), pero eso tampoco era rentable (Pedro Acosta, presidente veredal, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 15 de septiembre de 2018).

Entre los datos que se recogieron de las entrevistas llama la atención que fuera la minería artesanal, también ilegal, la única fuente a través de la cual la gente logró tener ciertos ingresos. Por otra parte, desde 2005 y durante 2006, siguiendo los datos del Plan de Desarrollo 2012-2015, se presentó una mayor violencia. Esto concuerda con algunos de los relatos de los entrevistados, como el de Jairo Esterilla, quien recuerda este periodo de la siguiente manera:

En ese tiempo estábamos jodidos por todo lado, porque, aunque decían, que las AUC, ya no estaban acá, lo que hicieron fue cambiar de nombre. En la vereda teníamos miedo de salir. Por acá estaba la guerrilla, pero sabíamos que en el pueblo había varios grupos de “Paras” (paramilitares), la gente no se quiere meter en esos líos, pero imagínese Ud. si uno tiene que salir al pueblo, los del otro grupo lo ven a uno sospechoso, como infórmate, así uno no quiera colaborar con un grupo u otro, uno se jode (Jairo Esterilla, campesino coccalero, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 8 de septiembre de 2018).

Cuando se presentó esta ola de violencia las familias formaron “redes de solidaridad”. En este año la gente se organizó para protestar por la fuerza con que se fumigó en el territorio, para pedir que no se aplique más el “Plan Colombia” y los programas de erradicación. Sobre todo, está presente en el recuerdo del paro del 2006 en el que participaron activamente para pedir al gobierno el cese la erradicación forzosa y las fumigaciones.

La respuesta del Estado a los campesinos en esta fuerte protesta fue la represión. Siguiendo el relato de los entrevistados sobre este hecho, las protestas contra las fumigaciones con glifosato no fueron simples debido a la distancia entre las zonas productoras desde donde salían los campesinos y el lugar en el que se concentraba la marcha. Para llegar hasta este lugar, ubicado en la carretera Panamericana, los campesinos se vieron obligados a caminar 65 kilómetros por carreteras y caminos estrechos. En particular esta marcha tuvo el componente de las discordias entre los grupos armados de la región, que afectó directamente a las familias campesinas. Mientras grupos como las FARC, en ese tiempo replegados en el corregimiento de Sánchez, apoyaban la movilización campesina, otros como la Organización Nueva Generación, que se encontraban más adelante, no permitían el paso de los campesinos y los repelían, al igual que lo hizo posteriormente el ejército.⁴⁶

Antes de organizarnos teníamos que pedir permiso a los grupos armados, si ellos aceptaban podíamos continuar, de lo contrario no, porque al final son ellos los que mandan por acá. Con todo, la marcha fue grande porque también salieron los campesinos de otros municipios. Unas 7 mil personas nos juntamos en la Panamericana para pedir que se suspenda lo de las

⁴⁶ El diario El Tiempo, 16 de mayo (2006), “Las FARC estarían detrás de movilizaciones campesinas en Nariño, Putumayo y Meta”, recoge información sobre esta marcha, al igual que un informe del CODHES (2008), señala que al regreso de las manifestaciones fueron asesinados 11 campesinos por parte de la Organización Nueva Generación, como represalia por su participación.

fumigaciones. Algunos de los que fuimos no regresaron, los desaparecieron (Nelly García, líder comunitaria, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 10 de septiembre de 2018).

Uno de los grandes sectores afectados con las fumigaciones de glifosato fue el de los raspachines, trabajadores sin tierra que se vieron sin trabajo al no ser requerido en las plantaciones. Del mismo modo, se vieron afectadas las familias de estos trabajadores que, sin ser productoras de coca son dependientes directos de esta economía. El impacto del desempleo también repercutió en los negocios del poblado, pues son los raspachines quienes dinamizan la economía de la región.

No obstante, a pesar de los problemas derivados de las aspersiones aéreas los cultivos terminaron recuperándose. Para lograrlo las familias aplicaron distintos métodos como fumigar las plantaciones con melaza⁴⁷ y también sembraron nuevos cultivos. Contaba al respecto Luis Guevara de las Varas: “Después de que pasaba la avioneta, salíamos todos, hasta los niños a fumigar las matas con melaza. Algo se salvaba, pero la mayoría se perdía, pero no se podía hacer más en la desesperación” (Luis Guevara, líder social, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 15 de septiembre de 2018).

En parte debido a las protestas sociales y a varios estudios científicos que corroboran la toxicidad del glifosato, las fumigaciones fueron teniendo menor intensidad. Otras formas de control de los plantíos empezaron, no obstante, a implementarse por el gobierno a partir de 2006 como la erradicación manual forzosa.

3.1. La erradicación manual tampoco fue la solución

En Sánchez, se presentaron escuadrones de erradicadores resguardados por el Ejército desde el 2006 hasta el 2010. Los escuadrones fueron la respuesta del gobierno a la presión sobre la suspensión del glifosato. Este nuevo sistema de erradicación también provocó enfrentamientos entre las familias campesinas y los erradicadores, los cuales eran campesinos de otras regiones del país que, resguardados por el ejército, arrancaban las plantas de coca de raíz.

⁴⁷ Una mezcla de panela, que según los campesinos ayuda a contrarrestar los efectos del glifosato.

Cuando sabíamos que ya iban a llegar los escuadrones a pelar las matas, lo que hacíamos era cosechar antes, para no perder todo, pero igual se perdía. Cuando llegaban le rogábamos que no nos quitaran el sustento, pero no había que hacer, ellos arrancaban las matas. Yo tenía coca, cuando la fumigaron yo la recuperé, pero cuando la arrancaron, entonces yo renuncié porque me debilitaron totalmente, no sembré más matas y me dediqué a sembrar cacao, ahora tengo coca, pero pocas matas, el cacao no es muy rentable (Luis Guevara, líder social, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 15 de septiembre de 2018).

Frente a esta situación muchas familias salieron de sus comunidades y abandonaron sus tierras. Los entrevistados, señalan que durante estos años también fueron constantes los desplazamientos de las familias de las veredas hacia el pueblo por el enfrentamiento armado que había en las veredas. Juan Ontaneda, un campesino de Las Varas recuerda:

...es que en ese tiempo el gobierno pagaba a las personas para que den pistas sobre el actuar de las FARC, o de cualquier grupo, entonces uno no sabía quién podía ser informante. Para hablar de la violencia hay que ser prudentes, porque nunca se sabe (Juan Ontaneda, campesino cocalero, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 16 de septiembre de 2018).

El testimonio anterior muestra lo que se llamó la estrategia de “soldados de mi pueblo”, que a partir del 2009⁴⁸ reclutó a personas de la comunidad que brindaban información al ejército sobre el movimiento de los grupos irregulares.

Con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos en agosto del 2010, el departamento de Nariño vivió un periodo de tensa calma y, con el tiempo se volvió a dar una proliferación de los cultivos debido a la suspensión definitiva de las fumigaciones con glifosato en 2015⁴⁹ y con la espera de un posible acuerdo de paz con las FARC que prometía cambios en la política antidroga. El principal punto de interés de las familias campesinas con el nuevo gobierno fue la propuesta de una sustitución voluntaria, pero en Sánchez solo se produjo una proliferación de los cultivos.

⁴⁸ Bajo esta estrategia se vincularon en Nariño a 22.000 hombres buscando reforzar el trabajo de la Brigada XXII del Ejército.

⁴⁹ Como parte de la implementación de este Acuerdo se llevó a cabo en Madrigal, corregimiento del municipio de Policarpa, una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), en el que se concentraron unos 200 guerrilleros después del desarme.

3.2. Otro acuerdo de paz, un nuevo temor

El 24 de noviembre de 2016, el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con las FARC. Parte de este acuerdo contemplaba el fin de las plantaciones ilegales de coca en todo el país y, con ello, los campesinos productores volvieron nuevamente al centro de las políticas de erradicación y de planes de sustitución de cultivos. A Policarpa, además, la firma de este acuerdo le significó el convertirse en una de las zonas de acogida de uno de los frentes desmovilizados de las FARC.

La principal esperanza en torno a este acuerdo se centró en la disminución de la violencia, sin embargo, después de la entrega de las armas de las FARC, este territorio no pasó a ser controlado por el ejército o la policía, sino que fueron otros grupos armados disidentes los que empezaron a disputarse el territorio. Por otro lado, en torno al tema de la sustitución de cultivos debería haberse implementado el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) pero no sucedió.

La no sustitución se debe, entre otras cosas, al poco interés de la comunidad por vincularse a este tipo de proyectos, aduciendo que propuestas de gobiernos anteriores habían fallado, y que no solo se trata de un cambio en los cultivos, sino de un cambio estructural en el territorio que mejore las condiciones, por ejemplo, de las vías.

La verdad, la gente no quiere vincularse con los planes de sustitución, porque antes ya han fallado y porque faltan cosas básicas como vías de acceso. Vale más el transporte de los mismos productos legales y, ¿en esas condiciones que podemos producir?, en cambio la coca la compran acá y aún mejor precio (Nelly García, líder social, entrevista con la autora, El Cocal, 10 septiembre de 2018).

Aunque con dificultades, y a pesar de las reticencias la organización de la comunidad con respecto a este programa empezó a ser posible gracias a la COCCAM, que socializó entre los campesinos los beneficios de acogerse a la sustitución voluntaria. El programa de sustitución se enfoca principalmente en pequeños agricultores poseedores de menos de tres hectáreas de coca y buscaba también acuerdos colectivos y vinculaciones individuales. Como señalaba Clara Mendoza, presidenta del COCCAM del municipio:

Yo, como presidenta del COCCAM municipal me encargo de llevar y traer sugerencias para poder participar activamente de los planes de sustitución que adelantará el gobierno en esta región, buscando principalmente que se les permita a las comunidades manejar los fondos directamente a las comunidades, sin intermediarios. Lo que queremos es que el recurso llegue al campesino y que no se quede en los intermediarios, porque si no al campesino le llega muy poco (Clara Mendoza, líder social, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 3 de septiembre de 2018).

Aunque se avanzó en la realización de censos y se presentó la propuesta a los campesinos, siguieron existiendo barreras en la posible firma de un acuerdo de sustitución voluntaria, debido a la incertidumbre y la desconfianza que, en general, tenían sobre la implementación del acuerdo de paz. Nelly García nos contaba al respecto:

Sobre los programas de sustitución de cultivos ilícitos, funcionarían si los programas se implementan con todas las garantías que se ofrecen y no con los incumplimientos de siempre. En mi caso yo dejaría la coca si tuviésemos mejores vías y un producto agrícola que sea rentable y que nos permitiera vivir tranquilos. El gobierno no está cumpliendo, nosotros nos hemos reunido para decir que queremos, cuáles son nuestras necesidades, pero no hay interés, no tenemos el trazo de una vía, un análisis de suelo, eso no se ha dado. No nos sentimos respaldados con lo de la sustitución (Nelly García, líder social, entrevista con la autora, El Cocal, 10 septiembre de 2018).

Los líderes sociales que encabezaban la negociación sostienen, además, que las presiones y violencias por parte de los grupos armados para continuar con la actividad es tanta que tendrían que desistir al final de la sociabilización de los proyectos y de realizar cualquier actividad relacionada con la sustitución de cultivos. De modo que, en Sánchez, hasta el momento de la realización del trabajo de campo, la segunda fase del PNIS, que incluye el pago a las familias condicionado al levantamiento de los cultivos, no había sido posible.

Capítulo 4

Los jóvenes frente a los cultivos ilícitos y la violencia. Atrapados en la economía de la coca

Soy el raspachín de los cocaleros.
Voy de finca en finca toreando avisperos
De esos que se encuentran en los cocaleros
Raspando y raspando me gano el dinero
Hay que tener cuidado vivo entre los fuegos...

Corrido “El raspachín de los cocaleros”

Introducción

En este capítulo nos enfocamos en los jóvenes y en su situación dentro de la agricultura familiar cocalera. El capítulo inicia describiendo las condiciones específicas en que se lleva a cabo el ingreso laboral de los jóvenes en esta economía. Como veremos, las familias de Sánchez dependen aún del trabajo de todos sus miembros para sacar adelante los cultivos de coca y los cultivos de pancoger. Los jóvenes crecen ayudando en las tareas del campo, aportando de este modo al mantenimiento de sus hogares.

En una segunda parte del capítulo, se describe el modo en que la economía influye y determina las aspiraciones de futuro de los jóvenes, especialmente en cuanto a la continuidad educativa y laboral. Los relatos muestran que a pesar del excedente económico que la coca genera, este no es suficiente para sortear su condición de vulnerabilidad, pues están expuestos a la violencia asociada al cultivo y a círculos viciosos de endeudamiento y dependencia.

Del mismo modo, se evidencia que los jóvenes son críticos con la ausencia del Estado y asumen que trabajar en las plantaciones de coca es la única forma de procurarse un bienestar; veremos que esta realidad está asociada con la percepción que los jóvenes tienen de la actividad que realizan. Los jóvenes creen que existe una “estigmatización” social por ser cocalero, mantienen un consumo cultural particular y muestran que su futuro e independencia está ligado al cultivo. Siguiendo el pensamiento de los jóvenes en el escenario de una

potencial erradicación de cultivos ilícitos, se recogen en la parte final del capítulo, las expectativas y temores que les genera pensar en un posible campo sin coca.

1. Los jóvenes y su entrada en el mercado laboral de la coca

La mayoría de los jóvenes de Sánchez han nacido dentro de familias cocaleras y otros eran pequeños cuando la coca llegó al corregimiento hace 18 años. Como veíamos, gran parte de la economía del campo se centra en la agricultura familiar. El trabajar la tierra con la fuerza de trabajo procedente del mismo grupo doméstico es para muchos sectores campesinos el modo de ganarse el sustento (Breton 1993 y Weisheimer 2009). Los jóvenes de Sánchez nacen y crecen dentro de familias en donde la coca se constituye en el primer y principal vínculo con el trabajo agrícola, siendo común que las familias campesinas involucren desde temprana edad a los niños en las labores del campo. Una de las jóvenes entrevistadas, Milena López, de 16 años, sostenía “de la llegada de la coca no tengo recuerdos, desde que yo tengo conciencia la gente siempre ha trabajado en la coca y desde pequeños vamos todos al cocal” (Milena López, mujer raspachín, entrevista, vereda El Cocal, 5 de septiembre de 2018).

La adquisición de habilidades es un requisito fundamental para permanecer en este tipo de agricultura. Para los jóvenes es útil aprender a usar el machete, la pala y raspar o cosechar la coca, su ayuda inicia con actividades simples hasta que, finalmente, adquieren una mayor práctica y conocimiento. Durston (1998), sostiene que, en los hogares campesinos, la familia es responsable de la enseñanza de las habilidades del campo. Margarita Rosales, es una joven campesina de 22 años, con 4 hijos, ella nos comentaba sobre cómo se involucran sus hijos en el cultivo:

...los niños, ellos van tras de uno al campo y pasan agua, acarrear la semilla, traen la mula, cosas así pequeñas, según la edad que tengan, porque es un rato lo que ellos ayudan, después se los deja que estén por ahí (Margarita Rosales, campesina cocalera, entrevista con la autora, El Cocal, 11 de septiembre de 2018).

Los núcleos familiares de los 20 jóvenes entrevistados están compuestos por entre 3 y 8 integrantes, entre padres, hermanos, abuelos o tíos. El trabajo agrícola se reparte según las capacidades y edades de cada miembro. Debido a las características del cultivo del cultivo de coca, los miembros de la familia, en especial los jóvenes, pueden ocasionalmente trabajar en

otras parcelas mientras esperan la cosecha familiar. Por otro lado, la tierra es el principal patrimonio para las familias, inclusive si es rentada.

La tenencia de la tierra es un factor importante en el futuro de los jóvenes, que como vemos, no provienen de familias con terrenos extensos, sino que hay más bien una tendencia al minifundio; sus unidades productivas además se encuentran en un territorio con dificultades de acceso. Llambi (2012), sugiere que cuando el campo presenta estas características, se desarrolla una agricultura familiar que suele estar vinculada a unidades de pequeña escala, lo que generalmente supone dificultades de acceso tanto a los activos productivos como a los mercados más dinámicos.

Las posibilidades económicas para cada grupo son diferentes, mientras quienes tienen acceso a la tierra ya sea rentada o propia, tienen mayores facilidades, las familias sin este recurso se vinculan al cultivo de la coca solo con la venta de su fuerza de trabajo, de ahí que las rentabilidades sean inferiores. No obstante, en todos los casos, las familias apoyan en el trabajo infantil y de los jóvenes el incremento de sus ingresos. Este es un hecho que se debe considerar porque como señala Durston (1998), las transiciones a la edad adulta que realizan los jóvenes en el espacio rural están especialmente relacionadas con la forma, la organización de la familia y sus recursos.

En este sentido, el peso de las familias a incentivar a los jóvenes a la economía cocalera corresponde a la rentabilidad económica de los cultivos, en comparación con otros productos agrícolas que no cuentan con un mercado que tenga tanta demanda. También puede ocurrir que exista dentro de las familias una sobrevaloración de esta economía que los lleva a preferir, por ejemplo, que los jóvenes trabajen y no estudien o se involucren en otros sectores productivos. Como señala Jairo Esterrilla de Las Varas: “el estudio es bueno, pero los jóvenes también tienen que producir, procurar estudiar hasta donde se pueda y trabajar para poder comer y aquí el trabajo es la coca” (Jairo Esterilla, campesino cocalero, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 8 de septiembre de 2018).

Volviendo al tema de la tierra, en Sánchez, la explotación de este recurso con base en la agricultura familiar es fundamental debido a la escasez de mano de obra. Trabajar las parcelas con ayuda de los miembros de la familia es la mejor opción. Considerando esta situación se les preguntó a los jóvenes, cuál era su aporte a la economía agrícola de su familia. La mayoría

de las respuestas muestran que el trabajo realizado en el campo corresponde al aporte total que hacen a la economía del hogar. Sobre su vinculación al mundo del trabajo, las respuestas sugieren igualmente que no hay una “transición”, porque trabajan en la agricultura desde pequeños. Sin embargo, hay un inicio en la autonomía económica de los jóvenes a la edad de 11 a 12 años de edad, cuando los jóvenes cobran y administran su propio dinero.

En el campo cuando uno es niño ayuda en la parcela o va con el papá a otras fincas y se trabaja, pero es el papá de uno el que cobra, ya cuando uno es más grande y puede hacer las cosas por su cuenta, entonces si uno trabaja y tiene su plata (Carlos García, joven raspachín, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 17 de octubre de 2018).

Aunque los niños y jóvenes aportan a la agricultura familiar a través del trabajo, llama la atención que, debido quizás a la escasa mano de obra en la región, los jóvenes pueden cobrar por su trabajo dentro de la familia cuando hay cosecha de coca; trabajan como un raspachín más y pueden también ayudar económicamente en sus casas con el trabajo que realizan como raspachines en otras fincas. De este modo, con el cultivo de la coca se introduce un sentido capitalista de la producción que no se presentaba antes de la llegada del cultivo, cuando el trabajo se realizaba a “préstamo” y sin intermediación monetaria, lo cual ha implicado también un cambio en la forma de organización del trabajo familiar. Este factor de escasez de mano de obra puede incluso obligar a las familias a desarrollar contratos de aparcería para hacer producir las tierras.

Acá es posible que una misma familia pueda tener unas 4 a 5 hectáreas de tierra y hasta más, pero no todos los cultivos son de un solo dueño. Dentro de la misma familia puede haber otros dueños porque un solo dueño no alcanza a cultivar todo, entonces los campesinos dan la tierra a los “amedieros”, que pueden ser amigos o familiares para cultivar a medias. Así es más fácil sacar adelante el cultivo, porque al inicio hay que invertir e invertir y la ganancia no se ve (Nelly García, líder social, entrevista con la autora, El Cocal, 10 septiembre de 2018).

Es usual que el terreno de la familia tenga lotes con propietarios individuales, de modo que entre los miembros de la familia se reparten el terreno y el trabajo puede hacerse a “préstamo”. Este hecho evidencia que las familias no han perdido del todo su dinámica de “solidaridad comunitaria” en cuanto al trabajo, pero también muestra que la producción

agrícola se encuentra permeada por la economía de mercado. Margarita Rosales, comenta sobre la distribución de los predios en la familia:

En mi caso particular yo trabajo y cultivo la coca. Cuando se vende la coca se reparte también la plata, según la ayuda que se da. También se reparten los cultivos, por ejemplo, la familia mía tiene 5 hectáreas de coca, 2 hectáreas el trabajo yo, y 2 mis padres, en la otra hectárea hay pancoger, a veces la mano de obra se presta y se devuelve cuando alguien de la familia necesita (Margarita Rosales, campesina cocalera, entrevista con la autora, El Cocal, 11 de septiembre de 2018).

En este punto, es necesario aclarar que las familias cocaleras de las veredas reciben en época de cosecha a una gran cantidad de población flotante que se aloja en sus fincas. Las familias albergan entre 3 y 5 trabajadores, dependiendo de las hectáreas de coca a cosechar. La mayoría de esta población corresponde a jóvenes campesinos de otras regiones del país o de otras veredas que se quedan temporalmente, de modo que, los jóvenes de las familias cocaleras conviven esporádicamente con otros jóvenes raspachines y los campos cocaleros se convierten en espacio de socialización. Carla López, comparte su criterio sobre los jóvenes raspachines:

Acá hay varios jóvenes que son foráneos, no tienen familia y para ellos es más difícil, uno va al cocal y se devuelve para la casa, pero los que son de fuera ellos tienen que ir de finca en finca, cargando sus cosas, ellos a veces la pasan mal (Carla López, mujer raspachín, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 11 de septiembre de 2018).

Los jóvenes raspachines de las familias cocaleras tienen una ventaja en comparación a los jóvenes migrantes, pues no viven el desarraigo. Los jóvenes que vienen de otras regiones del país a trabajar están expuestos a una mayor vulnerabilidad y violencia. Por otro lado, también los jóvenes raspachines logran condicionar al mercado laboral aprovechando la escasez de mano de obra que existe en la región. Esto ocurre, por ejemplo, al negarse a trabajar en plantíos en los cuales las familias agricultoras siembran una variedad de coca difícil de cosechar, como ocurre con “la cuarentona”.

La variedad más buena para uno es la que llamamos la cuarentona, pero a los jóvenes no les gusta raspar esa coca, porque dicen que la hoja es dura y que cosechan menos arrobas, que no les conviene, y para no perder los trabajadores toca sembrar de otra, en mi caso yo tengo

de la guayaba y la bonita (Jairo Esterilla, campesino cocalero, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 8 de septiembre de 2018).

Cuando las familias siembran “la cuarentona”, se ven en la dificultad de encontrar jóvenes que quieran trabajar para ellos, de modo que ante la posibilidad de no contar con trabajadores debe inclinarse por otra variedad de coca.

1.2. La distribución del trabajo dentro de las familias. El componente de género

Casal, Masjoan y Planas (1988), señalan que la transición de los jóvenes al mundo del trabajo marca su inserción en el mundo adulto y determina su posibilidad de movilidad social. Los autores enfatizan que, para muchos jóvenes, la aspiración de una inserción laboral exitosa está condicionada por aspectos socio-culturales que se corresponden con las exigencias y oportunidades del mercado laboral. En Sánchez, estas circunstancias son diferentes, por un lado, la transición al mundo adulto que representa el trabajo se hace desde temprana edad; por otro lado, los jóvenes no tienen mayores posibilidades laborales fuera del circuito de la coca, y son las familias quienes influyen en un destino ligado a lo agrícola.

En cuanto a la distribución del trabajo en las fincas, este se realiza por igual tanto para hombres como para mujeres. Cuando los niños no están en la escuela tienen la responsabilidad de ayudar en las tareas del campo y del hogar. Como aseguraba Milena, quien que acompaña a sus padres en las tareas del campo:

Cuando voy a la finca yo ayudo al que maneja la bomba estacionaria, puede ser mi papá o mi hermano, yo estoy detrás ayudándole a que no se enrede la manguera, porque cuando se fumiga con una bomba estacionaria, por ejemplo, se necesitan tres personas. Cuando no voy a la finca me voy a raspar a otro lado (Milena López, joven raspachín, entrevista con la autora, vereda las Varas, 5 de septiembre de 2018).

A pesar de que el trabajo de hombres y mujeres en el campo es muy parecido, las tareas del hogar recaen en exclusividad en las mujeres. Al respecto, Sampedro (2000) sostiene que, el trabajo de las mujeres rurales, la doble tarea, suele ser invisibilizado, marcando una condición de desventaja de la mujer frente a los distintos escenarios de desarrollo rural. Como señala Margarita Rosales:

El trabajo en las fincas es por igual para hombres que para mujeres, por ejemplo, yo me levanto a las tres de la mañana, hago el desayuno, empacó el almuerzo para llevar y me voy a la finca con los otros a trabajar, el trabajo en la finca es por igual (Margarita Rosales, campesina cocalera, entrevista con la autora, vereda el Cocal, 11 de septiembre de 2018).

Cómo se nota en el relato, no hay un reconocimiento del propio trabajo asociado a las tareas del hogar y se atribuye a la actividad agrícola el aporte a la familia, aunque se trabaja por igual en el campo. Por otro lado, y relacionado con el rol de las mujeres jóvenes de la comunidad en la producción de la coca y las actividades domésticas en las fincas, llama la atención que la mano de obra para trabajar en cocina sea aún más escasa que la que existe para raspachines. Esto se debe a que las mujeres prefieren trabajar más como raspachines que en la cocina. Los finqueros no siempre pueden contratar a mujeres para esta labor, por ello, cuando es época de cosecha, las mujeres que hacen parte de la familia deben asumir la responsabilidad de preparar alimentos para los trabajadores. Para las mujeres jóvenes el trabajo en cocina no resulta atractivo, se dedican a esta labor mujeres con niños demasiado pequeños como para llevarlos al campo y mujeres mayores. El trabajo en cocina supone unos 30.000 pesos diarios (10\$). Es por esto que para algunas mujeres es mucho más rentable trabajar raspando coca. En el trabajo como raspachines se paga 8 mil pesos por arroba de coca recolectada y, algunas mujeres con experiencia pueden cosechar más que los hombres. Según los datos de las entrevistas los raspachines pueden cosechar entre 5 y 20 arrobas diarias, dependiendo de la experiencia de cada trabajador.

En general, acceder a espacios laborales distintos al de la agricultura es difícil debido a la falta de experiencia de los jóvenes en otras áreas y a la ausencia de empresas, bajo estas condiciones no resulta posible acceder a empleos formales. En general las particularidades de este territorio rural, es un condicionante en las aspiraciones de los jóvenes de Sánchez.

1.2. Del cocal familiar al trabajo independiente

Mientras la familia espera que llegue la época de cosecha, que se produce cada tres meses, el cuidado del cultivo no demanda mayor atención y los integrantes de la familia pueden vender su mano de obra en otras parcelas. Los niños pequeños acompañan a los padres a trabajar sin remuneración, pero esta realidad cambia a edades muy tempranas. En las entrevistas se les preguntó a los jóvenes: *¿desde qué edad pueden trabajar de manera individual en otras fincas cocaleras y administrar su propio dinero?* Las respuestas coinciden en que a la edad de

11 y 12, tanto hombres como mujeres ya tienen la capacidad de cobrar y administrar su dinero, y por lo tanto devenir independientes. La edad que considera la OIT y la ONU para el inicio del trabajo juvenil es de 15 años, antes de esta edad se trataría de trabajo infantil, pero como vemos, la realidad del trabajo se da en Sánchez mucho antes y los jóvenes son económicamente independientes también a edades muy tempranas.

Esta independencia económica, sin embargo, no necesariamente significa un alejamiento de su casa, pueden mantener una independencia monetaria y continuar viviendo en el hogar de los padres. Como señala Kessler (2006), los hogares rurales pueden mostrar una mayor interdependencia entre los miembros del hogar, existiendo, además, una participación de toda la familia en la decisión y estrategias de vida que desarrollan los jóvenes. Como nos decía Felipe Arteaga, un joven de 17 años, el trabajar de manera independiente a la parcela del hogar le permite financiar sus gustos:

Yo me dedico a la raspa de la coca. Dependiendo de donde sea el trabajo se va en la mañana si es cerca o si es lejos se queda uno en la finca del dueño. El trabajo es duro, el sol puede ser muy fuerte, a veces llueve. También uno se daña las manos raspando coca, pero uno se acostumbra porque si da plata. _ ¿En qué inviertes tu dinero? _ en ayudar en la casa, o si me gusta algo en comprarme ropa, zapatos, lo que sea (Felipe Arteaga, joven raspachín, entrevista con la autora, vereda el Cocal, 13 de septiembre de 2018).

Como reconoce Dombois (1998), la globalización de las economías ilegales como la coca implica la cristalización de territorios destinados exclusivamente a la siembra y al mantenimiento de la oferta que tienen además su propia mano de obra cautiva.⁵⁰ De modo que, aunque el dinero proveniente de su trabajo les permita salir del hogar y vivir de manera independiente, los jóvenes continúan ligados al mercado laboral de la coca con pocas posibilidades de enrolarse en trabajos formales a no ser a través de emprendimientos que pueden, ser inicialmente, financiados por el dinero de la coca. Daniela Ontaneda de 22 años nos contaba sobre sus aspiraciones:

⁵⁰ El trabajo como raspachin, al que acceden principalmente los jóvenes, depende de las habilidades para cosechar. El patrón o dueño de la finca paga por cada arroba cosechada con un valor de 8 mil pesos (unos 2.5 dólares); considerando que los jóvenes cosechan entre 5 y 20 arrobas diarias, se evidencia que el salario que se paga a un joven raspachin, es substancialmente más alto de lo que obtiene un jornalero promedio en el país, que recibe un pago de hasta 20 mil pesos (unos 7 dólares).

En mi caso yo trabajo en cocina en las fincas porque tengo un niño pequeño, antes también trabajaba en el cocal. Encontrar otro trabajo por acá es difícil, a mí, por ejemplo, me gustaría poner un local de comida, un tiempo trabajamos con mi mamá en eso y era bueno (Daniela Ontaneda, campesina cocalera, entrevista con la autora, Sánchez, 6 de octubre de 2018).

Por otra parte, los jóvenes dedicados a esta actividad acaban inmersos en lo que Duncan (2013) describe como una mayor criminalización por parte del Estado, lo que puede significar una constante incertidumbre sobre su futuro y un costo social elevado por estar inmersos en una actividad ilegal. Además, como sostiene Kay (2009), estos espacios favorecen a que no existan reivindicaciones de derechos laborales y condiciones dignas de trabajo, facilitando que quienes los contratan pasen por alto sus obligaciones.

¿Estás expuesto a algún riesgo mientras trabajas? - cuando se raspa la coca, se dañan las manos, salen callos, uno se puede cortar con las ramas, pero más riesgo hay cuando se fumiga porque se huele los venenos y uno se puede intoxicar, o duele la cabeza y dan mareos” (Juan Ontaneda, campesino cocalero, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 16 de septiembre de 2018).

En las fincas se escoge al personal, los patrones ya conocen la capacidad de trabajar de los jóvenes y los llevan a otras fincas, hay jóvenes que son conocedores del oficio y ellos son más solicitados. “Gracias a dios, a mí me va bien como raspachín, como los patrones ya me conocen, nunca me falta trabajo” (Daniel Pineda, joven raspachín, entrevista, vereda El Cocal, 16 de septiembre de 2018). Aunque la mayoría de los jóvenes se dedican a raspar la coca, también hay quienes se dedican a la elaboración de pasta base, incluyendo mujeres. Estos jóvenes son conocidos en la región como “químicos” y su trabajo tiene lugar en los laboratorios improvisados que construyen los campesinos. La persona encargada de la transformación de la hoja de coca en pasta base gana más dinero, recibe una remuneración de 100 mil pesos diarios, unos 30 dólares, además su actividad le permite también un cierto estatus y reconocimiento de sus habilidades. No obstante, también hay que asumir otros riesgos como el de estar expuesto a componentes tóxicos sin mayores cuidados. Jaime Maldonado, un joven de 21 años, que ayuda a la elaboración de la pasta base a varios campesinos comentaba:

Yo soy de Florencia, pero ya trabajo aquí unos 8 años, vine con un conocido a trabajar en el laboratorio. En Florencia también hay coca y yo aprendí la elaboración de la pasta base con

un tío, poco a poco uno va ganando la experiencia. Los riesgos del trabajo son que uno se puede intoxicar porque toca estar inhalando varios químicos, si no se cuida le pueden dar a uno mareos y vértigos, esas cosas, pero para mí este trabajo es más fácil que raspar la coca (Jaime Maldonado, joven raspachín, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez 13 de septiembre de 2018).

1. La independencia se logra con coca

Después de revisar las entrevistas, es claro que para los jóvenes el ser dueños de cultivos de coca es el modelo deseable de ascenso social, es lo que ellos esperan para su futuro. Como veremos más adelante, la economía de la coca regula en gran medida los temas de la escolarización, el deseo de profesionalización y la vida futura e independiente de los padres, debido a una independencia monetaria temprana que como veíamos inicia a los 11 o 12 años. A esta edad, debido a su capacidad adquisitiva, los jóvenes empiezan a asumir responsabilidades, por ello también es frecuente que los jóvenes vivan con una pareja a tempranas edades y asuman responsabilidades de personas adultas. Seguir trabajando en la coca es lo que esperan para su futuro. Nos decía Felipe Arteaga al respecto:

Trabajar de “amediero” no es fácil porque uno pone el trabajo y también tiene que poner dinero y al inicio los cultivos no dan ganancia, entonces todo es inversión y uno tiene que arriesgarse. Yo trabajo a medias con mi tío, dejé el colegio, pero voy a hacer el acelerado (Felipe Arteaga, joven cocalero, entrevista con la autora, vereda el Cocal, 13 de septiembre de 2018).

Como vemos, para estos jóvenes el ser dueños del cocal no necesariamente significa ser dueños de la tierra, de ahí que trabajar como “amedieros” sea una opción de independencia laboral y económica. Esta opción, no obstante, es más complicada para una gran mayoría de jóvenes raspachines provenientes de otras regiones del país, pues entre los “amedieros” hay generalmente un lazo de amistad o consanguíneo. Sobre los jóvenes de otras regiones del país, se debe acotar, en muchos casos, son el sostén económico de sus familias, por lo que su presencia en este territorio es también un indicador de la dependencia de familias no productoras en esta economía ilícita. En general, en cualquiera de los ámbitos que se desenvuelven en sus vidas, la coca está presente. La mayoría aspira a continuar dentro de este circuito económico teniendo sus propias tierras. Sin embargo, hay consecuencias sociales como el abandono de la educación, la sobre valoración de la capacidad adquisitiva del dinero

rápido, la influencia de la “narcocultura”, y la vulnerabilidad a la violencia armada, que como veremos más adelante, afectan la transición de los jóvenes a la vida adulta.

2.1. Los jóvenes y la educación en el espacio rural

Al analizar la importancia de la educación para los jóvenes, generalmente se piensa que la formación académica permite mejorar la situación de las personas, y dentro de la sociedad se instaaura un modelo social prometedor: educación + empleo = movilidad social ascendente. En esta ecuación la movilidad social es posible, gracias a un mayor nivel educativo. Los jóvenes vinculan a la educación un imaginario social de bienestar. Sin embargo, en muchos lugares, incluyendo a Sánchez, la movilidad social está poco o nada vinculada con esta ecuación, pues los jóvenes no tienen muchas posibilidades educativas. De hecho, aunque se sientan atraídos por tener una formación, los niños, niñas y jóvenes no cuentan con centros de estudios adecuados para formarse, además, el escenario de violencia en el territorio y la atractiva oferta laboral de la coca son factores que juegan en su contra.

En el caso de la vereda, el Cocal, por ejemplo, existe una escuela primaria liderada por una docente. La escuela está dentro del programa de gobierno ‘Escuela Nueva’, común en las zonas rurales, en la cual se educa con un solo maestro a todos los estudiantes de primero hasta quinto grado. Debido al abandono del Estado, en ocasiones es financiada por los padres de familia que aportan económicamente para que el maestro imparta clases a los niños. En el caso de la vereda las Varas, existía una escuela, pero como ocurre en varios lugares del campo quedó abandonada hace un año.

La cantidad de niños que van a la escuela “El Cocal” es baja, solo 10 niños. Aunque existen más niños en la vereda, suele ocurrir que si los padres tienen la posibilidad mandan a sus hijos a estudiar en los municipios cercanos, o simplemente los prefieren tener trabajando, ayudando en la cosecha, antes que estudiando. La infraestructura de la escuela “El Cocal”, aunque es de concreto, tiene un techo de zinc en mal estado, no tiene buenas letrinas y le faltan espacios recreativos. Gran parte de esta infraestructura fue construida por la misma comunidad con recursos de la coca. Según los líderes comunales, la falta de atención del Ministerio de Educación se justifica por el difícil acceso a la zona y por la baja densidad poblacional.



Fotografía 6. Centro educativo El Cocal. Fuente: Trabajo de Campo



Fotografía 7. Centro educativo El Cocal. Fuente: Trabajo de Campo

En una de las paredes de los baños de la escuela puede leerse: “la educación es la base del progreso”; sin embargo, no pasa de ser un anhelo para la comunidad. Entre las dificultades que deben sortear se encuentra la ausencia de docentes. Esto provoca que las clases suelen iniciar tarde, cuando ya ha transcurrido la mitad del año escolar. Los profesores reciben salarios muy bajos, unos 1’100.000 pesos, (aproximadamente 400 dólares), por lo que no les resulta atractivo trabajar como educadores. También hay fallas en la alimentación de los niños, generalmente el gobierno apoya con el acceso a comida, sin embargo, la prestación de este servicio no es regular, y los niños asisten a una jornada desde las 7,30 a 2 pm sin alimentación. Nos contaban Felipe Arteaga y Pedro Acosta al respecto:

El año que ya estudié fue hasta quinto, pero el profesor llegó a mitad de año, estudiar no es tan bueno, porque uno gana más que un profesor, aquí los profesores no tienen buen salario,

por eso no les gusta venir” (Felipe Arteaga, joven raspachín, entrevista con la autora, Vereda El Cocal, 13 de septiembre de 2018).

Aquí los que invertimos en los niños somos los mismos padres de la comunidad, cuando se puede cancelar al maestro del propio bolsillo para que los muchachos estudien. Y aun así los estudiantes dejan la escuela cuando hay cosecha, después regresan, por eso la educación no es buena (Pedro Acosta, presidente veredal, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 15 de septiembre de 2018).

El conflicto armado es otro factor que dificulta la educación de los jóvenes y niños de Sánchez. Aunque el ingreso voluntario a las filas de los grupos armados ilegales y el reclutamiento forzado de menores es algo que no se da con frecuencia, de acuerdo con los líderes comunales si existe temor por la seguridad de los niños mientras se trasladan a la escuela, pues suelen presentarse enfrentamientos entre los grupos. En los últimos años en este territorio ha sido disputado por los “los Helenos” y el grupo paramilitar de los “Rastrojos”.

Pues cuando hay enfrentamientos los niños no van a la escuela, cuando se sabe que la cosa está peligrosa es mejor dejar a los niños en la casa, porque los niños caminan por lo menos unos 30 minutos entre los plantíos hasta llegar a la escuela, cuando se escucha las balas, los niños no van a la escuela (Nelly García, líder social, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 10 de septiembre de 2018).

El conflicto afecta a la comunidad en general, pero los jóvenes y los niños son más vulnerables a la violencia. En este escenario surge la pregunta, ¿qué pasa con los niños cuando terminan la primaria?, la respuesta es que pocos padres hacen el esfuerzo de apoyar a los hijos para que estudien en un corregimiento en el que exista bachillerato. La mayoría de los niños ingresa al mercado laboral de la coca, con una forma rápida de transición de los niños al trabajo. El producir dinero rápido, más aún cuando son adolescentes, hace que la escuela no tenga la valoración suficiente para ellos. Precisamente eso nos contaba Carlos García, un joven raspachín de tan solo 15 años:

Cuando yo me fui a raspar por primera vez tenía nueve años, me fui con mi hermano a otra finca y cogí una arroba de coca, después cuatro y así fue aumentando, ahora cosecho 15 o 17. Cuando empecé yo dije voy a trabajar para el estudio, pero miré que uno ganaba más raspando que estudiando y dije voy a raspar mejor. Antes me gastaba toda la plata, pero

ahora voy a ahorrar pa comprarme una moto (Carlos García, joven raspachín, entrevista con la autora, vereda el Cocal, 17 de octubre, de 2018).

Los jóvenes valoran mucho más el trabajo que el estudio. La situación de los jóvenes de Sánchez se corresponde con la descripción que realiza Bruniard (2003), sobre algunos territorios rurales en los que los estudiantes no tienen adecuados centros educativos, por lo cual es más importante para ellos desarrollar habilidades distintas a las académicas.

Los jóvenes que desean continuar formándose deben caminar durante 20 minutos y viajar 15 minutos más en lancha hasta Sánchez o trasladarse por una carretera de tercer orden por una hora. En el centro poblado los jóvenes encuentran hasta noveno de bachillerato y, en muchos casos, su formación educativa se trunca a este nivel. La realidad que se presenta en el colegio del corregimiento de Sánchez es además compleja. Mauricio Oña, educador de esta institución nos comentaba que, si bien los jóvenes del colegio en Sánchez llegan a 180, tienen características muy especiales creadas por la necesidad de cultivar la coca.

En nuestra institución tenemos muchos problemas con la educación, como ocurre con la educación que se da en el campo, pero nosotros tenemos que adaptarnos al problema de la coca y a la violencia. La institución registra problemas de extraedad; hay jóvenes que se educan prácticamente con niños, porque antes no estudiaron. Tenemos problemas de abandono escolar y el caso de estudiantes que llegan a mitad de año y otros que se van también a la mitad. Los jóvenes en este territorio siempre se están movilizándolo, según sean las temporadas de cosecha de coca. Estudian 6 meses en el colegio y luego se van a otra institución o simplemente no estudian, y en algunos casos se sienten atraídos por los grupos armados, eso es muy triste (Mauricio Oña, docente, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 14 de septiembre de 2018).

Cuando los estudiantes van a trabajar vienen cansados, las tareas las hacen de prisa o no las hacen, los profesores tenemos que lidiar con eso, porque hay que entender la situación y hasta cierto punto aceptarlo, porque si el alumno se retira es peor” (Mauricio Oña, docente, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 14 de septiembre de 2018).

Los jóvenes adaptan su estudio a la cosecha de la coca, acompañando a la familia a trabajar o empleándose por su cuenta. Esto trae un círculo vicioso en el que la deserción y el atraso escolar son constantes, y hace que el estudio no sea precisamente un elemento que garantice

su movilidad social. En ocasiones, dependiendo de las posibilidades económicas de las familias, los jóvenes pueden acudir a un internado ubicado en Sidón, un municipio cercano, en el cual pueden encontrar el bachillerato completo. Frente a esta situación algunos jóvenes prefieren no estudiar o acceder a educación a distancia para poder también trabajar, son conscientes de las dificultades económicas que estudiar puede acarrear.

En mi caso, solo voy al cocal los fines de semana o cuando tengo tiempo, yo estudio en el colegio y no tengo mucho tiempo, voy para poder comprar mis cosas, pero mis papás me apoyan (Mónica Esterilla, joven cocalera, entrevista con la autora, vereda Las Varas, 11 de septiembre de 2018).

Para ir al colegio se necesita tiempo, pero yo trabajo en época de cosecha no hay tiempo para ir al colegio, yo estudio a distancia en Sánchez, voy los fines de semana, dejar el trabajo del todo no se puede porque uno también tiene sus gustos y si uno sabe trabajar, tiene que trabajar (Carla López, joven raspachín, entrevista con la autora, vereda las Varas, 11 de septiembre de 2018).

Los padres pueden ayudar a sus hijos para que estos realicen una jornada laboral de medio tiempo y restrinjan su ayuda a la familia a la época de cosecha, y puedan de este modo, desarrollar con cierta normalidad su estudio.

Que los hijos no estudien depende de la familia, en mi caso mis hijos si estudian y el que estudia casi no trabaja, se dedica a estudiar, pero tiene que tener apoyo de los padres, mis hijos me ayudan en el cocal los sábados y los domingos y algunas tardes cuando tienen tiempo” (Margarita Rosales, campesina cocalera, entrevista con la autora, vereda el Cocal, 11 de septiembre de 2018).

En cuanto a la posibilidad de estudios académicos superiores, se realizan únicamente cuando las posibilidades económicas de la familia lo permiten, generalmente los jóvenes viajan hasta Pasto para formarse. Quienes lo hacen consideran que es necesario salir del campo para estudiar, pero no descartan la posibilidad de volver a la vereda y trabajar.

No tenemos oportunidades para estudiar, a veces los padres de uno no están bien para seguir ayudando, para estudiar la universidad. La opción mía, por ejemplo, fue prestar el servicio militar, pero me tocó regresar otra vez acá. Me da duro la ciudad porque allá uno tampoco

tiene muchas oportunidades. La ciudad es atractiva por el estudio, sí me gustaría seguir estudiando, por ejemplo, en Sánchez hay hasta el grado noveno, pero a mí me gustaría que haya un bachillerato completo, para que a la comunidad no le quede tan duro ir a la ciudad (Eneider Gutiérrez, joven cocalero, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 5 de septiembre de 2018).

Los jóvenes se vinculan a la coca porque no hay posibilidades de estudio para los jóvenes, no hay cursos de capacitación, ni siquiera para ser bachilleres, es difícil acá hacer un bachiller si no tiene plata, a muchos les gustaría estudiar la universidad, pero como si es difícil hacer hasta el bachiller, si tuvieran posibilidades se quedarían aquí haciendo el bachiller y a la ciudad irían a continuar estudiando, pero no se puede. Los jóvenes pueden querer ir, pero ellos siempre necesitan del apoyo de la familia para poder estudiar, para no caer en problemas como las drogas (Mónica Castillo, campesina cocalera, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 4 de octubre, de 2018).

En general, los entrevistados piensan que el dinero proveniente de la coca genera un recurso que permite que los jóvenes se preparen, vayan al colegio y si quieren a la universidad. Se piensa que la economía de la coca es una salida a la marginalidad, pero advierten que se debe saber invertir ese recurso, pues la mayoría de los casos se transforma en un discurso que no tiene vigencia en la práctica.

1. Ascenso social, violencia y narcocultura

Los jóvenes raspachines viven en un ambiente marcado por la violencia y con un acceso a seguridad y justicia casi nulas. Inmersos como están en la economía ilícita, son vulnerables a la violencia desatada por parte de los grupos armados. Y es que, una vez iniciada la siembra de coca en Policarpa se inicia, también, el despliegue de los grupos al margen de la ley. Estos grupos están inmersos en el conflicto interno del país y aunque no se puede desconocer sus diferencias ideológicas, al estar asociados al narcotráfico, marcan la vida de las comunidades rurales en las que se instauran de una forma muy parecida. Se trata en este caso, como sugieren Duffield (2004) y Kaldor (2005) de un escenario de una “nueva guerra”, con actores estatales y paraestatales en una región en la que el narcotráfico se sitúa como principal “mercado de violencia”, y se acomoda a las exigencias de economía mundial.

Con una amplia amalgama de grupos armados, a los que se suma el ejército, la población en estas zonas vive dentro de una *cultura del miedo*, que afecta particularmente a la gente joven,

debido a los constantes ajustes de cuentas entre los grupos que se disputan el control de la economía. Existe inseguridad, pues puede ocurrir que los jóvenes sean considerados integrantes o informantes de uno de los grupos armados y que sean ajusticiados simplemente por la presunción de serlo. En este sentido son constantes los secuestros, la extorsión y las masacres, pero la denuncia de los hechos no es una costumbre entre la comunidad, Clara Mendoza relata:

...muertos por la violencia siempre ha habido. En el río, sobre todo, pero en eso la gente sabe que no tiene que meterse, cada quien en lo suyo. Acá no se denuncian las muertes, las más pasan desapercibidas, solo a veces viene la fiscalía, pero casi no. La violencia más brava se vivió por ahí por el 2008, en adelante por la pelea del territorio de las FARC con la Nueva Generación, hubo desplazamientos y las familias salían del campo hasta Sánchez, ese tiempo era muy peligroso (Clara Mendoza, campesina cocalera, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 3 de septiembre de 2018).

Los jóvenes y la comunidad se enfrentan a la ausencia de justicia y de seguridad, no hay una presencia institucional (policía, fiscalía, etc.) y los jóvenes hablan poco, quizá por miedo, de los grupos armados, las respuestas son más bien generales, poco precisas, incluso da la impresión que por ser tan comunes los hechos de violencia acaban naturalizarse entre la población y más aún en los jóvenes que no han conocido otra situación que la del conflicto.

Cuando se prenden a bala, toca salir corriendo de acá, se prende la bala y toca esperar a que pase, no sea que lo confundan a uno, Algunos amigos los han matado, por problemas con los grupos, unos si están en el cementerio, otros desaparecidos, no se sabe (Carlos García, joven raspachín, entrevista con la autora, vereda el Cocal, 17 de octubre de 2018).

Elwert (2002) señala que, en escenarios de conflicto, convertirse en parte del ejército de los “señores de la guerra” es una opción para los jóvenes. Estos grupos según el autor explotan el prestigio social, el respeto o la inspiración de miedo que puede tener para los jóvenes ingresar en sus filias. Al respecto, las respuestas son contradictorias. La mayoría de los entrevistados coinciden en afirmar que los grupos armados no son atractivos para la gente joven de la comunidad, y que es poco frecuente que los jóvenes intenten formar parte de los grupos

La simpatía por uno de los grupos armados puede significarles inmiscuirse en el conflicto y en la lucha territorial de los actores armados por manejar el narcotráfico. Y, aunque, la

comunidad en general trata de no inmiscuirse en los conflictos entre los grupos, las tensiones los alcanza, provocando muertes, desplazamiento forzado y temor. El conflicto armado es el contexto que envuelve a la economía de la coca y los jóvenes sufren la violencia generada por los grupos, pero también son vulnerables al impacto del narcotráfico que extiende sus redes al campo cultural. Entre los jóvenes circulan ideas y creencias sobre el narcotráfico que se legitima con fuerza haciendo de esta economía un modelo de ascenso social que va configurando el modo en que los jóvenes piensan su futuro. La pobreza es el principal motivo por el que la participación de los jóvenes en la cadena del narcotráfico se justifica y ser cultivadores de coca es el modelo deseable de ascenso social. Como señala Duncan (2013), el narcotráfico acaba siendo un referente social para los jóvenes independientemente de la vinculación que tengan con éste.

En Sánchez, gracias al cultivo de la coca los jóvenes tienen acceso a dinero rápido, y sin una mayor inversión logran una alta rentabilidad, la violencia se vuelve cotidiana y legitiman un modo de vida acorde a intereses y placeres que no son posibles bajo un trabajo rural lícito. La idea de ser exitoso en el mundo de la coca repercute en sus ideas sobre el futuro.

Precisamente, Vásquez (2010) señala que los jóvenes están atravesados por la idea del “éxito” que se identifica con el vivir bien, sentirse bien, gozar bien; implica por lo tanto actitudes egocéntricas, en las que los individuos reducen sus motivaciones a sus propios intereses, ligados a la vivencia de instantes placenteros. Sara Fuentes, una joven raspachín de 18 años nos comenta:

Muchos jóvenes se dedican el fin de semana al consumo de alcohol. En el pueblo hay cantinas y prostíbulos, los jóvenes gastan. Los jóvenes tienen dinero fácil y también lo gastan fácilmente, solo viven por el momento y no más (Sara Fuentes, joven raspachín, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 8 de septiembre de 2018).

Los jóvenes encuentran en varios lugares del poblado lugares de diversión en los que gastan su dinero. En Sánchez existe abundante comercio, lugares de ocio que se dinamizan gracias al dinero de los raspachines, sobre todo en los fines de semana. Hasta el punto llamado “Paso Real”, a orillas del río Patía, llegan lanchas con campesinos, los bares y a casas de prostitución están siempre llenos. Como los jóvenes tienen dinero pueden frecuentar bares y billares instalados en el pueblo. A pesar de que el corregimiento de Sánchez es pequeño, en una extensión de no más de 5 cuadras existen 8 prostíbulos. El dinero les da además a los

jóvenes las posibilidades de ingresar a lugares vedados para menores de edad, pero los hombres pueden acceder con tranquilidad a estos espacios.

La mayoría de jóvenes no gasta el dinero en cosas útiles, ni menos ahorra, todo el dinero se lo gastan el fin de semana en el pueblo en alcohol. Las cantinas del pueblo se llevan todo el dinero, los jóvenes vuelven a trabajar cada semana sin plata, gastados. Un raspachín puede ganar unos 300 mil, a la semana; pero después de la parranda vuelven sin nada (Eneider Gutiérrez, joven cocalero, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 5 de septiembre de 2018).

Volviendo al tema de la vinculación de los jóvenes dentro del ámbito del narcotráfico, ser raspachín, ser cocalero o participar de alguna manera dentro del circuito de las drogas es bien visto y aceptado por los jóvenes de Sánchez, pero también reconocen que ser joven cocalero produce una estigmatización muy fuerte cuando no se están dentro del territorio.

Estando en el pueblo a nadie le parece malo ser cocalero, porque todos nos dedicamos a eso, a la raspa, pero los foráneos si pueden verlo mal a uno, porque piensan que uno es negro y de esta región y que puede ser guerrillero, estar en algún grupo o ser narcotraficante, porque uno es de la región es que piensan que es así (Eneider Gutiérrez, joven cocalero, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 5 de septiembre de 2018).

Para recabar información sobre la posible estigmatización que puede significar para los jóvenes estar inmersos en el mercado de la coca se les preguntó, *¿cree Ud. que hay alguna asociación entre joven cocalero y violencia o entre cocalero y narcotráfico?*, las respuestas evidencian que los jóvenes sí consideran que existe una relación entre ser un joven cocalero y violencia; señalan que el contexto en el que viven es en general de violencia y que eso se debe a la coca. Piensan, sin embargo, que ser cocalero no significa ser narcotraficante, según su percepción el negocio del narcotráfico se da con la comercialización de la droga en grandes mercados, aunque no les disgusta la idea de ascender en ese eslabón de la cadena, reconocen que ellos están en los márgenes de esta actividad. Julián Perea es un joven de 20 años que cuestiona la relación que establecen los jóvenes y la comunidad campesina con la coca:

Lo bueno que se puede hacer se hace con la plata de la coca, yo estudio una carrera técnica porque mis papás tienen el recurso y me apoyan, lo que yo creo es que la gente tiene que aprovechar la oportunidad económica que da la coca e invertir en educación y en otras cosas,

pero la gente piensa que esto nunca se va a acabar y que siempre van a tener cultivos (Julián Perea, joven raspachín, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 16 de septiembre de 2018).

Dentro del territorio los jóvenes coccaleros pueden ser vistos como personas productivas y aún más se crea una idea de aceptación de ser coccalero como un ideal. Circula, por ejemplo, entre los jóvenes, música que refuerza su pertenencia al mundo del narcotráfico y la idea de tener dinero rápido. Acertadamente, Duncan (2013) señala que la presencia del narcotráfico en zonas marginales crea un sistema de normas, valores y comportamientos propios con el cual los jóvenes de estas comunidades se identifican.

3.1. El campo no es atractivo sin coca

Como vimos anteriormente el punto 4 del acuerdo de paz de 2016: “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, busca terminar con los cultivos a través de un plan integral de sustitución, denominado PNIS. En Sánchez la puesta en marcha de este punto del acuerdo se ha topado con varias trabas: poca socialización de los beneficios del acuerdo entre los campesinos, presión de los grupos armados para evitar que los campesinos dejen los cultivos, desacuerdo en el manejo de los recursos, y un incremento de la violencia en las regiones en las que debía ponerse en marcha el programa de sustitución. Frente a esta situación los jóvenes, y la comunidad en general, no tienen expectativas positivas sobre el Acuerdo.

Con respecto a la disminución de la violencia en los territorios rurales y la “paz estable y duradera” que se propone dentro del Acuerdo, existe entre los jóvenes entrevistados una visión pesimista de esta promesa, pues consideran que la violencia no ha disminuido y que incluso ha habido una eclosión nuevos grupos con interés en controlar los cultivos de coca.

Luis Guevara relata:

Antes del acuerdo, por acá había un grupo llamado “los Rastrojos” hasta el 2012 más o menos, después aparecieron otros que les llamaban “los Arbeys” que ubicado en la cabecera municipal de Policarpa empezaron a controlar la zona, como hasta el 2014. En Sánchez, también se armó un grupo conocido, llamado “La Pachita”. Con ellos el gobierno no llegó a ningún Acuerdo y después de la Firma, siguen en el territorio, al igual que los “Helenos” (ELN), que siguen por estas tierras y el ejército que antes tenía una presencia constante, ahora solo hace recorridos por periodos cortos en el Municipio (Luis Guevara, líder comunitario, entrevista con la autora, corregimiento de Sánchez, 22 de agosto de 2018).

De modo que la primera falla en la fase operativa del Acuerdo de Paz con respecto a la violencia, continúa siendo la ausencia del Estado en las zonas sensibles y marginales, lo que continúa permitiendo la proliferación de grupos paraestatales. Sobre este particular, los jóvenes consideran que, si no hay paz, si siguen grupos ilegales actuando en el territorio es imposible terminar también con el cultivo.

A ningún grupo le interesa que la coca se acabe, por eso ellos no dejan organizar a la gente, las Bacrim no lo dejan organizar a la comunidad, es difícil ese tema, hay amenazas y muertes de los líderes sociales. Aunque el campesino piense que es bueno salir de la coca, los grupos no lo dejan, por eso la coca va a seguir (Nelly García, lideresa comunitaria, entrevista con la autora, vereda El Cocal 10 septiembre de 2018).

Una de las grandes dificultades que existe para los jóvenes de Sánchez, y quizá para los jóvenes raspachines de Colombia en general, es su baja participación en las políticas del gobierno, al ser una población flotante, muchas veces sin tierra y que dependen del cultivo de los campesinos para trabajar, no son mantienen una activa organización que solicite al Estado la cobertura de sus demandas, precisamente, esta falta de organización hace que pasen desapercibidos en la implementación de los programas que buscan la sustitución de los cultivos. Aunque el gobierno contempla, dentro del PNIS, la cobertura y ayuda a familias recolectoras, a través de asistencia alimentaria y opciones de empleo temporal, los jóvenes de Sánchez no conocen sobre estos beneficios y tampoco han llegado a la comunidad. Sara Clemente, una joven de 18 años, nos cuenta lo que sabe sobre estos programas:

Yo no he oído que el gobierno diga nada sobre los raspachines, nosotros también dependemos de la coca y mantenemos a las familias que están fuera, pero las ayudas si las dan son para el campesino que tiene coca, no para los que trabajamos en esto, aunque para los dueños del cultivo tampoco se escucha de ayudas (Sara Clemente, joven raspachín, entrevista con la autora, vereda las Varas, 11 de octubre de 2018).

Este relato evidencia que el joven raspachín que no tiene coca, no es sujeto de las políticas públicas que buscan el fin de esta economía. Aunque la población flotante se contempla dentro del programa PNIS, y se mencionan beneficios para este grupo, los entrevistados desconocen sobre el tema. Debido a su movilidad los jóvenes raspachines no constituyen un grupo organizado para reclamar derechos como pueden serlo los campesinos. Del mismo

modo, una de las grandes dificultades en la implementación del PNIS, continúa siendo la criminalización de los cultivadores, de los aparceros y de los recolectores.

Frente a la propuesta del Estado de terminar con los cultivos ilícitos y para conocer cómo piensan su vida en el campo sin coca, se les preguntó a los jóvenes si creían que los planes de sustitución de cultivos ilícitos de la coca que adelanta el gobierno podrían funcionar. La mayoría de los entrevistados cree que los planes de sustitución de cultivos no funcionarían o como mucho dudan. En general, los jóvenes comentan que la coca no se va a acabar y que la única forma de acabarse sería que esta se vuelva legal para que los grupos armados dejen de tener interés. Del mismo modo, los jóvenes piensan de forma bastante tajante que con el acuerdo de paz no se van a dar más oportunidades laborales que las que ofrece la coca. De hecho, al pedirles que piensen en un campo sin coca, los entrevistados no tienen percepciones positivas, su preocupación principal es la reducción del único espacio laboral que conocen que funciona. Margarita Rosales comenta:

No creo que los planes de sustitución funcionen, la coca nunca se va a acabar.

Después de la firma yo creo que, si es que se diera eso de la sustitución de cultivos y el acabar la coca, los jóvenes estaríamos mal, porque estaríamos desempleados. Hace años, por ejemplo, cuando fumigaron la coca, la gente se fue a las ciudades, hubo desplazados, pero las condiciones no eran buenas. El campo sin coca no sería atractivo para los jóvenes, porque ya no ganaríamos los 8 mil pesos que pagan por arroba cosechada, sino que tendríamos que ganar un jornal, 20 mil pesos que es lo que se gana en otras partes, eso si es que hubiera trabajo, porque aquí en el campo lo que se da mejor es la coca (Margarita Rosales, campesina cocalera, entrevista con la autora, vereda El Cocal, 11 de septiembre de 2018).

El campo sin coca se presenta como un escenario de pobreza y de inestabilidad laboral. Al ser este un territorio cercano a una reserva ecológica, en la que aún existen terrenos baldíos, los jóvenes señalan que la coca se podría trasladar a nuevos territorios. Esta percepción coincide con el “efecto globo”, descrito por De Rementería (2003), que ocasiona, la aplicación de fuertes medidas de erradicación por parte del Estado. Los jóvenes entrevistados son una generación que no conoce un cultivo diferente al de la coca, es ésta la que solventa su economía y la de sus familias, de ahí que tampoco vean en la migración o en la incursión en otros espacios laborales mayores oportunidades. “yo no sé qué piensan otros jóvenes, pero yo

aquí me quedo” (Carlos García, joven raspachín, entrevista con la autora, vereda el Cocal, 17 de octubre de 2018).

En cierta medida, puede vislumbrarse en ellos un cierto temor a reemplazar los cultivos, en eliminar su principal fuente de ingresos y no encontrar una respuesta efectiva en los compromisos del gobierno. Aunque sus respuestas parecen claras con respecto a la apuesta que hacen por la continuidad de los cultivos de coca también acabamos percibiendo inquietud a que un cambio en la situación actual, es decir, en el modelo de negociación del gobierno, termine provocando que la erradicación voluntaria y concertada que propone la implementación del PNIS dé paso, nuevamente, a políticas de erradicación más agresivas como la erradicación manual y el uso de glifosato. Si esto se produjera, el escenario se volvería mucho más complejo, pero sobre todo estaría marcado por la pobreza de la que tratan de huir en permanencia.

Conclusiones

Las condiciones territoriales de la pequeña comunidad de Sánchez, en el municipio de Policarpa (Nariño), con presencia de actores armados, propios del conflicto armado interno colombiano, y con un aislamiento geográfico y económico del resto del país durante décadas, han facilitado la implantación del cultivo de coca desde mediados de los años 2000. Esta región del Pacífico Sur, mantiene grandes extensiones con plantaciones ilícitas, las cuales no pertenecen a grandes terratenientes, sino que por el contrario corresponden a familias campesinas con pequeñas parcelas insertas en el primer eslabón del narcotráfico.

Teniendo en consideración esta conjugación de economía ilegal, conflicto y marginalidad, la investigación trató de contestar a la pregunta: ¿qué implicaciones tiene para los jóvenes del corregimiento de Sánchez, a nivel de desventajas sociales y laborales el estar inmersos en una economía basada en la producción de coca? Para darle respuesta, se analizó de manera general la evolución del cultivo desde su implantación hasta el presente, prestando atención a la relación que establecen las familias con el Estado y con los grupos armados. En cuanto a los jóvenes, la investigación trató de establecer cómo impacta la economía cocalera en sus aspiraciones futuras y laborales. Igualmente, se consideraron las inquietudes que despierta para las familias agrícolas y sus jóvenes el Acuerdo de Paz firmado en la Habana en el 2016, que contempla la supresión de los cultivos ilícitos del campo colombiano.

En definitiva, la investigación nos ha permitido constatar, que la conjunción entre desigualdad estructural y conflicto armado ha empujado a que los jóvenes de Sánchez tengan una inserción laboral direccionada exclusivamente al ingreso y continuidad en las actividades agrícolas relacionadas con la siembra de la coca. Si bien es cierto que los jóvenes de este corregimiento logran una independencia económica a edades muy tempranas y eso les permite acceder a bienes y consumos de ocio que no son posibles para sus pares en otros contextos; también es cierto que acaban inmersos dentro de una economía de mercado agresiva y regulada por el conflicto, generadora de dependencias externas y, sobre todo, que no les saca del círculo de la marginalidad, pues no dejan de ser peones dentro del primer nivel en el que se desarrolla y expande el modelo productivo ligado a la coca. Para llegar a esta conclusión la investigación tomó en consideración varios hallazgos realizados durante el trabajo de campo, en relación a la cotidianeidad de las familias agricultoras con respecto al cultivo y en relación a la motivación de los jóvenes de permanecer en este tipo de agricultura.

Para empezar, es necesario reconocer que, el impacto de la globalización se evidencia en Sánchez, a partir de la vinculación de esta economía rural en el mercado internacional ilegal de las drogas, dando forma a un modo intensivo de agricultura que puede sostenerse gracias a la existencia de una amplia red de comercialización que utiliza la salida hacia el Pacífico para su comercialización. La disponibilidad del mercado ha llevado a las familias a adoptar el manejo de agroquímicos que aseguran la producción, a la vez que basan gran parte de la rentabilidad de esta agricultura en la autoexploración familiar; en especial en el trabajo de niños y jóvenes.

La llegada de la coca implica, por lo tanto, un cambio en el modo de producción de las familias agricultoras de Sánchez, que buscan ahora, más allá de la satisfacción de sus necesidades básicas, la generación de excedentes económicos, pues la agricultura cocalera es mucho más rentable que la agricultura de productos lícitos. Esta necesidad de producir a mayor escala, también se evidencia en la subdivisión de las parcelas; a pesar de que la propiedad de la tierra de las familias no es superior a las 6 hectáreas, existen propietarios individuales dentro de un mismo predio.

Del mismo modo, este cambio de mentalidad hace que las familias dejen de producir cultivos tradicionales de autoconsumo para abastecer con el nuevo producto un mercado en constante expansión. Detrás de este abandono agrícola lícito, se encuentra la pérdida de la soberanía alimentaria de las familias. Resulta evidente que los campesinos tienen sobrevalorada la capacidad adquisitiva que les permite la coca, esto le ha llevado a comprar la mayoría de los productos agrícolas que consumen, a pesar de existir la posibilidad de sembrarlos en el territorio, fragilizado su acceso a la alimentación en momentos en los que se han producido fumigaciones masivas con glifosato. Otro cambio que evidencia este cambio de mentalidad, se relaciona con el abandono de la actividad minera mediante el barequeo, actividad desarrollada desde la época colonial. Esta forma de minería solamente ha reaparecido en momentos de crisis de la economía de la coca, debido a problemas como la erradicación forzosa o el enfrentamiento de los grupos armados; factores que regulan el mercado cocalero.

Por otro lado, y como señalamos inicialmente, el cultivo de coca implica que las familias agrícolas se relacionen de manera particular con el Estado y con los grupos armados. Con respecto a la primera relación tenemos que, los campesinos, tal como señalaban Duncan

(2013) y Dombois (1998), sufren una fuerte criminalización que se evidencia en la implementación de políticas de erradicación forzosa en su territorio. Estas políticas se aplicaron con fuerza entre los años 2004 y 2009, incluyendo la fumigación con glifosato y la erradicación manual. Aunque los gobiernos de turno han combinado las políticas de erradicación forzosa, con planes de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, intentando frenar de esta manera la siembra, estos no han funcionado y los plantíos están lejos de disminuir, pues la idea generalizada de la rentabilidad de la economía atrae a nuevos productores.

Con respecto a la segunda relación, el trabajo de campo pone en evidencia que las familias cocaleras no mantienen una relación directa con los grupos armados, deben cumplir, sin embargo, con algunos parámetros, como respetar la autoridad del grupo que ejerce control en el territorio y vender su producto al intermediario que el grupo designa para este fin. Del mismo modo, el ajuste de cuentas entre los grupos en conflicto con una constante lucha por el control del territorio pone a las familias en una situación de vulnerabilidad de sus derechos que genera desplazamientos forzados, muertes, secuestros y violencia permanente.

Por otro lado, aunque la investigación demuestra que el modo de producir la tierra sigue estando ligado a la mano de obra familiar, el auge cocalero obliga a las familias a contratar mano de obra extra, especialmente de jóvenes “raspachines”, que se encargan de la recolección de la hoja de coca. Algunos de estos jóvenes son parte de la migración interna que atrajo el boom cocalero en esta región, otros provienen de las mismas familias de la comunidad que buscan una fuente de empleo segura. Precisamente, y en relación con nuestra pregunta investigativa, tenemos que los jóvenes de Sánchez encuentran en sus familias un modelo profesional a seguir, pues consideran el continuar inmersos en la agricultura ilegal, como una forma de movilidad social. Esta idea es reforzada también desde la cultura del narcotráfico que repercute en los jóvenes y su imaginario de éxito.

La socialización profesional desde la familia se presenta porque los jóvenes de Sánchez participan de actividades agrícolas en las parcelas familiares como un aporte al sustento del hogar desde que son niños y a la par desarrollan destrezas que les permiten una emancipación económica bastante temprana. Aunque los jóvenes son conscientes de formar parte de una economía ilegal, ven en ser cocaleros un modelo de movilidad social ascendente y sus intenciones son continuar en esta economía y devenir en agricultores independientes.

El difícil acceso a la tierra puede frenar estas ambiciones por lo que los jóvenes que no logran tener sus propias parcelas, rentan la tierra o trabajan como “amedieros”, pues la idea de ser campesino cocalero les llena de mayores expectativas, pues nos existen otras fuentes de empleo tan rentables como la coca. Esta ambición los lleva a abandonar otras formas de movilidad social como la educación. Al respecto cabe resaltar que la educación en este medio rural es muy deficiente, los establecimientos educativos son escasos y los que existen no tienen una buena cobertura. La mayoría de jóvenes entrevistados no ha concluido su bachillerato y algunos solo cuentan con educación primaria. Parte de esta dificultad se relaciona con la imposibilidad para acceder a centros educativos, situación que es compleja por la necesidad de los jóvenes de trabajar y por el conflicto armado. Por estas complicaciones los jóvenes de Sánchez no ven en la educación un motor de movilidad social, como sí ocurre con la economía cocalera.

El arraigo hacia esta economía es tal, que la idea de un campo sin coca causa inquietud en los jóvenes en Sánchez. Los jóvenes también son críticos con las actuaciones del gobierno con respecto al nuevo plan de sustitución que supone el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, no solo porque no ha supuesto una disminución de la violencia sino porque consideran que es imposible acabar con la coca. La preocupación por lo tanto no es que deje de sembrar, sino que vuelvan las políticas agresivas como la erradicación manual o el uso del glifosato que se vivieron años antes y que empeoró las condiciones de vida de las familias de todas las veredas.

Las características rurales, anteriormente descritas, limitan las posibilidades de una inserción laboral formal de los jóvenes de Sánchez. De allí, que las proyecciones a futuro y aspiraciones de los jóvenes se relacionen con lograr una independencia económica a través de su continuidad en este espacio laboral. Esto también significa que los jóvenes no logran sortear con éxito las dificultades estructurales que supone vivir en un campo con ausencia estatal, en donde el narcotráfico se impone con sus reglas.

Lista de referencias

- Almario, Oscar. 2002. “Desesclavización y territorialización: el trayecto inicial de la diferenciación étnica negra en el Pacífico sur colombiano, 1749-1810”. En *Afrodescendientes en las Américas, Trayectorias Identitarias*. Editado por Mosquera, Claudia; Pardo Mauricio y Hoffmann, Odile, 45-72. Universidad Nacional de Colombia, Icanh, Ird, Ilsa Bogotá-Colombia.
- Almario, Oscar. 2004. “Dinámicas y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico sur colombiano: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e indígenas y ‘multiculturalismo’ de Estado e indolencia nacional”. En *Conflicto e (in)visibilidad Retos de la gente negra en Colombia*. Editores, Restrepo Eduardo. Y Rojas, Axel. 73-120. Edición en PDF.
- Almario, Oscar. 2009. “De lo regional a lo local en el Pacífico sur colombiano, 1780-1930”. En *Revista de Historia Regional y Local*, 1: 76-123. doi: <https://doi.org/10.15446/historelo.v1n1.9315>
- Álvarez Valdés, Carolina. 2018. “La perspectiva generacional en los estudios de juventud: enfoques, diálogos y desafíos” En *Revista Última Década*, 26 (50): 40-60. doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362018000300040>
- Arias, Gerson y Prieto Carlos. 2011. “El Bloque Central Bolívar: Caso de Paramilitarismo y Narcotráfico en Colombia” En *La desmovilización de los paramilitares en Colombia: entre el escepticismo y la esperanza*. Compiladores Restrepo, María y Bagley, Bruce, 327-368. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO).
- Becerra, América. y Hernández, Diego. 2019. “Fascinación por el Poder: Consumo y Apropiación de la cultura por Jóvenes en Contextos de Narcotráfico”. En *Revista Intersticios Sociales*, 17: 259-285. El Colegio de Jalisco.
- Bedoya Garland, Eduardo. 2003. “Las Estrategias Productivas y el Riesgo entre los Cocaleros del Valle de los ríos Apurímac y Ene”. En *Amazonía Procesos Demográficos y Ambientales*. Editores Carlos Aramburu y Eduardo Bedoya, 119-154 CIES. Lima.
- Bérubé, Myriam. 2004. “Derechos Étnicos y territoriales de las comunidades afrocolombianas en los territorios colectivos del Pacífico sur frente al conflicto armado”. En *Dimensiones Territoriales de la Guerra y la Paz*, 721-739. Universidad Nacional de Colombia.

- Bourdieu, Pierre. 2000. "La "juventud" sólo es una palabra." En *Cuestiones de Sociología, de Pierre Bourdieu*, 142-153. Madrid: Editorial Istmo.
- Brito Osuna, Pedro. 2015. "Apuntes teóricos: ¿Qué es el territorio?". En *Revista Sinaloense de Ciencias Sociales*, 16 (41):47-69.
- Cardinale, María Eugenia. 2018. "El narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas". En *Revista Relaciones Internacionales* 37:95-120. doi: [doi:10.15366/relacionesinternacionales2018.37.004](https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2018.37.004)
- Casal, Joaquim. Josep Masjoan y Jordi Planas. 1988. "Elementos para un análisis sociológico de la transición a la vida adulta". En *Revista Política y Sociedad* 1: 97-104. URL: <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO8888110097A>.
- Castrillón, Fernando. 2006. "La coca en el Pacífico colombiano Transformaciones territoriales, culturales, económicas y políticas que configuran un nuevo ciclo de depredación y saqueo". En *Revista Semillas Contexto: Tierra y territorios*, 27-31.
- Ceballos, Marcela. 2003. "Plan Colombia: Contraproductos y Crisis Humanitaria. Fumigaciones y desplazamiento en la frontera con Ecuador". Informe, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES. URL: <http://www.codhes.org/~codhes/images/biblioteca/PlanColombia-Ecuador.pdf>
- CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. 2003. "Policarpa", Boletín informativo Año 7, número 46. Bogotá, Colombia. URL: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_247.pdf
- Coronado, Sergio y Beltrán, Adriana. 2012. "Minería, instituciones jurídicas y acción comunitaria local. Ideas para una lectura crítica de una relación problemática". En *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Editado por Toro, Catalina; Ferro, Julio; Coronado, Sergio y Roa, Tatiana, 263-282. Universidad Nacional de Colombia.
- Cruz, Miguel Antonio. 2008. "Confinamiento: la otra cara de la crisis humanitaria y de derechos humanos". Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES. Año 7. No.46. Bogotá, Colombia.
- De Rementeria, Ibán. 2001 "La Guerra de las Drogas. Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo". Editorial Planeta. Bogotá.
- Defensoría del Pueblo Colombia. 2018. "Análisis de la fase inicial de diseño e implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS". URL: <https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2018/11/Informe-PNIS-2017-para-web-1.pdf>

- Defensoría del Pueblo Colombia. 2016. “Problemática humanitaria en la región pacífica colombiana. Sistema de Alertas Tempranas (SAT)”. URL: <http://defensoria.gov.co/public/pdf/InformePacificoweb.pdf>
- Dombois, Ranier. 1998. “Dilemas organizacionales de las economías ilegales, aproximaciones sociológicas a propósito del mercado de la cocaína”. En *Revista Análisis político*, 33:14-30. Universidad Nacional de Colombia.
- Duffield, Mark. 2004. “Las nuevas guerras en el mundo global” la convergencia entre el desarrollo y seguridad” Ed. Catarata.
- Duncan, Gustavo. 2013. “La división del trabajo en el narcotráfico: mercancía capital y geografía del Estado”. En “*Economía criminal y poder político*”. Editor, Giraldo Jorge, 113-160. Centro de Análisis Político, Universidad EAFIT.
- Durston, John. 1998. “Juventud y desarrollo rural: marco conceptual y contextual”. Documento de trabajo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Naciones Unidas.
- Echandía Castilla, Camilo. 2002. Panorama actual de Nariño. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
- Echeverri, María y Gómez Augusto .1993. “Minería y desarrollo marginal”. En *Colombia Pacífico, Tomo II Pacífico (Región, Colombia)*. Editado por Leyva, Pablo, 271-279. Fondo para la Protección del Medio Ambiente José Celestino Mutis. URL: <https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2093131/>
- Elwer, Georg. 2002. “Mercados de violencia y política de ayuda e intervención”. En *Perspectivas comparadas de mercados de violencia*. Editor Kalulambi, Martín. Bogotá, Universidad Nacional/Alfaomega.
- Escobar, Arturo. 2010. “Territorio de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes” Ed. Samava Impresiones, Popayán, Colombia.
- FAO, Food and Agriculture Organization. 2012. “Marco Estratégico de Mediano Plazo de Cooperación de la FAO en Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe 2012-2015. URL: <http://www.fao.org/3/as169s/as169s.pdf>
- Feixia, Carles. 2006. “Generación XX Teorías sobre la juventud en la era contemporánea”. En *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*. Vol 4, No. 2 Onlineversion. URL: <http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v4n2/v4n2a02.pdf>
- Fernández Such, Fernando. 2001. “La juventud rural”. En *Revista Documentación Social*, 124: 113-160.

- Ferro Medina, Juan Guillermo. 2004. "Las Farc y su relación con la economía de la coca en el sur de Colombia: Testimonios de Colonos y guerrilleros". En *Violencias y Estrategias Colectivas en la Región Andina Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela*. Editado por Sánchez Gonzalo y Lair Eric, 411-422. Grupo Editorial Norma.
- FUNIEP, Fundación para la Investigación, la Educación y la pedagogía regional. 2012. "Memoria Histórica del Desplazamiento Masivo y las Acciones de Resistencia de la Comunidad de Iscuandé en el 2001".
- FUPAD, Fundación Panamericana para el Desarrollo. 2014. "Plan Departamental de Empleo de Nariño". Ministerio de Trabajo República de Colombia.
- Galvis Aponte, Armando. Moyano Támara, Marcelo y Alba Fajardo, Alberto. 2016. "La persistencia +de la pobreza en el Pacífico Colombiano y sus factores asociados" Documentos de trabajo, Banco de la República de Colombia, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER).
- González Cangas, Yanko. 2003. "Juventud rural: trayectorias teóricas y dilemas identitarios". En *Revista Nueva Antropología*. Vol. XIX, 63:153-175. Asociación Nueva Antropología A.C. Distrito Federal, México. URL: <http://www.redalyc.org/pdf/159/15906308.pdf>
- González, Catalina .2003. "Música, identidad y muerte entre los grupos negros del Pacífico sur colombiano" En *Colección Babel, separata de la Revista Universidad de Guadalajara*, 27:1-48.
- Grueso, Libia Rosario. 2000. "El proceso organizativo de comunidades negras en el Pacifico Sur colombiano". Tesis de Maestría, Universidad Javeriana.
- Guerrero Barón, Javier. 2002. "Mercados de violencia" y guerra civil en América Latina en los 90". En *Revista apuntes del Cenes* 22, (34):263-295. URL: <https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/129>
- Gutiérrez, Francisco. Sánchez, Gonzalo. 2006. Prólogo a Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Editorial Norma.
- Hoffmann, Odile. 2002. "Conflictos territoriales y territorialidad negra el caso de las comunidades afrocolombianas". En *Afrodescendientes en las Américas, Trayectorias Identitarias*. Editado por Mosquera, Claudia; Pardo Mauricio y Hoffmann, Odile, 351-368. Universidad Nacional de Colombia, Icanh, Ird, Ilsa Bogotá-Colombia.

- Human Rights Watch Colombia .2010. “Herederos de los paramilitares, La nueva cara de la violencia en Colombia”. URL: <http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/16>
- International Crisis Group. 2014. “El día después de mañana: las FARC y el fin del conflicto en Colombia”. Informe sobre América Latina N°53. 11 de diciembre de 2014 URL: <https://www.refworld.org/es/pdfid/54ef2dae4.pdf>
- Islas, José. 2008. “Juventud: un concepto en disputa” En *Teorías sobre la Juventud, las Miradas de los clásicos*. Coordinadores, Pérez José, Valdez María, Herlinda Suárez, 9-33. Universidad Autónoma de México.
- Kaldor, Mary. 2001. “Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global”. Barcelona, Tusquest Editores
- Kalulambi, Martín. 2003. Introducción a Perspectivas comparadas de mercados de violencia. Editor Kalulambi, Martín Bogotá, Universidad Nacional/Alfaomega.
- Kay, Cristóbal. 2009. “Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad?”. En *Revista Mexicana de Sociología*, 71 (4): 607-645 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México. URL: <http://hdl.handle.net/1765/38935>
- Kessler, Gabriel. 2006. “La investigación social sobre juventud rural en América Latina. Estado de la cuestión de un campo en conformación”. En *Revista Colombiana de Educación*, 51: 16-39. Universidad Pedagógica Nacional Bogotá, Colombia. URL: <http://www.redalyc.org/pdf/4136/413635245002.pdf>
- Laserna, Roberto. 2007. “De la negociación forzada a la concertación cooperativa. Pautas de concentración sobre el problema de la coca”. Mimeo CERES-PIEB, Cochabamba, Bolivia.
- Laserna, Roberto. 2011. “El Fracaso del Prohibicionismo, Estudios socioeconómicos para una historia de las políticas antidrogas en Bolivia”. Fundación Vicente Pazos Kanki. La Paz, Bolivia.
- Leal Buitrago, Francisco. 2006. “La política de seguridad democrática 2002-2005”. En *Revista Análisis Político* 19 (57):3-30. URL: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/46270>.
- Leal, Claudia. Y Restrepo, Eduardo. 2003. “Unos bosques sembrados de aserríos: historia de la extracción maderera en el Pacífico Colombiano”. Editorial Universidad de Antioquia, Colcencias, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia-sede Medellín.

- Llambi Luis. y Edelmira Pérez. 2007. “Nuevas ruralidades y viejos campesinismos. Agenda para una nueva sociología rural latinoamericana. Agricultores familiares y la nueva ruralidad latinoamericana” En *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 4 (59):37-61.
- Machado, Absalón. Botello Silvia. 2013. “La Agricultura Familiar en Colombia Informe del Proyecto Análisis de la Pobreza y de la Desigualdad en América Latina Rural”. Documento de Trabajo, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Social (RIMISP).
- Marcus, George. 2001. “Etnografía del sistema mundo. El Surgimiento de la etnografía multilocal”. En *Revista Alteridades* 11 (22):111-127. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UNAM-I).
- Martínez Valle, Luciano. 2013. “La Agricultura Familiar en el Ecuador, Informe del Proyecto Análisis de la Pobreza y de la Desigualdad en América Latina Rural”. Documento de Trabajo, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Social (RIMISP).
- Massé, Frédéric y Camargo Johanna. 2012. “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia.”. CITpax Colombia, Observatorio Internacional DDR. Bogotá D.C., Colombia.
- Matijasevic Teresa y Ruiz Alexander. 2013. “La construcción social de lo rural” En *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, 5: 24-41 Argentina.
- MINGA, Asociación para la Promoción Social Alternativa. CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. 2004. “Informe de Observación de la Misión en la Frontera Colombo Ecuatoriana”.
- Misse, Michel.2013. “Estado y mercados ilegales en Latinoamérica: reflexiones a partir del concepto de mercancía política”. En “*Economía criminal y poder político*”. Editor, Giraldo Jorge, 9-32. Centro de Análisis Político, Universidad EAFIT.
- Münkler, Herfried. 2005. “Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia”, Ed. Siglo XXI.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 2002. “Panorama actual de Nariño”. Publicación del Fondo de Inversión para la Paz Vicepresidencia de la República de Colombia. URL: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/narino/narino.pdf
- Observatorio Internacional DDR y Centro Internacional de Toledo para la paz, CITpax. 2012. “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia” V Informe. URL: <https://media.businesshumanrights.org/media/documents/files/media/documents/actores-armados-ilegales-y-sector-extractivo-2012.pdf>

- Osorio, Edilma. 2016. “jóvenes territorio y territorialidades”. En *Jóvenes Territorio y Territorialidades*. Editores Gutiérrez Martha y Tatis Javier, 17-44 Ed. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia.
- Osorio, Flor. Jaramillo, Olga y Orjuela, Amanda. 2011. “Jóvenes rurales: identidades y territorialidades contradictorias. Algunas reflexiones desde la realidad colombiana”. En *Énfasis, Boletín del Observatorio Javeriano de Juventud*, 1: 1-40. Universidad Javeriana. URL:
https://www.javeriana.edu.co/documents/2271879/2378455/OJJ_Tema+central_b1.pdf/a98a88a9-f627-42da-bc69-8065fbedb493
- Pérez, Juan y; Mora Minor. 2004. “De la oportunidad del empleo formal al riesgo de exclusión laboral. Desigualdades estructurales y dinámicas en los mercados latinoamericanos de trabajo” En *Revista Alteridades*, 14 (28): 37-49. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
- Plesnicar, Lorena. 2013. “El núcleo juventud en el discurso de la Unesco (1985)”. En *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 24: 93-110. doi:
[doi:10.4206/rev.austral.cienc.soc.2013.n24-05](https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2013.n24-05)
- PUND, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003. “El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003”. Bogotá Colombia.
- PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2010. “Nariño: Análisis de la Conflictividad”. Área de Paz, desarrollo y reconciliación. Asdi.
- PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2014. “Nariño, análisis de conflictividades y reconstrucción de paz”.
- PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2015. “Perfil Productivo municipio de Policarpa – Nariño”. URL:
https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_policarpa
- Pontes, Paulo. 2007. “A geopolítica das drogas na América Latina”. En *Revista Em Pauta*, 19:66-88. Facultad de Serviço Social da Universidad do Estado do Rio de Janeiro.
- Pontes, Paulo. 2012. “Plantaciones ilícitas como fuente de ingresos alternativa y expresión de desigualdad: el caso del cultivo de cannabis en el nordeste de Brasil” En *Revista Estudos Sociológicos*, (XXX), 88: 143-169. URL:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59826851005>

- Pulido, Alejo. 2015. "Los territorios frente a la minería. Debates y alternativas alrededor de la problemática minera en Colombia" Corporación para la Educación y la Investigación Popular Instituto Nacional Sindical. CEDINS. Bogotá Colombia.
- Reguillo, Rossana. 2000. "Pensar los jóvenes. Un debate necesario". En *Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto*, 19-47. Colombia: Grupo editorial Norma.
- Reyes Sosa, Hiram. Larrañaga Egilegor, Maider y Valencia Garate, José. 2017. "La representación del narcotraficante en jóvenes sinaloenses". En *Revista Región y Sociedad*, 29 (69): 69-88. doi: <https://doi.org/10.22198/rys.2017.69.a269>
- RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Social y FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 2014. "La agricultura familiar en América Latina Un nuevo análisis comparativo".
- Roberti, María. 2015. "La nueva condición juvenil en tiempos de desestructuración: Un estudio de las trayectorias laborales de los jóvenes del barrio Aluvi3n y su imbricaci3n con otras esferas vitales (La Plata, Pcia de Buenos Aires)". Tesis de Posgrado, Universidad Nacional de La Plata.
- Rua, Carlos. 2002. "Territorialidad ancestral y Conflicto armado". En *Afrodescendientes en las Am3ricas. Trayectorias sociales e identitarias. 150 a3os de la abolici3n de la esclavitud en Colombia*. Editores, Mosquera, Claudia, Prado Mauricio y Hoffmann Odile, 561-572. UN-ICANH-IRD-ILSA. Bogot3.
- Ruano Jim3nez, Alba Jakeline. 2017. "La experiencia socio-pol3tica de la construcci3n de la paz" En *Revista de Sociolog3a, Universidad de Nari3o* Vol. VI. 157-183.
- Salas, Minor. y de Oliveira Orlandina. 2014. "Los caminos de la vida: acumulaci3n, reproducci3n o superaci3n de las desventajas sociales en M3xico". En *Revista Mexicana de Ciencias Pol3ticas y Sociales*. Universidad Nacional Aut3noma de M3xico Nueva 3poca, 220: 81-116. doi: [https://doi.org/10.1016/S0185-1918\(14\)70802-5](https://doi.org/10.1016/S0185-1918(14)70802-5).
- Sampedro, Rosario. 2000. "Mujeres j3venes en el mundo rural" En *Revista Estudios de Juventud*. Coordinador, Prieto Rafael, 48: 83-90. URL: <http://www.injuve.es/sites/default/files/revista-48-capitulo8.pdf>
- S3nchez, David. Salcedo Camilo y Rodrigues de Souza, Yamira. 2014. "Juventudes rurales: oportunidades para la construcci3n de nuevos proyectos societales en Latinoam3rica" En *Juventud participaci3n y desarrollo social en Am3rica latina y el Caribe*, 86-104. Escola Regional Most Unesco Brasil.

- Sandoval, Carlos. 1996. "Investigación Cualitativa". En *Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social*. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.
- Sili, Marcelo. Fachelli, Sandra y Meiller, Andrés. 2016. "Juventud Rural: factores que influyen en el desarrollo de la actividad agropecuaria. Reflexiones sobre el caso argentino". En *Revista de Economía y Sociología Rural*, 54(4): 635-652. doi: <https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790540403>
- Souto Sandra. 2007. "Juventud, teoría e historia: la formación de un sujeto social y de un objeto de análisis". En *Revista Historia Actual Online*,13: 171-192.
- UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2011. "Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca 2010". URL: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia-cocasurvey2010_es.pdf
- UNODC, Oficina de las Naciones Unidas Contra la droga y el Delito. 2012. "Colombia Monitoreo de los cultivos de coca 2011. URL: https://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Colombia/Censo_cultivos_coca_2011.pdf
- UNODC, Oficina de las Naciones Unidas Contra la droga y el Delito. 2015. "Colombia Monitoreo de los cultivos de coca 2014" URL: https://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2014_web.pdf
- UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos y Ministerio de Justicia de Colombia. 2016. "Atlas de la Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Nariño". URL: <http://www.odc.gov.co/Portals/1/politicregional/Docs/2016/REATLAS0639narino.pdf>
- UNODC, Oficina de las Naciones Unidas Contra la droga y el Delito. 2017. "Colombia Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016". URL: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf
- USAID, Colombia. Presidencia de la Republica de Colombia. Centro de Coordinación de Acción Integral, (CCAI). CREA Colombia. Oportunidad Estratégica. 2010. "Diagnóstico, Las Zonas de Nariño Afectadas por la Violencia"
- Valencia Peña, Inge y Silva Chica, Laura.2018. "Entre subsistencias y neoextractivismos locales. Dinámicas mineras en el Norte del Cauca, Colombia". En *Revista Estudios Políticos*, 52: 172-193. doi: <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n52a09>

Vargas Meza, Ricardo. 2010. “Desarrollo Alternativo en Colombia y Participación Social: Propuestas hacia un cambio de estrategias”. Corcas Editores Ltda.

Vásquez, Jorge. 2010. “Subjetividades juveniles y discurso del éxito: entre la emancipación y la institucionalización de las prácticas”. En *Disertaciones. Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social*, 3 (1): 37-57. URL:

<https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/view/3937>

Villatoro, Carolina. 2012. “Aspectos socioculturales e imágenes del narcotráfico”. En *Revista Imagonautas* 3 (1): 56-75.

Weisheimer, Nilson. 2009. “Situación Juvenil en la Agricultura Familiar” Tesis de doctorado. Universidad Federal de Rio Grande De Sul.

Otros documentos

- Albaladejo, Angelika. 2017. “¿Subestima Colombia la magnitud de la disidencia de las FARC?”. Insight Crime. URL: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/subestima-colombia-magnitud-disidencia-farc/>
- Álvarez Vanegas, Eduardo. Prado Calderón, Daniel y Cajiao Vélez, Andrés. 2018. “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC” Fundación Ideas para la Paz (FIP).
- Breton, Víctor. 1993. “¿De campesino a agricultor? La pequeña producción familiar en el marco del desarrollo capitalista”. En *Noticiero de Historia Agraria*, 5:127-159.
- Diario el Tiempo. 2015. “Los más de mil muertos que se llevó el río Patía” (02/12/2015) <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16447393>
- FIP, Fundación Ideas para la Paz. 2018. “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”. Informe 04. URL: http://ideaspaz.org/media/website/FIP_sustitucion_final.pdf
- González Posso, Camilo. 2016. “Acuerdos de la Habana y la nueva política sobre los cultivos ilícitos” Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
- Guarín, Sergio. Tovar, Paulo. Amaya, Ana María. 2018. “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: cambiar el rumbo para evitar el naufragio, Balance bajo la metodología de observación y medición El Siriri”. Informe 05, Documento de Trabajo, Fundación Ideas para la Paz FIP. URL: http://ideaspaz.org/media/website/sirirPDET_Final.pdf
- Municipio de Policarpa. 2011. “Plan de desarrollo un Policarpa mejor 2012-2015”. URL: <http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/policarpa-pd-2012-2015.pdf>
- Municipio de Policarpa. 2015. “Plan de desarrollo Policarpa Renace 2016-2019”
- Vega, Ana Karina. Rodríguez Enciso, Lina Johana. Galindo Jerez, María Cristina. González Ramírez, Rubén Darío. Salazar Valencia, William y Moreno Perea, Wilman. 2017. “Análisis de la fase inicial de diseño e implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS”. Defensoría del Pueblo, Bogotá, Colombia.
- Verdad Abierta. 2018. “Policarpa está perdiendo su apuesta por la paz” <https://verdadabierta.com/policarpa-esta-perdiendo-su-apuesta-por-la-paz/>